



Fascículo VII

Año 1952

INDICE ALFABETICO

37339

Agua, gas y electricidad (Industrias del).—*Montepío Laboral.*—Estatutos. Rectificación del texto. (R.) Referencia 407.

Accidentes del trabajo.—*Revisión de Rentas.*—Normas sobre computación del plazo para pedir la revisión de rentas por incapacidad permanente y muerte. (R.) Referencia 410.

Carbón (Minas de).—*Servicio militar.*—Se excluye temporalmente de este servicio al personal del interior de las minas. (D.) Referencia 404.

Cargas familiares.—*Denominación.*—Se modifica. (O.) Referencia 405.

Comercio en general.—*Pren- das de trabajo.*—Para los mozos de almacenes de

aceite y carbón. (R.) Referencia 408.

Construcción y Obras Públicas.—*Comités de Seguridad e Higiene.*—Normas aclaratorias. (R.) Referencia 403.

Extractivas (Industrias).—*Montepío Laboral.*—Estatutos.—Rectifica los arts. 18, 33, 37, 41, 77 y 86. (R.) Referencia 401.

Familiar (Plus).—*Denominación.*—Cambio de denominación. (O.) Referencia 405.
—*Tope máximo.*—Su supresión. (O.) Referencia 405.

Ministerio de Trabajo.—*Reglamento Orgánico.*—Texto. (D.) Referencia 402.

Potasa (Minas de).—*Servicio militar.*—Se excluye temporalmente de este servicio al personal del inte-

rior de las minas. (D.) Referencia 404.

Plomo (Minas de).—*Servicio militar.*—Se excluye temporalmente de este servicio al personal del interior de las minas. (D.) Referencia 404.

Seguros y subsidios sociales.—*Cuota única.*—Normas sobre cotización de los trabajadores a los que no se les dió de baja oportunamente. (O.) Referencia 406.

Siderometalúrgica (Industria).—*Montepío Laboral.*—Estatutos. Texto. (O.) Referencia 399.

—*Estatutos.*—Rectifica los artículos 39, 62, 86, 113 y 2.ª Transitoria. (R.) Referencia 400.

—*Estatutos.*—Rectifica los artículos 62, 75 y 86. (R.) Referencia 409.

INDICE CRONOLOGICO

JULIO 1952

<u>Día</u>		<u>Ref.</u>
31	Industria Siderometalúrgica.—Montepío Laboral. (O.)	399

AGOSTO 1952

4	Ministerio de Trabajo.—Reglamento Orgánico. (D.)	402
---	--	-----

SEPTIEMBRE 1952

12	Industrias Extractivas.—Montepío Laboral. (R.)	401
12	Industrias Siderometalúrgicas.—Montepío Laboral. (R.)	400
25	Construcción y Obras Públicas.—Seguridad e Higiene. (R.)	403
26	Minas de Carbón.—Reglamento de Trabajo. (D.)	404
27	Accidentes del Trabajo.—Revisión de Rentas. (R.)	410

OCTUBRE 1952

10	Comercio.—Reglamento de Trabajo. (R.)	408
11	Seguros y Subsidios Sociales.—Cuotas. (O.)	406
16	Industrias Siderometalúrgicas.—Montepío Laboral. (R.)	409
16	Plus Familiar.—Denominación y límite máximo. (O.)	405
19	Agua, Gas y Electricidad.—Montepío Laboral. (R.)	407

2.º Aportar los documentos y datos que por la Entidad se les exija para la concesión de beneficios y prestar con exactitud y fidelidad las declaraciones que les fueran exigidas con el mismo fin.

TITULO III

El gobierno de la Institución

CAPITULO PRIMERO

De los Organos del Gobierno

Art. 20. Los Organos de gobierno de la Institución son los siguientes:

- a) La Asamblea General.
- b) La Junta Rectora.
- c) Las Comisiones o Ponencias Provinciales.

Art. 21. Todo lo relativo a la composición de los distintos Organos de gobierno, condiciones personales, forma de elección y nombramiento, duración del mandato y cese de sus Vocales; la provisión de vacantes, asistencia de Vocales natos y designación de Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios de actas, se regularán conforme a las normas de la Orden de 30 de abril de 1952.

Art. 22. Los Organos de gobierno de la Institución tendrán las facultades y competencia que para cada uno de ellos se señala en la Orden de 30 de abril de 1952.

Art. 23. Las reuniones de los Organos de gobierno centrales serán ordinarias o extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias serán con-

- a) Las de la Asamblea General, una vez al año.

- b) Las de la Junta Rectora, una vez cada trimestre.

Las reuniones extraordinarias serán convocadas por propia iniciativa del Presidente y por proponerlo el Director o la tercera parte de los componentes del respectivo Organos de Gobierno; las de la Asamblea General, además por acuerdo de la Junta Rectora.

Las convocatorias para las reuniones extraordinarias de la Asamblea General deberá ser sometidos a la previa aprobación del Servicio de Mutualidades Laborales, así como su orden del día, cuyos asuntos expresamente consignados serán los únicos que podrán tratarse.

Las Comisiones y Ponencias Provinciales celebrarán sesión cada quince días siempre que existan expedientes de prestaciones pendientes de resolver o informar; también podrán celebrar sesión por decisión del Presidente de la Comisión Provincial o del Delegado Provincial por existir asuntos urgentes a deliberar.

Art. 24. Las convocatorias de los Organos centrales y de las Comisiones Provinciales se harán por su Presidente, y las de las Ponencias, por el Delegado Provincial. Todas ellas se harán por duplicado, a fin de dejar un ejemplar en poder del convocado y de que el otro sirva para poder acreditar en cualquier circunstancia el momento en que fué recibida por su destinatario.

A las convocatorias se acompañará el orden del día de la sesión correspondiente y se efectuarán con los siguientes plazos de antelación.

- a) La Asamblea General, con veinte días.
- b) Las de la Junta Rectora, con ocho días.
- c) Las de las Comisiones y Ponencias Provinciales, con cuarenta y ocho horas.

Art. 25. Las reuniones de los Organos centrales y Comisiones Provinciales podrán celebrarse en primera al señalado para la convocatoria. Desde el momento en que debiera celebrarse en primera al señalado para la segunda, mediarán los siguientes espacios de tiempo:

- a) En la Asamblea General, veinticuatro horas.
- b) En la Junta Rectora y Comisiones Provinciales, media hora.

Art. 26. Cuando se encuentre reunida en el domicilio social la totalidad de los miembros de un Organos de Gobierno, sin previa convocatoria, podrán celebrar sesión y tener plena validez los acuerdos adoptados sin más requisito que la aprobación previa y por unanimidad de declarar la conveniencia de celebrarla en tal forma y de tratar en ella los asuntos que concretamente se determinen. De estas reuniones deberá también levantarse el acta correspondiente.

Art. 27. Para que los Organos de Gobierno Centrales y Comisiones Provinciales se consideren válidamente constituidos será necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus componentes, en primera convocatoria; y un mínimo de la tercera parte, en segunda.

Art. 28. Por lo que respecta a las Ponencias provinciales, será precisa la asistencia de los dos Vocales que las constituyen, en única convocatoria.

Si no pudiera concurrir a la reunión el Vocal electivo, lo comunicará con la máxima urgencia al Delegado provincial, con el fin de que por éste se convoque al Vocal suplente. Si tampoco acudiese éste, se suspenderá la sesión, procediéndose por el Delegado a nueva citación del titular y, en su caso, del suplente.

Si a esta nueva reunión tampoco acudiese ninguno de los dos Vocales, el Delegado elevará el expediente o expedientes de prestaciones, debidamente informados, a la Sede Central para su resolución por la Junta Rectora.

Art. 29. Los miembros de los Organos de Gobierno podrán hacer uso de la palabra:

- 1.º Para una cuestión previa o de orden.
- 2.º Para defender o impugnar una proposición.
- 3.º Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.
- 4.º Para rectificar una sola vez cuando hayan tomado parte en algún debate.

Art. 30. Cuando un miembro de los Organos de Gobierno se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido sino para ser llamado al orden por la Presidencia.

El Presidente podrá retirar la palabra al Vocal de los Organos de Gobierno a quien hubiese llamado al orden e incluso ordenará su expulsión del local, si ello fuese necesario.

Los acuerdos de las Ponencias provinciales y de las Comisiones provinciales se adoptarán por mayoría de votos entre los miembros que se hallen presentes. Cuando resulte empate en una votación se repetirá ésta, con un intervalo de quince minutos, en que se suspenderá la sesión para que los asistentes puedan deliberar; si en la segunda

votación hubiese también empate, decidirá el Presidente.

Las votaciones serán nominales cuando así lo solicite la tercera parte de los asistentes.

Los acuerdos de las Ponencias provinciales se adoptarán por unanimidad. Si hubiera discrepancia entre sus dos componentes, se remitirá el expediente de que se trate a la Junta Rectora para su resolución.

Art. 32. De las deliberaciones de los Organos de Gobierno se harán constar en el libro de actas correspondiente—debidamente diligenciado por la Delegación de Trabajo—las conclusiones y acuerdos adoptados, autorizándose las actas con las firmas del Presidente y Secretario.

Las actas de las Ponencias serán autorizadas por sus dos componentes.

Art. 33. Los miembros de los Organos de Gobierno percibirán por su asistencia a las reuniones reglamentarias convocadas dietas de asistencia o de asistencia y desplazamiento, según los casos. La cuantía de estas dietas será fijada por la Junta Rectora.

CAPITULO II

Del Presidente y Vicepresidente

Art. 34. En el Presidente de los Organos de Gobierno Centrales concurre la alta representación y orientación de la Entidad, de la que es primera jerarquía y máxima figura representativa de los asociados.

Serán funciones del Presidente o de quien reglamentariamente le sustituya:

1.ª Representar a la Institución, en unión del Director, en todos los actos y contratos que se celebren.

2.ª Convocar y presidir las reuniones de los Organos de Gobierno Centrales, dirigir sus discusiones y decidir las votaciones en caso de empate.

3.ª Fijar el orden del día de las sesiones de los Organos Centrales.

4.ª Ejercitar funciones de fiscalización en todos los servicios y actividades de la Institución, cuando lo considere oportuno, asistido siempre del Director.

5.ª Designar, de acuerdo con la Junta Rectora, las personas que deban cubrir interinamente, hasta la primera reunión de la Asamblea General, las vacantes que se produzcan en aquélla.

Art. 35. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales atribuciones y deberes, en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento u otra cualquier circunstancia que así lo requiera, como igualmente en aquellos casos en que mediare delegación.

CAPITULO III

De los Organos ejecutivos

Art. 36. Son ejecutores de los acuerdos de los Organos de Gobierno:

- a) El Director de la Institución.
- b) Los Delegados provinciales.

SECCIÓN 1.ª.—Del Director

Art. 37. Corresponderán al Director y serán funciones del mismo.

1.ª Representar a la Institución, en unión del Presidente, en todos los actos y confia-

tos que se celebren, así como ante las Autoridades, Tribunales y Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares o cualesquiera otros Organismos, Entidades, Oficinas y personas con los poderes oportunos de la Junta Rectora, cuando sean necesarios a los indicados efectos.

2.ª Asistir al Presidente, cuando proceda, en la fiscalización de las actividades y los servicios administrativos de la Entidad.

3.ª Ejecutar los acuerdos de los Organos de Gobierno.

4.ª Proponer las reuniones de dichos Organos, cuando lo estime oportuno.

5.ª Ordenar los pagos correspondientes a la aplicación de los distintos conceptos presupuestarios y los derivados de la concesión de beneficios o prestaciones.

6.ª Autorizar, con su visto bueno, los justificantes de ingresos y demás documentos análogos.

7.ª Ostentar la Jefatura del personal y de los servicios administrativos.

8.ª Cumplir y hacer cumplir, respondiendo ante sus Organos de Gobierno y Servicio de Mutualidades Laborales, del fiel cumplimiento de los Estatutos, normas y procedimiento administrativo.

9.ª Informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieren.

10. Todas las atribuciones de dirección y gestión que no estén específicamente reservadas a la Asamblea General y Junta Rectora.

SECCIÓN 2.ª.—Del Delegado Provincial

Art. 38. A efectos análogos a lo establecido con respecto al Director, el Delegado provincial de Mutualidades Laborales, ostentará, dentro de su respectivo ámbito provincial, la representación legal de la Institución ante las Autoridades, Tribunales, Juzgados, Centros de Administración y del Estado y particulares y cualesquiera otros Organismos o personas.

Art. 39. Corresponden al Delegado provincial y son funciones del mismo:

1.ª Realizar y ejecutar los acuerdos administrativos de los Organos de Gobierno Nacionales y Provincial, debiendo estar en contacto y dependencia con el Servicio de Mutualidades Laborales a los efectos de unificación, coordinación y régimen interior.

2.ª Proponer al Presidente de la Comisión provincial la reunión de ésta, siempre que lo considere preciso; y convocar las reuniones de la Ponencia provincial.

3.ª Asistir a las reuniones de la Comisión o Ponencia provincial como Vocal nato.

4.ª Suspender, en su caso, por considerarlos antirreglamentarios, los acuerdos adoptados por la Comisión provincial dando cuenta al Organo superior inmediato a los oportunos efectos.

5.ª Llevar el despacho de los asuntos e informes de la Delegación con los servicios de la Institución.

6.ª Ordenar los pagos acordados.

7.ª Ostentar la Jefatura del personal.

8.ª Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, normas y procedimiento administrativo, respondiendo de su fiel cumplimiento ante los Organos de Gobierno de la Institución y Servicio de Mutualidades Laborales.

9.ª Llevar el despacho de los asuntos e informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Velar con el máximo interés para que los trabajadores de su ámbito territorial sean informados de todo lo referente a sus deberes y derechos.

11. Organizar, con la Comisión provincial, los actos de entrega de prestaciones y disponer los medios para una eficaz y sincera propaganda que facilite el exacto conocimiento por los trabajadores de los fines y realizaciones del sistema mutualista.

TITULO IV

Régimen económico

CAPITULO PRIMERO

Recursos económicos

Art. 40. Los recursos económicos de la Mutualidad son los siguientes:

1.º La aportación de las Empresas, consistente en el 6 por 100 de los salarios de los productores que estén a su servicio.

2.º Las cuotas de los empleados, consistentes en el 3 por 100 de sus remuneraciones.

3.º Los intereses de los bienes patrimoniales de la Institución.

4.º El importe de cuantos donativos, subvenciones o legados sean hechos a la Institución.

5.º Los ingresos de cualquier índole que puedan efectuarse con arreglo a los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y demás de general aplicación.

Art. 41. La obligación de cotizar al Montepío por las Empresas y empleados en ella encuadrados se inicia en las fechas que para cada uno de los Sectores laborales se expresan a continuación:

1.º Industria Harinera, 1 de julio de 1947.

2.º Minas de fosfato, azufre, potasa y talco, 1 de agosto de 1948.

Art. 42. El haber o salario que ha de servir de base para la liquidación de las cuotas será el que para las Mutualidades y Montepíos Laborales se determine en la legislación vigente.

Art. 43. Las liquidaciones e ingresos de las cuotas patronal y obrera deberán realizarse por las Empresas en períodos trimestrales.

No obstante, la Junta Rectora podrá acordar que sea mensual la liquidación del pago para aquellas Empresas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Frecuentes y numerosas altas y bajas en su personal.

b) Tener repetidas épocas de ceses o suspensiones en el trabajo.

c) Haber sido sancionadas repetidamente por demora en el pago.

d) Cualquier otra causa suficiente a juicio de la Junta Rectora.

Art. 44. Los ingresos se efectuarán en la forma que determine el Servicio de Mutualidades Laborales y en los siguientes plazos:

a) Para las Empresas de ingreso trimestral, dentro de los meses de abril, julio, octubre y enero; cada ingreso corresponderá a las liquidaciones del trimestre natural anterior.

b) Para las empresas de ingreso mensual, dentro del mes siguiente al que la liquidación corresponda.

Art. 45. Las Empresas que cuenten con Centros de Trabajo situados en diferentes provincias podrán solicitar, y la Junta Rectora acordar, que las liquidaciones de cuotas se realicen totalmente en la capital de la provincia donde radique la Sede Central de la Empresa, siempre que ésta presente tantas hojas de liquidación debidamente diligenciadas como Centros de Trabajo de la misma dependan, y atendiendo los requisitos que para el mejor servicio y funcionamiento consideren conveniente establecer los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 46. Todo ingreso no realizado dentro de los plazos establecidos será incrementado con el 10 por 100 del montante de la liquidación.

Para la exacción de las cuotas no satisfechas será de aplicación la Orden de 8 de octubre de 1949, correspondiendo al Director de la Entidad las facultades que en la misma se asignan a los Delegados del Instituto Nacional de Previsión.

Art. 47. Las Empresas responderán en todo caso ante el Montepío del pago de las cuotas correspondientes a los asociados en ellas encuadrados. Para ello, cuando aquéllas realicen el pago de los salarios a cada interesado, descontarán las cuotas que les correspondan, y que en unión de sus aportaciones deberán ser ingresadas en la forma que determina el artículo 44.

Cuando las Empresas no retuvieren las cuotas de sus trabajadores o no las ingresasen junto con sus aportaciones en los plazos reglamentarios, el importe de las cuotas atrasadas y de los recargos será exigible exclusivamente a la Empresa, sin que ésta pueda efectuar a los trabajadores descuento alguno.

Art. 48. La obligación de pago de cuotas al Montepío prescribirá a los cinco años, a contar de la fecha en que preceptivamente debieron ser abonadas.

Art. 49. Los asociados del Montepío que cesaren en el servicio activo de las Empresas no tendrán derecho alguno a que les sean devueltas las cuotas ingresadas, salvo cuando con carácter general y referido a un determinado sector o clase de asociados así lo ordene el Servicio de Mutualidades Laborales.

También procederá la devolución cuando por causa de afiliación errónea lo acuerde el Montepío. Si el erróneamente afiliado viniese en la obligación de pertenecer a otra Institución de Previsión Laboral, en lugar de acordarse la devolución de cuotas se verificará el oportuno traspaso de las mismas.

Art. 50. La afiliación maliciosa de quienes no reúnan las condiciones necesarias para la misma privará del derecho al reintegro de las cuotas satisfechas y a la concesión de toda clase de prestaciones.

CAPITULO II

Presupuestos, gastos y reservas

Art. 51. De los ingresos totales que obtenga el Montepío por todos los conceptos se destinarán los fondos necesarios para garantizar las pensiones que estos Estatutos conceden, para atender los auxilios y subsidios a los asociados activos y a sus derechohabientes y para el pago de los gastos de administración.

Art. 52. Los gastos de representación de administración de la Sede Central del Montepío no excederán del 5 por 100 de los ingresos que la Institución obtenga por todos los conceptos.

Con independencia del porcentaje anterior y exclusivamente sobre la recaudación que por cuotas obtenga la Institución se destinará el canon de tutela y servicio oficial y el de Delegaciones Provinciales, de conformidad con lo establecido a este respecto en las disposiciones legales vigentes en cada momento.

El porcentaje correspondiente a la Delegación donde tiene su Sede el Montepío será administrado por sus Organos Centrales.

Art. 53. A la Junta Rectora corresponderá la aprobación del Proyecto de presupuesto de gastos de administración para su elevación al Servicio de Mutualidades Laborales y aprobación por éste.

Art. 54. Las reservas de la Institución estarán constituidas en la cuantía y forma que el Servicio de Mutualidades Laborales determine. Tanto las reservas como los excedentes serán invertidos por el sistema y orden de preferencia que establezcan las disposiciones legales.

Art. 55. Estas reservas serán las siguientes:

- a) Reservas técnicas de cobertura.
- b) Reservas de seguridad.
- c) Fondos de estabilización constituidos con el 0,50 por 100 de la cotización, más los saldos favorables que resulten entre la siniestralidad y riesgos previstos y los reales, que se destinarán a cubrir las desviaciones desfavorables de aquella siniestralidad y a estabilizar la cotización en periodos de crisis económica incidental.

d) Fondo de garantía. Si hubiese excedentes después de cumplir todas las obligaciones estatutarias y de ser cubiertas las reservas anteriormente reseñadas, se constituirá un fondo de garantía al que se le dará, a propuesta de la Junta Rectora, el destino que determine el Servicio de Mutualidades Laborales.

Art. 56. El Montepío constituirá un fondo para prestaciones extrarreglamentarias, formado con el 2 por 100 de la cotización obtenida en cada ejercicio.

Dicho fondo se aplicará en la siguiente forma:

- a) El 75 por 100 del importe procedente de cada provincia a disposición de los Organos provinciales.
- b) El 25 por 100 restante, a disposición de los Organos de Gobierno centrales.

CAPITULO III

Sistema contable

Art. 57. La Sede Central del Montepío organizará su contabilidad por el sistema de partida doble, desarrollándola en los siguientes Libros:

- a) Libro Diario.
- b) Libro Mayor.
- c) Libro de Inventarios y Balances.
- d) Libro de Movimiento de Caja.
- e) Libro de cuentas corrientes con las Delegaciones.
- f) Libro de cuentas corrientes de Tesorería.
- g) Libro de cuentas técnicas.

- h) Registro de Valores y reservas.
- i) Otros libros que la práctica haga necesarios.

TITULO V

Prestaciones

CAPITULO PRIMERO

De sus clases

Art. 58. El Montepío concederá a sus beneficiarios las prestaciones que se enumeran a continuación, siempre que concurren las circunstancias y se cumplan los requisitos establecidos en los presentes Estatutos:

- Pensión por Jubilación.
- Pensión por Invalidez.
- Pensión o Subsidio de Viudedad.
- Pensión de Orfandad.
- Pensión por Larga Enfermedad.
- Auxilio por Defunción.
- Asistencia Sanitaria.

Art. 59. Asimismo, la Institución concederá prestaciones extrarreglamentarias con los fondos previstos en el artículo 56, en las condiciones establecidas en la Orden de 13 de julio de 1950.

CAPITULO II

Pensión por Jubilación

Art. 60. Se concederá una pensión vitalicia por jubilación a los socios beneficiarios que al cesar en el servicio activo de las Empresas reúnan las condiciones siguientes:

- a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
- b) Tener una antigüedad mínima de diez años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- c) Tener cubierto el periodo mínimo de cotización que se preceptúa en el artículo 97 de estos Estatutos.
- d) Ser socio activo del Montepío.

Art. 61. También tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta y cinco años de edad:

1.º Los pensionistas del Montepío por Larga Enfermedad.

2.º Los incapacitados por accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable.

En ambos casos el beneficiario deberá reunir los requisitos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de accidente o enfermedad, y no le será computado el tiempo transcurrido desde aquel momento para determinar la cuantía de la pensión.

Art. 62. La cuantía de la pensión de jubilación dependerá de la antigüedad laboral del asociado y del trabajo prestado en el interior de las minas, determinándose conforme a la siguiente escala:

Con 10 años de antigüedad laboral, el 30 por 100 del salario regulador.

Con 20, el 40 por 100.

Con 30, el 50 por 100.

Con 40, el 60 por 100.

De 50 años en adelante, el 70 por 100.

Si la total antigüedad laboral que se acredite se hallare comprendida entre dos de los periodos establecidos anteriormente, se aplicará el tanto por ciento que corresponda al periodo inferior, incrementándolo proporcional-

mente por cada año completo que excediere de dicho período. Se considerará como año completo la fracción superior a seis meses.

Por cada cinco años que el asociado hubiese trabajado en el interior de las minas se le concederá la bonificación de un año en la antigüedad laboral acreditada, y de seis meses cuando el período de trabajo en el interior de las minas no llegue a cinco años, pero exceda de dos.

Art. 63. La pensión de jubilación podrá ser solicitada con una antelación máxima de tres meses a la fecha en que el asociado desee disfrutarla. Caso de ser concedida la pensión, no producirá sus efectos hasta que el productor presente el certificado de baja definitiva en sus servicios profesionales.

Si el pensionista volviese a efectuar trabajo activo por cuenta ajena, se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

CAPITULO III

Pensión por Invalidez

Art. 64. El Montepío concederá pensión vitalicia por invalidez a los socios beneficiarios que quedasen incapacitados absoluta y permanentemente para todo trabajo, una vez dados de alta médica y con los requisitos y limitaciones que se establecen en este Capítulo.

No tendrán derecho a este beneficio los asociados cuya incapacidad cause derecho a pensión según la legislación de accidentes y enfermedades profesionales. No obstante, tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta y cinco años de edad, según lo establecido en el artículo 61 de estos Estatutos.

Art. 65. Se concederá la pensión por invalidez al socio beneficiario que al tiempo de cesar en su trabajo reuniera los siguientes requisitos:

- a) Ser socio activo.
- b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- c) Tener cubierto un período de carencia de 500 días.

También se concederá esta pensión al asociado que quedare inválido siendo pensionista del Montepío por Larga Enfermedad.

Art. 66. Para la determinación de la cuantía de esta pensión se aplicará la escala establecida en el artículo 62 para la jubilación, pero su importe mínimo será en todo caso del 50 por 100 del salario regulador del asociado.

Art. 67. La pensión por invalidez quedará anulada si el beneficiario de la misma recobrará las condiciones físicas suficientes para realizar trabajo activo por cuenta ajena.

El Montepío revisará periódicamente los expedientes y se reserva el derecho de reconocimiento médico siempre que lo estime conveniente.

CAPITULO IV

Pensión de Viudedad

Art. 68. Causará derecho a la prestación de Viudedad el socio beneficiario que reuniese a su fallecimiento las siguientes condiciones:

- a) Ser socio activo o pensionista de la Institución.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

No causará derecho a esta prestación el asociado que fallezca como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable, siempre que a la viuda del fallecido se le acredite pensión por estas causas.

Art. 69. Tendrán derecho al percibo de esta prestación la viuda del socio beneficiario fallecido que reuniese las siguientes condiciones:

a) Haber contraído matrimonio con el socio causante con dos años de antelación, por lo menos, a la fecha del fallecimiento. No se exigirá este requisito cuando quedaren hijos del matrimonio.

b) Haber hecho vida conyugal con el causante hasta su muerte, o que en caso de separación de hecho o de derecho careciese de culpabilidad.

c) No haber abandonado a sus hijos y observar una conducta honesta y moral.

Art. 70. La naturaleza y cuantía de la prestación de viudedad se determinará conforme a las siguientes normas:

a) Viudas menores de cuarenta años de edad, sin hijos, con derecho a pensión de orfandad y no incapacitadas para el trabajo:

1.º Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades del salario regulador.

2.º Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades de la pensión que aquél estuviese percibiendo.

b) Viudas mayores de cuarenta años, o menores de esta edad, pero con hijos con derecho a orfandad o incapacitados para el trabajo:

1.º Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: pensión vitalicia de cuantía igual al 50 por 100 de la que por jubilación hubiera correspondido al causante al tiempo de su fallecimiento; la pensión de viudedad tendrá un importe mínimo del 25 por 100 del salario regulador.

2.º Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: pensión vitalicia de cuantía igual al 50 por 100 de la pensión que estuviese percibiendo el fallecido con igual importe mínimo.

Si la interesada tuviera derecho o estuviera percibiendo cualquier otra pensión u otra Institución de Previsión Laboral, sólo percibirá la de viudedad en cuantía que, sumada a la anterior, no rebase el 100 por 100 del salario regulador del causante. Si la viuda dejase de percibir aquella pensión por cesar su derecho percibirá la de viudedad en su cuantía total.

Art. 71. La viuda dejará de percibir la pensión por las causas siguientes:

a) Contraer nuevas nupcias o adquirir estado religioso.

b) Abandonar o comprobado de los hijos menores sometidos a su tutela.

c) Observar una conducta deshonesto o inhumoral.

Art. 72. Cuando el socio fallecido fuera

mujer, el viudo tendrá derecho a los beneficios que se establecen en este capítulo, siempre que se hallare incapacitado absoluta y permanentemente para toda clase de trabajo y no perciba pensión derivada de la legislación de accidentes del trabajo y enfermedad profesional o del Mutualismo Laboral obligatorio y el socio fallecido reuniese las condiciones generales previstas para esta prestación. El viudo beneficiario dejará de percibir este beneficio si desapareciesen las causas de su incapacidad.

CAPITULO V

Pensión de Orfandad

Art. 73. Causará derecho a esta pensión el socio beneficiario varón o hembra que reuniese a su fallecimiento las siguientes condiciones:

a) Ser socio activo o pensionista del Montepío.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto un periodo de cotización de 500 días.

Art. 74. Tendrá derecho al percibo de esta prestación:

a) Los hijos legítimos—incluso los póstumos—, legitimados, naturales reconocidos y adoptivos del asociado fallecido.

b) Los hijos legítimos, legitimados, naturales reconocidos y adoptivos que la viuda del asociado fallecido hubiese llevado al matrimonio, siempre que viviesen a expensas de aquél y no disfrutaran pensión de otra institución de Previsión Laboral.

Los beneficiarios comprendidos en los apartados anteriores deberán reunir, al tiempo del fallecimiento del asociado causante, los requisitos de ser menores de dieciséis años o incapacitados de manera absoluta para el trabajo que no perciban ninguna otra pensión por este concepto.

Art. 75. La cuantía de la pensión de orfandad, cuando al mismo tiempo haya sido concedida prestación de viudedad, será del 10 por 100 de la referida pensión por cada uno de los huérfanos con derecho a la misma.

En caso de fallecimiento de la madre o padre viudo que percibiese pensión de viudedad, se revisará la cuantía de la orfandad, que se regulará por las siguientes normas:

a) A uno de los huérfanos se le acreditará la que por viudedad percibiese el padre o madre fallecido.

b) A los demás huérfanos se le acreditará el 10 por 100 a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.

c) La suma total de las cantidades de los dos párrafos anteriores se dividirá por el número de beneficiarios.

d) Por cada beneficiario a quien se extinga el derecho se reducirá la suma dicha en un 10 por 100 de la pensión de viudedad.

e) El último huérfano con derecho a pensión será el que conserve la de viudedad.

Art. 76. Cuando al fallecimiento del causante se produzca la orfandad absoluta, la pensión que corresponda se regulará por lo establecido en el párrafo segundo del artículo anterior.

Por el contrario, si al fallecer el causante

no tuviera derecho a pensión de viudedad el padre o madre sobreviviente, los huérfanos percibirán su pensión en la cuantía establecida en el párrafo primero del artículo anterior.

Art. 77. En caso de orfandad absoluta, la pensión se otorgará sin existir periodos de antigüedad ni cotización en el socio causante fallecido, requiriéndose tan sólo que tuviera la condición de socio activo o pensionista del Montepío al tiempo de su fallecimiento.

Art. 78. La pensión de orfandad se extinguirá cuando el beneficiario cumpliera la edad de dieciséis años o cesare la incapacidad, por adquirir estado matrimonial o religioso.

Art. 79. Las pensiones de orfandad se entregarán al padre, madre, parientes o personas que acrediten los siguientes extremos:

a) Que el beneficiario viva en su compañía y a sus expensas al tiempo de solicitar la pensión.

b) Que en lo sucesivo se continuarán encargando del mantenimiento, educación y formación profesional de los huérfanos, lo que comprobará periódicamente el Montepío en la forma que considere oportuna.

Art. 80. Si los huérfanos estuvieren totalmente abandonados, o las personas que los tengan a su cargo no merezcan la confianza suficiente del Montepío, la Comisión Provincial Permanente que corresponda se constituirá en patronato tutelar de los mismos, sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente, y propondrá a la Junta Rectora las medidas que deben adoptarse para la mejor protección de los huérfanos hasta que cumplan los dieciséis años o cesare la incapacidad, y que podrá consistir en la concesión de becas, ingreso en Colegios o Instituciones de Beneficencia, Escuelas de Aprendices u otras medidas análogas.

Esta propuesta deberá comprender, después de la exposición de motivos, un cálculo de los gastos que la protección de dichos huérfanos pueda ocasionar a la Institución.

CAPITULO VI

Pensión por larga Enfermedad

Art. 81. Se concederá un auxilio por larga enfermedad a los socios beneficiarios que temporalmente estuvieren imposibilitados totalmente para el trabajo por causa de enfermedad, y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hubieren agotado los plazos de disfrute del Seguro Obligatorio de Enfermedad o que hubiere transcurrido el plazo de veintiséis semanas si no hubiesen hecho uso o no se hallaren afiliados a dicho Seguro.

b) Que la enfermedad que los imposibilita totalmente para el trabajo no tenga carácter indemnizable y sea diagnosticada por los facultativos especialistas que designe el Montepío cuando éste lo considere conveniente.

c) Que cumplan rigurosamente las prescripciones facultativas de los médicos que los asistan; en caso de contravenir el plan o régimen de vida establecido por éstos perderán automáticamente el derecho a este auxilio.

d) Que el asociado tuviere una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

No se exigirá este requisito a los productores menores de diecinueve años, siempre

que la enfermedad hubiese sido contraída con posterioridad a su ingreso como asociado.

e) Que tenga cubierto el período mínimo de cotización que preceptúa el artículo 97 de estos Estatutos.

Se exceptúan los menores de diecinueve años a que se refiere el apartado anterior, a quienes sólo se exigirá un período mínimo de seis meses de cotización.

Art. 82. La cuantía del auxilio por larga enfermedad será equivalente al 50 por 100 del salario regulador.

Art. 83. Los períodos máximos por los que se concederá este auxilio serán los siguientes:

a) En el primer año de enfermedad, veintiséis semanas como máximo.

b) En el segundo año de enfermedad, cincuenta y dos semanas como máximo.

c) En el tercer año, cincuenta y dos semanas como máximo.

Art. 84. Agotados los plazos de duración a que se refiere el artículo anterior, el beneficiario que continuara enfermo será sometido a reconocimiento médico, y la Junta Rectora, con el informe del Órgano provincial respectivo, podrá acordar que se prolongue la percepción de la pensión, siempre que ello fuera posible de acuerdo con lo que se dispone a continuación.

Los gastos totales que en cada ejercicio económico ocasionen estas concesiones gratuitas no podrán ser superiores al 1 por 100 de la cotización del año anterior.

CAPITULO VII

Auxilio de defunción

Art. 85. Al ocurrir el fallecimiento de un asociado en activo o pensionista, el Montepío procederá a la entrega inmediata de 1.000 pesetas a los familiares más próximos, parientes o personas que convivieran con aquél, para coadyuvar a los gastos derivados del fallecimiento.

Art. 86. Para la entrega de este auxilio no se necesitará reunir ninguna otra condición que no sea la de que el fallecido tuviere la consideración de socio activo o la de pensionista por jubilación, invalidez o larga enfermedad.

La cantidad señalada se entregará inmediatamente a los familiares más próximos, pariente o personas que convivieran con el socio fallecido. Si no existiera ninguna de las personas señaladas anteriormente que pudiera atender al sepelio, la Comisión Provincial o Ponencia se encargará de la organización del entierro y de los sufragios por el alma del fallecido.

CAPITULO VIII

Asistencia sanitaria

Art. 87. El Montepío concederá la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica a sus pensionistas y familiares que convivieren con ellos y a sus expensas con anterioridad a la solicitud de la pensión y reúnan además las condiciones siguientes:

a) Si el pensionista hubiese estado afiliado en el Seguro Obligatorio de Enfermedad,

los familiares con derecho a esta prestación serán los inscritos en la Cartilla de dicho Seguro al tiempo de solicitar la pensión, así como los hijos que naciesen posteriormente.

b) Si el pensionista no pertenecía al Seguro Obligatorio de Enfermedad, tendrán derecho los familiares comprendidos dentro del tercer grado de consanguinidad y los hijos que naciesen posteriormente.

Art. 88. A los efectos de este beneficio, el Montepío, al conceder una pensión, vendrá obligado a notificar a los interesados el procedimiento que tenga establecido para la efectividad del mismo, sin que para ello sea precisa solicitud alguna por parte de los beneficiarios.

Art. 89. Los familiares de los pensionistas dejarán de disfrutar este beneficio tan pronto tengan obligación de estar inscritos en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, dejen de convivir con el asociado o cuando, por cualquier circunstancia, el pensionista dejase de tener esta condición.

Art. 90. El Montepío coordinará sus servicios de asistencia sanitaria con los establecidos por otros Montepíos o Mutualidades con los del Estado, Instituciones de Previsión y Organización Sindical.

CAPITULO IX

Disposiciones comunes a todas las prestaciones

Art. 91. Los beneficios que concede esta Institución son compatibles con los derivados de los Seguros Sociales Obligatorios y con los que puedan concederse por el Estado, Corporaciones, Compañías de Seguros y Empresas, con las excepciones derivadas de las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

Art. 92. Los afiliados que obligatoriamente colicen a esta y a otro u otras Instituciones de Previsión Laboral, o a este Montepío por dos o más Empresas, tendrán derecho a percibir las prestaciones en las condiciones previstas en el artículo 18 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 93. Los afiliados que sean baja en esta Institución, por pasar a pertenecer a otra, podrán percibir las prestaciones señaladas en estos Estatutos cuando concurren las circunstancias y se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 94. Las prestaciones que concede el Montepío tienen carácter personal e intransferible, y, en consecuencia, no podrán ser embargadas, objeto de cesión total o parcial ni servir de garantía de ninguna obligación.

Art. 95. Tendrán la consideración de socios activos de la Institución todas aquellas personas que presten sus servicios por cuenta ajena en actividades encuadradas en este Montepío.

Art. 96. Asimismo conservarán la condición de socios activos quienes, habiendo tenido este carácter, dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena por alguna de las siguientes causas:

a) Por enfermedad ininterrumpida.

b) Por hallarse prestando el servicio militar.

c) Por paro involuntario.

La concesión de prestaciones a quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los apartados anteriores se sujetará a lo dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Orden de 16 de mayo de 1950 y en la Orden de 24 de julio del mismo año.

Art. 97. Para causar derecho a las prestaciones de Jubilación y larga Enfermedad, será preciso que el asociado haya cotizado al Montepío durante un período de tiempo igual a la mitad del comprendido entre la fecha inicial de cotización en el sector laboral a que el asociado pertenezca y aquella otra en que se produzca el hecho causante de la prestación.

Como excepción a esta regla, el período mínimo de cotización será en todo caso de seis meses durante el primer año de obligatoriedad en la cotización de cada sector laboral. A partir de la fecha en que se cumplan diez años de obligatoriedad de cotización, el período exigible será de cinco años mientras no se disponga otra cosa.

Art. 98. Se considerará como antigüedad laboral aquella que se acredite de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 99. El salario regulador para la concesión de prestaciones se hallará en la forma prevista en el artículo 25 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 100. Si las prestaciones concedidas por la Institución resultaren de cuantía superior a la que corresponda, como consecuencia de falsedad de las Empresas en las declaraciones que formulen a estos efectos, el Montepío podrá reclamar a la Empresa las diferencias resultantes ante la jurisdicción competente.

Si por la misma causa de falsedad de la Empresa en dichas declaraciones, la prestación concedida fuese inferior a la que realmente correspondiera, el productor perjudicado podrá reclamar contra la Empresa por el perjuicio sufrido.

Art. 101. Las prestaciones que la Institución otorga deberán solicitarse dentro de los plazos previstos en el artículo 26 de la Orden de 16 de mayo de 1950, utilizando los modelos que aquella tenga establecidos y acompañando los documentos que para cada caso se señalen.

Art. 102. Las prestaciones que se establecen en los presentes Estatutos no podrán satisfacerse por el Montepío si la Empresa, en el momento en que deban ser abonadas, no estuviere al corriente en el pago de todas las cotizaciones exigibles a la misma.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 12 al 16 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 103. El devengo de las pensiones que conceda el Montepío se iniciará y finalizará de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 104. Los socios beneficiarios a quienes les haya sido concedida alguna prestación en virtud de declaraciones falsas o inexactas de los mismos no tendrán derecho a su percibo. En el caso de que hubiesen recibido ya su importe, estarán obligados a su devolución, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.

Art. 105. Las cantidades que correspondan a los beneficiarios por cualquiera de las prestaciones otorgadas por esta Institución podrán ser percibidas por aquéllos en la Empresa donde últimamente hubieran prestado sus servicios o en aquella otra que se halle más cerca de su domicilio, siempre que la organización del Montepío lo permita y así convenga.

Art. 106. Las mensualidades que un pensionista tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento se entregarán a la esposa, hijos padres sexagenarios o familiares más próximos que conviviesen con el fallecido, previa la justificación que los Organos del Montepío consideren oportuna en cada caso.

La misma norma se aplicará respecto de cualesquiera prestaciones que un asociado tuviere pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento.

A falta de los citados familiares, el importe de las pensiones o prestaciones revertirá al Montepío.

TITULO VI

Régimen disciplinario

CAPITULO PRIMERO

De las faltas y sus sanciones

Art. 107. Constituirán faltas y darán lugar a la imposición de sanciones los siguientes hechos:

1.º Defraudar a sabiendas los intereses del Montepío o poner voluntariamente los medios que conduzcan a tal fin.

2.º Falsar las declaraciones ordinarias y extraordinarias que se hagan ante el Montepío o aportar datos inexactos al mismo, bien en orden a la concesión de beneficios o con respecto a otras cualesquiera manifestaciones de las actividades de esta Entidad.

3.º Realizar actos indecorosos o perjudiciales para la reputación o el buen crédito del Montepío.

4.º Entorpecer intencionadamente las actividades del Montepío. Se considerarán comprendidos en este apartado los que, habiendo sido elegidos Vocales de la Junta Rectora o restantes Organos de Gobierno, no asistan a sus reuniones o no presten la colaboración debida.

5.º No observar las normas, disposiciones o acuerdos emanados de los Organos competentes del Montepío, relativos al cumplimiento de sus fines o al buen desarrollo y orden de su actividad.

Art. 108. Las sanciones que podrá imponer el Montepío a sus asociados serán las consignadas en la siguiente escala:

1.ª Apercibimiento privado, consistente en comunicación verbal o escrita al sancionado.

2.ª Apercibimiento público. El grado de publicidad que proceda dar a esta sanción se determinará en cada caso por el Organo sancionador.

3.ª Inhabilitación temporal para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución u ocupar cargos de la misma. Esta sanción se entenderá por un tiempo comprendido entre los dos y los cinco años.

4.ª Inhabilitación permanente para formar

parte de los Organos de Gobierno de la Institución.

5.ª Multa de veinticinco a cinco mil pesetas.

Cuando se trate de un socio beneficiario, la sanción se hará efectiva mediante descuento en los salarios del sancionado, cuya cuantía será fijada por la Junta Rectora sin exceder del 2,5 por 100.

Si antes de completar el pago de la multa fuese concedida al sancionado alguna prestación de entrega de capital, se deducirá de su importe lo necesario para hacer efectiva la sanción. Si se tratare de pensiones, se deducirá de cada mensualidad un 25 por 100 hasta completar dicho pago.

Asimismo la Junta Rectora podrá acordar se suspenda la efectividad de una pensión, en tanto se resuelva lo que corresponda, en los casos en que se hubieran producido anomalías en la tramitación del expediente o falsedades en los documentos aportados al mismo, así como cuando los beneficiarios de aquélla no cumplan los requisitos establecidos en estos Estatutos para su aprobación.

Siempre que haya de imponerse una sanción se atenderá para la determinación de la misma, en cada caso, a la gravedad de la falta cometida, al perjuicio que haya ocasionado o que haya pretendido ocasionar el sancionado, al criterio adoptado en resoluciones recaídas en casos anteriores y análogos y a cualesquiera otras circunstancias que deban tenerse en cuenta a juicio del Organismo sancionador.

CAPITULO II

Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones

Art. 110. La imposición de sanciones será de competencia de la Junta Rectora.

Art. 111. Las Comisiones Provinciales Permanentes, tan pronto tengan conocimiento de haberse realizado algún hecho constitutivo de falta, lo pondrán en conocimiento de la Junta Rectora en escrito razonado, en el que se expondrán los hechos y circunstancias anejas, proponiendo la oportuna sanción.

En la primera reunión que celebre la Junta Rectora después de recibir el expediente incoado, se pronunciará por la sanción que corresponda o declarará la no existencia de responsabilidad, devolviendo el expediente, una vez tomada debida nota a la Comisión de Procedencia, a los fines de su oportuno archivo y efectos.

Art. 112. En los casos en que la Junta Rectora o Asamblea General observasen posibles faltas entre los componentes de los Organos de Gobierno subordinados, acomodarán su procedimiento al enunciado en los artículos precedentes, pudiendo suspender en sus funciones a los miembros de las Comisiones o Junta Rectora, según los casos, interin se sustancie el oportuno expediente, dando cuenta de la medida a la Jefatura del Servicio.

TITULO VII

De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno

Art. 113. Como trámite previo a la iniciación de las reclamaciones en vía contenciosa

ante la Magistratura de Trabajo, podrán los interesados recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno en las condiciones y cumpliendo los requisitos señalados en los artículos 29, 30 y 31 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

TITULO VIII

De la inspección e intervención

Art. 114. La inspección, vigilancia e intervención del cumplimiento por el Montepío, Empresas y productores beneficiarios de las obligaciones de este Estatuto derivadas, está a cargo del Ministerio de Trabajo, a través del Servicio de Mutualidades Laborales, Inspección Técnica de Previsión, Delegaciones Provinciales de Trabajo e Inspección Nacional de Trabajo, quienes podrán, cuando corresponda, imponer sanciones con arreglo a las disposiciones vigentes.

TITULO IX

Disposiciones generales

Art. 115. Para que el Montepío pueda proponer la reforma de estos Estatutos, será preciso que exista la conformidad de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General en sesión convocada al efecto.

Art. 116. Cualquier modificación de estos Estatutos habrá de ser aprobada por el Ministerio de Trabajo, previo informe del Servicio de Mutualidades Laborales, a quien asimismo corresponde la interpretación de este texto.

Art. 117. El Montepío, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y Junta Rectora, remitirá certificación de los acuerdos adoptados al Servicio de Mutualidades Laborales. Dichos acuerdos, para que tengan validez, serán confirmados por el Servicio de Mutualidades Laborales antes de haber transcurrido los quince días siguientes a su recepción. Se considerarán válidos los referidos acuerdos si después de transcurrido el plazo señalado el indicado Servicio no hubiera hecho uso del derecho de veto.

Disposición final

Los presentes Estatutos comenzarán a regir el día 1 de agosto de 1952 y se aplicarán íntegramente a las prestaciones causadas a partir de dicha fecha.

Disposiciones transitorias

Primera.—No obstante lo establecido en la disposición final, podrá aplicarse retroactivamente lo dispuesto en el capítulo IV, título V, de estos Estatutos, en el que se regula la pensión de viudedad. Se aplicará dicha retroactividad en aquellos expedientes de viudedad cuyas beneficiarias no hubiesen comenzado a percibir aún la pensión correspondiente por no haber cumplido los cuarenta y cinco años de edad, y así lo soliciten en el plazo de tres meses, a partir de la vigencia de estos Estatutos.

Segunda.—La determinación de las pensiones de viudedad que deban concederse por haber usado las interesadas el derecho de opción a que se refiere la disposición anterior se efectúa-

rá conforme se establece en los presentes Estatutos.

Comenzarán a devengarse las indicadas pensiones a partir de la fecha de vigencia de estos Estatutos.

Tercera.—Para que las viudas interesadas puedan hacer uso del derecho concedido por el Montepío se las dirigirán oficios dentro del plazo de treinta días a partir de la publicación de estos Estatutos, notificándolas el derecho de opción establecido y requiriendo de las mismas contestación urgente indicando si desean acogerse a lo que en estas disposiciones transitorias se establece o prefieren seguir rigiéndose por lo establecido en los Estatutos provisionales.

399 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA

Orden del Ministerio de Trabajo de 31 de julio de 1950 (*B. O. del E.* núm. 244, del 31 de agosto de 1952).

I.—ESTATUTOS.—Se aprueban los Estatutos de la Mutualidad Laboral de la Industria Siderometalúrgica, con sujeción al siguiente Índice General.

Orden ministerial.—Aprobación de los nuevos Estatutos (art. 1.º) y Disposiciones transitorias (art. 2.º).

Título I.—Naturaleza y extensión de la Mutualidad (arts. 1.º a 7.º).

Título II.—De los socios y beneficiarios.—Capítulo I. De las clases de socios (art. 8.º).—Capítulo II. De los socios protectores (art. 9.º). Sección 1.ª De los socios protectores obligatorios (arts. 10 a 12).—Sección 2.ª De los socios protectores voluntarios (arts. 13 y 14).—Capítulo III. De los socios beneficiarios (artículos 15 a 18).—Capítulo IV. De los demás beneficiarios (art. 19).

Título III. Del Gobierno de la Institución.—Capítulo I. De los órganos de Gobierno (artículos 20 a 33).—Capítulo II. Del Presidente y Vicepresidente (arts. 34 y 35).—Capítulo III. De los órganos ejecutivos (art. 36).—Sección 1.ª Del Director (art. 37).—Sección 2.ª Del Delegado Provincial (arts. 38 y 39).

Título IV.—Régimen económico.—Capítulo I. Recursos económicos (arts. 40 a 50).—Capítulo II. Presupuestos, gastos y reservas (arts. 51 a 56).—Capítulo III. Sistema contable (art. 57).

Título V.—Prestaciones.—Capítulo I. De sus clases (arts. 58 y 59).—Capítulo II. Pensión por jubilación (arts. 60 a 63).—Capítulo III. Pensión por invalidez (arts. 64 a 67).—Capítulo IV. Pensión de viudedad (arts. 68 a 72).—Capítulo V. Pensión de orfandad (artículos 73 a 81).—Capítulo VI. Pensión por larga enfermedad (arts. 82 a 85).—Capítulo VII. Auxilio por defunción (arts. 86 y 87).—Capítulo VIII. Premio por matrimonio (artículos 88 y 89).—Capítulo IX. Premio de natalidad (arts. 90 y 91).—Capítulo X. Asistencia sanitaria (arts. 92 a 95).—Capítulo XI. Disposiciones comunes a todas las prestaciones (arts. 96 a 108).

Título VI.—Régimen disciplinario.—Capítulo I. De las faltas y sus sanciones (arts. 112

a 114).—Capítulo II. Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones (artículos 115 a 117).

Título VII.—De los recursos contra los acuerdos de los órganos de Gobierno.

Título VIII.—De la Inspección e Intervención (art. 119).

Título IX.—Disposiciones generales. Reforma y modificación de los Estatutos (artículos 120 a 121). Ejecución de los acuerdos de los órganos de Gobierno (art. 122).

Disposición final. (Fecha de entrada en vigor de los Estatutos.)

Disposiciones transitorias.

II.—TEXTO LITERAL.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Siderometalúrgica fueron creadas las dieciséis Mutualidades Interprovinciales de esta rama laboral por Orden de 18 de febrero de 1947, que aprobó al mismo tiempo sus Estatutos provisionales.

Al considerarse superado el período de organización de dichas Instituciones y alcanzada una amplia base técnica que permita la revisión de los Estatutos provisionales, fué mejorado su capítulo de prestaciones en unos nuevos Estatutos, aprobados por Orden de 26 de julio de 1949, (Ref. 209/49).

La experiencia conseguida en la aplicación de estos últimos Estatutos ha indicado la posibilidad de satisfacer la ambición permanente de este Ministerio de mejorar paulatinamente los regímenes de previsión mutualista, atemperando los capítulos de prestaciones a los máximos beneficios que permita la situación económica de estas Instituciones; lo que aconseja promulgar unos nuevos Estatutos para las Mutualidades de la Industria Siderometalúrgica;

Vistos los proyectos de reforma de Estatutos aprobados por las Asambleas generales de las Mutualidades citadas, las conclusiones adoptadas por la Conferencia celebrada con sus representantes y los estudios realizados por el Servicio de Mutualidades Laborales.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueban los Estatutos de las Mutualidades Laborales de la Industria Siderometalúrgica, que comenzarán a regir el día 1 de agosto de 1952, en sustitución de los actuales de 26 de julio de 1949, que quedarán derogados en dicha fecha.

Art. 2.º Mientras no se disponga otra cosa, las Mutualidades Laborales de la Industria Siderometalúrgica serán las dieciséis Instituciones Interprovinciales que se mencionan en el artículo primero de la Orden de 18 de febrero de 1947, y tendrán el ámbito territorial y domicilio que en este mismo precepto se especifica.

Estatutos de la Mutualidad Laboral de la Industria Siderometalúrgica, aprobados por Orden ministerial de 31 de julio de 1952.

TITULO PRIMERO

Naturaleza y extensión de la Mutualidad

Art. 1.º La Mutualidad Laboral de la Industria Siderometalúrgica, constituida en cum-

plimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de 27 de julio de 1946, se registrará por los presentes Estatutos y disposiciones sobre Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 2.º Esta Entidad tiene por objeto el ejercicio de la previsión social, siendo sus fines la más amplia protección y ayuda a sus asociados y familiares contra circunstancias fortuitas y previsibles, en la forma que disponen los presentes Estatutos y de acuerdo con las Ordenes y disposiciones que por el Ministerio de Trabajo se dicten para la concesión de beneficios que deba otorgar la Entidad en atención a sus posibilidades económicas.

La Mutualidad no podrá ejercer más actividades que las de previsión social autorizadas o que se autoricen por el Ministerio de Trabajo.

Art. 3.º La duración de esta Entidad será indefinida.

Su disolución o incorporación a otro Montepío o Mutualidad de Previsión Laboral corresponderá al Ministerio de Trabajo mediante disposición expresa.

Art. 4.º La jurisdicción territorial y domicilio social de la Mutualidad Laboral de la Industria Siderometalúrgica serán los establecidos expresamente por el Ministerio de Trabajo, quien podrá modificarlos si lo estima conveniente para los intereses mutualistas.

Art. 5.º En esta Mutualidad estarán encuadrados las Empresas y trabajadores afectados por la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Industria Siderometalúrgica, aprobada por Orden de 27 de julio de 1946.

El Ministerio de Trabajo podrá disponer queden incorporados a esta Mutualidad las Empresas y trabajadores afectados por otras Ordenanzas Laborales. También podrá acordar la segregación de Sectores Laborales en el encuadrados por razones sociales o económicas.

Art. 6.º La Mutualidad Laboral de la Industria Siderometalúrgica tiene personalidad jurídica y, en su consecuencia, gozará de capacidad plena para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes, así como realizar toda clase de actos y contratos relacionados con sus fines, sin más limitaciones que las establecidas en las disposiciones vigentes o que puedan establecerse en el futuro. Igualmente podrá promover y seguir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar los derechos y acciones que le correspondan ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, ordinarios y especiales y Organismos y Dependencias de la Administración Pública.

Art. 7.º Esta Entidad estará sometida a la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, quien ejercerá sobre ella su ordenación, tutela, inspección e intervención a través de los Organismos competentes.

TITULO II

De los socios y beneficiarios

CAPITULO PRIMERO

De las clases de socios

Art. 8.º Los socios de la Institución se clasifican en socios protectores y socios beneficiarios.

CAPITULO II

De los socios protectores

Art. 9.º Los socios protectores podrán ser:

- a) Socios protectores obligatorios.
- b) Socios protectores voluntarios.

SECCIÓN 1.ª—De los socios protectores obligatorios.

Art. 10. Serán socios protectores obligatorios todas las Empresas a las que se refiere el artículo quinto de estos Estatutos que, en virtud de las disposiciones aplicables coticen o deban cotizar preceptivamente a favor de la Mutualidad.

Art. 11. Serán obligaciones de los socios protectores obligatorios:

1.º Su afiliación a la Mutualidad, así como la del personal que trabaje a su servicio, siempre que reúnan las condiciones señaladas en los vigentes Estatutos.

El no uso por parte del productor de la facultad señalada en el apartado primero del artículo 16, no eximirá a la Empresa de la obligación reseñada anteriormente ni de la consiguiente responsabilidad.

2.º Remitir a la Mutualidad, a través de la Delegación Provincial, un padrón inicial de los trabajadores a su servicio, conforme al modelo y con los datos que por aquél se señalen.

3.º Remitir a la Mutualidad, a través de la Delegación Provincial, relación de las altas y bajas causadas en la Empresa, así como de las variaciones de salarios producidas por mejoras voluntarias o cambios de categoría profesional de los trabajadores, dentro de los plazos que la Institución señale.

4.º Abonar las cuotas patronal y obrera en la cuantía, plazos y forma que se determinan en el Título de Régimen Económico de los presentes Estatutos.

5.º Presentar oportunamente y tener a disposición de sus trabajadores, en "sitio visible", la liquidación de pagos de cuotas.

6.º Proceder al abono de prestaciones —por cuenta y Delegación expresa del Montepío— a los beneficiarios que residan en localidad donde la Empresa tenga centros de trabajo.

7.º Cumplir todas las obligaciones que se deriven de los presentes Estatutos y demás disposiciones aplicables, así como de los acuerdos que adopten los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 12. Los socios protectores obligatorios tendrán derecho a formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución cuando fueren elegidos para ello.

SECCIÓN 2.ª—De los socios protectores voluntarios

Art. 13. Serán socios protectores voluntarios aquellas personas naturales o jurídicas, que, por donaciones a la Entidad o servicios prestados a la misma, se consideren con méritos suficientes para ser así conceptuadas.

Art. 14. El título de socio protector voluntario será honorífico y el que lo ostente estará facultado para asistir con derecho a voz a las reuniones que la Asamblea General celebre, a cuyos efectos deberá ser citado oportunamente.

La concesión del título de socio protector voluntario corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de la Junta Rectora.

CAPITULO III

De los socios beneficiarios

Art. 15. Tendrán la consideración de socios beneficiarios obligatorios de esta Mutualidad los trabajadores por cuenta ajena encuadrados en las actividades a que se refiere el artículo quinto de estos Estatutos y que tengan derecho a su afiliación, según lo establecido en la Orden de 16 de mayo de 1950 y Decreto de 17 de noviembre del mismo año.

Art. 16. Los socios beneficiarios tendrán los siguientes derechos:

1.º Solicitar su afiliación a la Mutualidad cuando la Empresa por cuya cuenta trabajen no la efectúe.

2.º Conocer la efectividad del pago por la Empresa de las cuotas correspondientes.

3.º Percibir los beneficios y causar las prestaciones que correspondan con arreglo a lo regulado en el presente Estatuto y en las disposiciones o acuerdos del Servicio de Mutualidades Laborales.

4.º Recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Entidad en materia de reconocimiento de derechos, conforme se determina en los presentes Estatutos.

Art. 17. Serán obligaciones de los socios beneficiarios:

1.º Extender y entregar a la Empresa la declaración de afiliación individual, consignando en ella los datos personales, familiares y profesionales que por la Entidad se determinen.

2.º Dar cuenta a la Institución, por medio de las Delegaciones Provinciales, de las variaciones de orden personal, familiar o profesional que puedan modificar la declaración inicial a que se refiere el apartado anterior.

3.º Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Institución, facilitando a ésta cuantos datos le sean interesados y allanando, en la medida que esté a su alcance, las dificultades que los funcionarios de aquélla puedan encontrar en el desempeño de sus funciones; si así no lo hicieren podrán incurrir en responsabilidad y ser objeto de sanción.

4.º Cumplir los objetos de los Estatutos y los acuerdos y resoluciones de los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 18. Los asociados que voluntaria o forzosamente dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena, serán baja en la Mutualidad, sin perjuicio de que cuando se reintegren al trabajo en cualquiera de las Empresas encuadradas en esta Entidad se les reconozca la antigüedad laboral y mutualista que con anterioridad a su baja hubieran adquirido.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior y por consiguiente serán considerados como socios en servicio activo:

1.º Los productores enfermos, los que estuviesen cumpliendo el servicio militar y los que se encuentren en situación de paro involuntario, con las limitaciones y requisitos que se establecen en los artículos 20 y 21 de la Orden de 16 de mayo de 1950 y Orden de 24 de julio del mismo año

2.º Los que se encuentren en situación de excedencia voluntaria o forzosa.

Este derecho quedará limitado al período de tiempo que según la Reglamentación de Trabajo esté obligada la Empresa a reservar al productor su puesto en el trabajo. Por parte de los asociados deberán cumplirse a estos efectos los siguientes requisitos:

a) Solicitar su continuidad como socio activo de la Mutua'idad dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hubiera dejado de prestar su trabajo a la Empresa.

b) Abonar por su cuenta, y en los plazos reglamentarios, las cuotas patronales y obreras correspondientes.

Para la determinación de éstas se considerará como salario base de cotización el que fuere regulador de prestaciones, según las cotizaciones efectuadas al tiempo de su baja en el servicio activo.

No gozarán del beneficio de continuar como socios activos de esta Institución aquellos trabajadores que en situación de excedencia ejerciten otra actividad que lleve consigo su obligada incorporación a otra Institución de previsión laboral.

CAPITULO IV

De los demás beneficiarios

Art. 19. Tendrán también la consideración de beneficiarios de esta Mutualidad aquellas personas que sin estar asociadas a la Institución puedan solicitar y tengan derecho a percibir las prestaciones o beneficios establecidos en estos Estatutos en virtud de la relación familiar en que se hallen con cualquier socio beneficiario causante.

Serán obligaciones de las personas a que se refiere el presente artículo:

1.º Solicitar dentro de los plazos que en los presentes Estatutos se determinan y en la forma que se establece para cada caso los beneficios que puedan corresponderles.

2.º Aportar los documentos y datos que por la Entidad se les exija para la concesión de beneficios y prestar con exactitud y fidelidad las declaraciones que les fueran exigidas con el mismo fin.

TITULO III

Del gobierno de la Institución

CAPITULO PRIMERO

De los Organos de Gobierno

Art. 20. Los Organos de Gobierno de la Institución son los siguientes:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Rectora.

c) Las Comisiones o Ponencias Provinciales.

Art. 21. Todo lo relativo a la composición de los distintos Organos de Gobierno, condiciones personales, forma de elección y nombramiento, duración del mandato y cese de sus Vocales; la provisión de vacantes, asistencia de Vocales natos y designación de Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios de actas, se regularán conforme a las normas de la Orden de 30 de abril de 1952.

Art. 22. Los Organos de Gobierno de la

Institución tendrán las facultades y competencia que para cada uno de ellos se señala en la Orden de 30 de abril de 1952.

Art. 23. Las reuniones de los Organos de Gobierno centrales serán ordinarias o extraordinarias.

Las reuniones ordinarias tendrán lugar:

- a) Las de la Asamblea General, una vez al año.
- b) Las de la Junta Rectora, una vez cada trimestre.

Las reuniones extraordinarias serán convocadas por propia iniciativa del Presidente y por proponerlo el Director o la tercera parte de los componentes del respectivo Organó de Gobierno; las de la Asamblea General, además por acuerdo de la Junta Rectora.

Las convocatorias para las reuniones extraordinarias de la Asamblea General deberán ser sometidas a la previa aprobación del Servicio de Mutualidades Laborales, así como su orden del día, cuyos asuntos expresamente consignados serán los únicos que podrán tratarse.

Las Comisiones y Ponencias Provinciales celebrarán sesión cada quince días, siempre que existan expedientes de prestaciones pendientes de resolver o informar; también podrán celebrar sesión por decisión del Presidente de la Comisión Provincial o del Delegado de la Comisión Provincial o del Delegado Provincial por existir asuntos urgentes a deliberar.

Art. 24. Las convocatorias de los Organos centrales y de las Comisiones Provinciales se harán por su Presidente, y las de las Ponencias, por el Delegado Provincial. Todas ellas se harán por duplicado, a fin de dejar un ejemplar en poder del convocado y de que el otro sirva para poder acreditar en cualquier circunstancia el momento en que fué recibida por su destinatario.

A las convocatorias se acompañará el orden del día de la sesión correspondiente y se efectuarán con los siguientes plazos de antelación:

- a) La Asamblea General, con veinte días.
- b) Las de la Junta Rectora, con ocho días.
- c) Las de las Comisiones y Ponencias Provinciales, con cuarenta y ocho horas.

Art. 25. Las reuniones de los Organos centrales y Comisiones Provinciales podrán celebrarse en primera o en segunda convocatoria. Desde el momento en que debiera celebrarse la primera al señalado para la segunda, mediarán los siguientes espacios de tiempo:

- a) En la Asamblea General, veinticuatro horas.
- b) En la Junta Rectora y Comisiones Provinciales, media hora.

Art. 26. Cuando se encuentre reunida en el domicilio social la totalidad de los miembros de un Organó de Gobierno, sin previa convocatoria, podrán celebrar sesión y tener plena validez los acuerdos adoptados sin más requisito que la aprobación previa y por unanimidad de declarar la conveniencia de celebrarla en tal forma y de tratar en ella los asuntos que concretamente se determinen. De estas reuniones deberá también levantarse el acta correspondiente.

Art. 27. Para que los Organos de Gobierno Centrales y Comisiones Provinciales se consideren válidamente constituidos será necesaria la asistencia de la mitad más uno de

sus componentes, en primera convocatoria; y un mínimo de la tercera parte, en segunda.

Art. 28. Por lo que respecta a las Ponencias provinciales, será precisa la asistencia de los dos Vocales que las constituyen, en única convocatoria.

Si no pudiera concurrir a la reunión el Vocal electivo, lo comunicará con la máxima urgencia al Delegado provincial, con el fin de que por éste se convoque al Vocal suplente. Si tampoco acudiese éste, se suspenderá la sesión, procediéndose por el Delegado a nueva citación del titular y, en su caso, del suplente.

Si a esta nueva reunión tampoco acudiese ninguno de los dos Vocales, el Delegado elevará el expediente o expedientes de prestaciones, debidamente informados, a la Sede Central para su resolución por la Junta Rectora.

Art. 29. Los miembros de los Organos de Gobierno podrán hacer uso de la palabra:

- 1.º Para una cuestión previa o de orden.
- 2.º Para defender o impugnar una proposición.
- 3.º Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.
- 4.º Para rectificar una sola vez cuando hayan tomado parte en algún debate.

Art. 30. Cuando un miembro de los Organos de Gobierno se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por la Presidencia.

El Presidente podrá retirar la palabra al Vocal de los Organos de Gobierno a quien hubiese llamado al orden e incluso ordenará su expulsión del local si ello fuese necesario.

Art. 31. Los acuerdos de los Organos centrales y de las Comisiones provinciales se adoptarán por mayoría de votos entre los miembros que se hallen presentes. Cuando resulte empate en una votación se repetirá ésta, con un intervalo de quince minutos, en que se suspenderá la sesión para que los asistentes puedan deliberar; si en la segunda votación hubiese también empate, decidirá el Presidente.

Las votaciones serán nominales cuando así lo solicite la tercera parte de los asistentes.

Los acuerdos de las Ponencias provinciales se adoptarán por unanimidad. Si hubiera discrepancia entre sus dos componentes, se remitirá el expediente de que se trate a la Junta Rectora para su resolución.

Art. 32. De las liberaciones de los Organos de Gobierno se harán constar en el libro de actas correspondiente—debidamente diligenciado por la Delegación de Trabajo—las conclusiones y acuerdos adoptados, autorizándose las actas con las firmas del Presidente y Secretario.

Las actas de las Ponencias serán autorizadas por sus dos componentes.

Art. 33. Los miembros de los Organos de Gobierno percibirán por su asistencia a las reuniones reglamentarias convocadas dietas de asistencia o de asistencia y desplazamiento, según los casos. La cuantía de estas dietas será fijada por la Junta Rectora.

CAPITULO II

Del Presidente y Vicepresidente

Art. 34. En el Presidente de los Organos de Gobierno Centrales concurre la alta representación y orientación de la Entidad, de la que es primera jerarquía y máxima figura representativa de los asociados.

Serán funciones del Presidente o de quien reglamentariamente le sustituya:

1.ª Representar a la Institución, en unión del Director, en todos los actos y contratos que se celebren.

2.ª Convocar y presidir las reuniones de los Organos de Gobierno Centrales, dirigir sus discusiones y decidir las votaciones en caso de empate.

3.ª Fijar el orden del día de las sesiones de los Organos centrales.

4.ª Ejercitar funciones de fiscalización en todos los servicios y actividades de la Institución, cuando lo considere oportuno, asistido siempre del Director.

5.ª Designar, de acuerdo con la Junta Rectora, las personas que deban cubrir interinamente, hasta la primera reunión de la Asamblea General, las vacantes que se produzcan en aquélla.

Art. 35. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales atribuciones y deberes, en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento u otra cualquier circunstancia que así lo requiera, como igualmente en aquellos casos en que mediare delegación

CAPITULO III

De los Organos ejecutivos

Art. 36. Son ejecutores de los acuerdos de los Organos de Gobierno:

- a) El Director de la Institución.
- b) Los Delegados provinciales.

SECCIÓN 1.ª—Del Director

Art. 37. Corresponderán al Director y serán funciones del mismo:

1.ª Representar a la Institución, en unión del Presidente, en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante las Autoridades, Tribunales y Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares o cualesquiera otros Organismos, Entidades, Oficinas y personas con los poderes oportunos de la Junta Rectora, cuando sean necesarios a los indicados efectos.

2.ª Asistir al Presidente, cuando proceda, en la fiscalización de las actividades y los servicios administrativos de la entidad.

3.ª Ejecutar los acuerdos de los Organos de Gobierno.

4.ª Proponer las reuniones de dichos Organos, cuando lo estime necesario.

5.ª Ordenar los pagos correspondientes a la aplicación de los distintos conceptos presupuestarios y los derivados de la concesión de beneficios o prestaciones.

6.ª Autorizar, con su visto bueno, los justificantes de ingresos y demás documentos análogos.

7.ª Ostentar la Jefatura del personal y de los servicios administrativos.

8.ª Cumplir y hacer cumplir, respondiendo ante sus Organos de Gobierno y Servicio de Mutualidades Laborales, del fiel cumplimiento de los Estatutos, normas y procedimientos administrativos.

9.ª Informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Todas las atribuciones de dirección y gestión que no estén específicamente reservadas a la Asamblea General y Junta Rectora.

SECCIÓN 2.ª—Del Delegado Provincial

Art. 38. A efectos análogos a lo establecido con respecto al Director, el Delegado provincial de Mutualidades Laborales ostentará, dentro de su respectivo ámbito provincial, la representación legal de la Institución ante las autoridades, Tribunales, Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares y cualesquiera otros Organismos o personas.

Art. 39. Corresponden al Delegado provincial y son funciones del mismo:

1.ª Realizar y ejecutar los acuerdos administrativos de los Organos de Gobierno Nacionales y Provincial, debiendo estar en contacto y dependencia con el Servicio de Mutualidades Laborales a los efectos de unificación, coordinación y régimen interior.

2.ª Proponer al Presidente de la Comisión provincial la reunión de ésta, siempre que lo considere preciso; y convocar las reuniones de la Ponencia provincial.

3.ª Asistir a las reuniones de la Comisión o Ponencia provincial como Vocal nato.

4.ª Suspender, en su caso, por considerarlos antirreglamentarios, los acuerdos adoptados por la Comisión provincial, dando cuenta al Organo superior inmediato a los oportunos efectos.

5.ª Coordinar la labor de los Departamentos de la Delegación con los servicios de la Institución.

6.ª Ordenar los pagos acordados.

7.ª Ostentar la Jefatura del personal.

8.ª Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, normas y procedimiento administrativo, respondiendo de su fiel cumplimiento ante los Organos de Gobierno de la Institución y Servicio de Mutualidades Laborales.

9.ª Llevar el despacho de los asuntos e informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Velar con el máximo interés para que los trabajadores de su ámbito territorial sean informados de todo lo referente a sus deberes y derechos.

11. Organizar, con la Comisión provincial, los actos de entrega de prestaciones y disponer los medios para una eficaz y sincera propaganda que facilite el exacto conocimiento por los trabajadores de los fines y realizaciones del sistema mutualista.

TITULO IV

Régimen económico

CAPITULO PRIMERO

Recursos económicos

Art. 40. Los recursos económicos de la Mutualidad son los siguientes:

1.ª La aportación de las Empresas, consis-

tente en el 4 por 100 de los salarios de los productores que estén a su servicio.

2.º Las cuotas de sus trabajadores, consistentes en el 3 por 100 de sus remuneraciones.

3.º El 4 por 100 de los salarios en concepto de participación en beneficios que ingresarán las Empresas.

4.º Los intereses de los bienes patrimoniales de la Institución.

5.º El importe de cuantos donativos, subvenciones o legados sean hechos a la Institución.

6.º Los ingresos de cualquier índole que puedan efectuarse con arreglo a los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y demás de general aplicación.

Art. 41. La obligación de cotizar a la Mutuality por las Empresas y trabajadores en ella encuadrados se inicia en la fecha que así se disponga por la respectiva Reglamentación Nacional de Trabajo o disposición expresa de incorporación o desde la creación de la Empresa si fuese posterior a aquélla.

Art. 42. El haber o salario que ha de servir de base para la liquidación de las cuotas será el que para las Mutualidades y Montepíos Laborales se determine en la legislación vigente.

Art. 43. Las liquidaciones e ingresos de las cuotas patronal y obrera deberán realizarse por las Empresas en períodos trimestrales.

No obstante, la Junta Rectora podrán acordar que sea mensual la liquidación del pago para aquellas Empresas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Frecuentes y numerosas altas y bajas en su personal.

b) Tener repetidas épocas de ceses o suspensiones en el trabajo.

c) Haber sido sancionadas repetidamente por demora en el pago.

d) Cualquier otra causa suficiente a juicio de la Junta Rectora.

Art. 44. Los ingresos se efectuarán en la forma que determine el Servicio de Mutualidades Laborales y en los siguientes plazos:

a) Para las Empresas de ingreso trimestral, dentro de los meses de abril, julio, octubre y enero; cada ingreso corresponderá a las liquidaciones del trimestre natural, anterior.

b) Para las empresas de ingreso mensual, dentro del mes siguiente al que la liquidación corresponda.

Art. 45. Las Empresas que cuenten con Centros de Trabajo situados en diferentes provincias podrán solicitar, y la Junta Rectora acordar, que las liquidaciones de cuotas se realicen totalmente en la capital de la provincia donde radique la Sede Central de la Empresa, siempre que ésta presente tantas hojas de liquidación debidamente diligenciadas como Centros de Trabajo de la misma dependan, y atendiendo los requisitos que para el mejor servicio y funcionamiento consideren conveniente establecer los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 46. Todo ingreso no realizado dentro de los plazos establecidos será incrementado con el 10 por 100 del montante de la liquidación.

Para la exacción de las cuotas no satisfechas será de aplicación la Orden de 8 de octubre de 1949, correspondiendo al Director

de la Entidad las facultades que en la misma se asignan a los Delegados del Instituto Nacional de Previsión.

Art. 47. Las Empresas responderán en todo caso ante la Mutuality del pago de las cuotas correspondientes a los asociados en ellas encuadrados. Para ello, cuando aquéllas realicen el pago de los salarios a cada interesado, descontarán las cuotas que les correspondan, y que en unión de sus aportaciones deberán ser ingresadas en la forma que determina el artículo 44.

Cuando las Empresas no retuvieren las cuotas de sus trabajadores o no las ingresasen junto con sus aportaciones en los plazos reglamentarios, el importe de las cuotas atrasadas y de los recargos será exigible exclusivamente a la Empresa, sin que ésta pueda efectuar a los trabajadores descuento alguno.

Art. 48. La obligación de pago de cuotas a la Mutuality prescribirá a los cinco años, a contar de la fecha en que preceptivamente debieron ser abonadas.

Art. 49. Los asociados de la Mutuality que cesaren en el servicio activo de las Empresas no tendrán derecho alguno a que les sean devueltas las cuotas ingresadas, salvo cuando con carácter general y referido a un determinado sector o clase de asociados así lo ordene el Servicio de Mutualidades Laborales.

También procederá la devolución cuando por causa de afiliación errónea lo acuerde la Mutuality. Si el erróneamente afiliado viniese en la obligación de pertenecer a otra Institución de Previsión Laboral, en lugar de acordarse la devolución de cuotas se verificará el oportuno traspaso de las mismas.

Art. 50. La afiliación maliciosa de quienes no reúnan las condiciones necesarias para la misma privará del derecho al reintegro de las cuotas satisfechas y a la concesión de toda clase de prestaciones.

CAPITULO II

Presupuestos, gastos y reservas

Art. 51. De los ingresos totales que obtenga la Mutuality por todos los conceptos se destinarán los fondos necesarios para garantizar las pensiones que estos Estatutos conceden, para atender los auxilios y subsidios a los asociados activos y a sus derechohabientes y para el pago de los gastos de administración.

Art. 52. Los gastos de representación y administración de la Sede Central de la Mutuality no excederán del 1,75 por 100 de los ingresos que la Institución obtenga por todos los conceptos.

Con independencia del porcentaje anterior y exclusivamente sobre la recaudación que por cuotas obtenga la Institución se destinará el canon de tutela y servicio oficial y el de Delegaciones Provinciales, de conformidad con lo establecido a este respecto en las disposiciones legales vigentes en cada momento.

El porcentaje correspondiente a la Delegación donde tiene su sede la Mutuality será administrado por sus Organos centrales.

Art. 53. A la Junta Rectora corresponderá la aprobación del Proyecto de presupuesto de gastos de administración para su elevación al Servicio de Mutualidades Laborales y aprobación por éste.

Art. 54. Las reservas de la Institución es-

tarán constituidas en la cuantía y forma que el Servicio de Mutualidades Laborales determine. Tanto las reservas como los excedentes serán invertidos por el sistema y orden de preferencia que establezcan las disposiciones legales.

Art. 55. Estas reservas serán las siguientes:

- a) Reservas técnicas de cobertura.
- b) Reservas de seguridad.
- c) Fondos de estabilización constituidos

con el 0,50 por 100 de la cotización, más los saldos favorables que resulten entre la siniestralidad y riesgos previstos y los reales, que se destinarán a cubrir las desviaciones desfavorables de aquella siniestralidad y a estabilizar la cotización en periodos de crisis económica incidental.

d) Fondo de garantía. Si hubiese excedentes después de cumplir todas las obligaciones estatutarias y de ser cubiertas las reservas anteriormente reseñadas, se constituirá un fondo de garantía al que se le dará, a propuesta de la Junta Rectora, el destino que determine el Servicio de Mutualidades Laborales.

Art. 56. La Mutualidad construirá un fondo para prestaciones extrarreglamentarias, formado con el 2 por 100 de la cotización obtenida en cada ejercicio.

Dicho fondo se aplicará en la siguiente forma:

- a) El 75 por 100 del importe procedente de cada provincia, a disposición de los Organos provinciales.
- b) El 25 por 100 restante, a disposición de los Organos de Gobierno centrales.

CAPITULO III

Sistema contable

Art. 57. La sede central de la Mutualidad organizará su contabilidad por el sistema de partida doble, desarrollándola en los siguientes Libros:

- a) Libro Diario.
- b) Libro Mayor.
- c) Libro de Inventarios y Balances.
- d) Libro de Movimiento de Caja.
- e) Libro de cuentas corrientes con las Delegaciones.
- f) Libro de cuentas corrientes de Tesorería.
- g) Libro de cuentas técnicas.
- h) Registro de Valores y reservas.
- i) Otros libros que la práctica haga necesarios.

TITULO V

Prestaciones

CAPITULO PRIMERO

De sus clases

Art. 58. La Mutualidad concederá a sus beneficiarios las prestaciones que se enumeran a continuación, siempre que concurran las circunstancias y se cumplan los requisitos establecidos en los presentes Estatutos:

- Pensión por Jubilación.
- Pensión por Invalidez.
- Pensión o Subsidio de Viudedad.
- Pensión de Orfandad.
- Pensión por larga Enfermedad.
- Auxilio por Defunción.

Premio por matrimonio.

Premio por natalidad.

Asistencia Sanitaria.

Art. 59. Asimismo, la Institución concederá prestaciones extrarreglamentarias con los fondos previstos en el artículo 56, en las condiciones establecidas en la Orden de 13 de julio de 1950.

CAPITULO II

Pensión por Jubilación

Art. 60. Se concederá una pensión vitalicia por jubilación a los socios beneficiarios que al cesar en el servicio activo de las Empresas reúnan las condiciones siguientes:

- a) Haber cumplido los sesenta años de edad.
- b) Tener una antigüedad mínima de diez años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- c) Tener cubierto el período mínimo de cotización que se preceptúa en el artículo 102 de estos Estatutos.
- d) Ser socio activo de la Mutualidad.

Art. 61. También tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta años de edad:

- 1.º Los pensionistas de la Mutualidad por larga Enfermedad.
- 2.º Los incapacitados por accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable.

En ambos casos el beneficiario deberá reunir los requisitos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de accidente o enfermedad, y no le será computado el tiempo transcurrido desde aquel momento para determinar la cuantía de la pensión.

Art. 62. La cuantía de la pensión de jubilación será la que se determina en la escala que a continuación se especifica, con las aclaraciones que también se expresan:

Edad	Varones	Hembras
60	40 %	65 %
61	46 %	66 %
62	52 %	67 %
63	58 %	68 %
64	64 %	69 %
65	70 %	A partir de esta
66	72 %	edad la misma es-
67	75 %	cala que a los va-
68	78 %	rones.
69	81 %	
70 en adelante,	85 %	

Esta escala será disminuída en un uno por ciento cada semestre o fracción que haya dejado de cotizar el peticionario desde que se inició esta obligación en el sector laboral a que pertenezca.

Art. 63. La pensión de jubilación podrá ser solicitada con una antelación máxima de tres meses a la fecha en que el asociado desee disfrutarla. Caso de ser concedida la pensión, no producirá sus efectos hasta que el productor presente el certificado de baja definitiva en sus servicios profesionales.

Si el pensionista volviese a efectuar trabajo activo por cuenta ajena se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

CAPITULO III

Pensión por Invalidez

Art. 64. La Mutualidad concederá pensión vitalicia por invalidez a los socios beneficiarios que quedasen incapacitados absoluta y permanentemente para todo trabajo, una vez dados de alta médica y con los requisitos y limitaciones que se establecen en este capítulo.

No tendrán derecho a este beneficio los asociados cuya incapacidad cause derecho a pensión según la legislación de accidentes y enfermedades profesionales. No obstante, tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta años de edad, según lo establecido en el artículo 61 de estos Estatutos.

Art. 65. Se concederá la pensión por invalidez al socio beneficiario que al tiempo de cesar en su trabajo reuniere los siguientes requisitos:

- a) Ser socio activo.
- b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- c) Tener cubierto un período de carencia de 500 días.

También se concederá esta pensión al asociado que quedare inválido siendo pensionista de la Mutualidad por larga Enfermedad.

Art. 66. Para la determinación de la cuantía de esta pensión se aplicará la escala establecida en el artículo 62 para la jubilación, pero su importe mínimo será en todo caso del 60 por 100 del salario regulador del asociado.

Art. 67. La pensión por invalidez quedará anulada si el beneficiario de la misma recobrara las condiciones físicas suficientes para realizar trabajo activo por cuenta ajena.

La Mutualidad revisará periódicamente los expedientes y se reserva el derecho de reconocimiento médico siempre que lo estime conveniente.

CAPITULO IV

Pensión de Viudedad

Art. 68. Causará derecho a la prestación de Viudedad el socio beneficiario que reuniese a su fallecimiento las siguientes condiciones:

- a) Ser socio activo o pensionista de la Institución.
- b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

No causará derecho a esta prestación el asociado que fallezca como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable, siempre que a la viuda del fallecido se le acredite pensión por estas causas.

Art. 69. Tendrá derecho al percibo de esta prestación la viuda del socio beneficiario fallecido que reuniese las siguientes condiciones:

- a) Haber contraído matrimonio con el socio causante con dos años de antelación, por lo menos, a la fecha del fallecimiento. No se exigirá este requisito cuando quedaren hijos del matrimonio.
- b) Haber hecho vida conyugal con el causante hasta su muerte, o que en caso de sepa-

ración de hecho o de derecho careciese de culpabilidad.

c) No haber abandonado a sus hijos y observar una conducta honesta y moral.

Art. 70. La naturaleza y cuantía de la prestación de viudedad se determinará conforme a las siguientes normas:

a) Viudas menores de cuarenta años de edad, sin hijos, con derecho a pensión de orfandad y no incapacitadas para el trabajo:

1.º Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: Entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades del salario regulador.

2.º Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: Entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades de la pensión que aquél estuviese percibiendo.

b) Viudas mayores de cuarenta años, o menores de esta edad, pero con hijos con derecho a orfandad o incapacitadas para el trabajo:

1.º Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: Pensión vitalicia de cuantía igual a 45 por 100 del salario regulador del causante.

2.º Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: Pensión vitalicia igual al 65 por 100 de la pensión que estuviese percibiendo el fallecido.

Si la interesada tuviera derecho o estuviera percibiendo cualquier otra pensión de ésta u otra Institución de Previsión Laboral, sólo percibirá la de viudedad en cuantía que, sumada a la anterior, no rebase el 100 por 100 del salario regulador del causante. Si la viuda dejase de percibir aquella pensión por cesar su derecho, percibirá la de viudedad en su cuantía total.

Art. 71. La viuda dejará de percibir la pensión por las causas siguientes:

- a) Contraer nuevas nupcias o adquirir estado religioso.
- b) Abandono comprobado de los hijos menores sometidos a su tutela.
- c) Observar una conducta deshonesta o inmoral.

Art. 72. Cuando el socio fallecido fuera mujer, el viudo tendrá derecho a los beneficios que se establecen en este capítulo, siempre que se hallare incapacitado absoluta y permanentemente para toda clase de trabajo y no perciba pensión derivada de la legislación de accidentes del trabajo y enfermedad profesional o de Mutualismo Laboral obligatorio y el socio fallecido reuniese las condiciones generales previstas para esta prestación. El viudo beneficiario dejará de percibir este beneficio si desapareciesen las causas de su incapacidad.

CAPITULO V

Pensión de Orfandad

Art. 73. Causará derecho a esta pensión el socio beneficiario varón o hembra que reuniese a su fallecimiento las siguientes condiciones:

- a) Ser socio activo o pensionista de la Mutualidad.
- b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

Art. 74. Tendrá derecho al percibo de esta prestación:

a) Los hijos legítimos—incluso los póstumos—, legitimados, naturales reconocidos y adoptivos del asociado fallecido.

b) Los hijos legítimos, legitimados, naturales reconocidos y adoptivos que la viuda del asociado fallecido hubiese llevado al matrimonio, siempre que viviesen a expensas de aquél y no disfruten pensión de otra Institución de Previsión Laboral.

Los beneficiarios comprendidos en los apartados anteriores deberán reunir, al tiempo del fallecimiento del asociado causante, los requisitos de ser menores de dieciocho años o incapacitados de manera absoluta para el trabajo que no perciban ninguna otra pensión por este concepto.

Art. 75. También tendrán derecho a esta prestación en concepto de asimilados a hijos, siempre que hayan convivido con el causante y a sus expensas con anterioridad al fallecimiento de aquél, los siguientes beneficiarios:

a) Los hermanos del causante que reúnan los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo anterior.

b) El padre del causante que reune las siguientes condiciones: Ser pobre, sexagenario o incapacitado para toda clase de trabajo, no realizar trabajo por cuenta ajena y no percibir pensión alguna de Institución de Previsión Laboral o por accidente o enfermedad profesional indemnizable.

c) La madre del causante, cualquiera que sea su edad, siempre que sea pobre y no perciba pensión alguna del Mutualismo Laboral o derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Art. 76. La cuantía de la pensión de orfandad, cuando al mismo tiempo haya sido concedida prestación de viudedad, será de 10 por 100 del salario regulador, con un mínimo de 150 pesetas por cada beneficiario.

En caso de fallecimiento de la madre o padre viudo que percibiese pensión de viudedad, se revisará la cuantía de la orfandad, que se regulará por las siguientes normas:

a) A uno de los huérfanos se le acreditará la que por viudedad percibiese el padre o madre fallecido.

b) A los demás huérfanos se les acreditará el 10 por 100 a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, con un mínimo de 150 pesetas por cada uno.

c) La suma total de las cantidades de los dos párrafos anteriores se dividirá por el número de beneficiarios.

d) Por cada beneficiario a quien se extinga el derecho se reducirá la suma dicha, en un 10 por 100 del salario regulador o en 150 pesetas, según corresponda.

e) El último huérfano con derecho a pensión será el que conserve la de viudedad.

Art. 77. Cuando al fallecimiento del causante se produzca la orfandad absoluta, la pensión que corresponda se regulará por lo establecido en el párrafo segundo del artículo anterior.

Por el contrario, si al fallecer el causante no tuviera derecho a pensión de viudedad el padre o madre sobreviviente, los huérfa-

nos percibirán su pensión en la cuantía establecida en el párrafo primero del artículo anterior.

Art. 78. En caso de orfandad absoluta, la pensión se otorgará sin la exigencia del requisito de antigüedad laboral de cinco años.

Art. 79. La pensión de orfandad se extinguirá cuando el beneficiario cumpliera la edad de dieciocho años o cesare la incapacidad, por su fallecimiento o por adquirir estado matrimonial o religioso.

Art. 80. Las pensiones de orfandad se entregarán al padre, madre, parientes o personas que acrediten los siguientes extremos:

a) Que el beneficiario viva en su compañía y a sus expensas al tiempo de solicitar la pensión.

b) Que en lo sucesivo se continuarán encargando del mantenimiento, educación y formación profesional de los huérfanos, lo que comprobará periódicamente la Mutualidad en la forma que considere oportuna.

Art. 81. Si los huérfanos estuviesen totalmente abandonados, o las personas que los tengan a su cargo no merezcan la confianza suficiente de la Mutualidad, la Comisión Provincial Permanente que corresponda se constituirá en patronato tutelar de los mismos, sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente, y propondrá a la Junta Rectora las medidas que deban adoptarse para la mejor protección de los huérfanos hasta que cumplan los dieciocho años o cesare la incapacidad, y que podrá consistir en la concesión de becas, ingreso en Colegios o Instituciones de Beneficencia, Escuelas de Aprendizices u otras medidas análogas.

Esta propuesta deberá comprender, después de la exposición de motivos, un cálculo de los gastos que la protección de dichos huérfanos pueda ocasionar a la Institución.

CAPITULO VI

Pensión por Larga Enfermedad

Art. 82. Se concederá un auxilio por larga enfermedad a los socios beneficiarios que temporalmente estuvieran imposibilitados totalmente para el trabajo por causa de enfermedad, y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hubieren agotado los plazos de disfrute del Seguro Obligatorio de Enfermedad o que hubiere transcurrido el plazo de veintiséis semanas si no hubiesen hecho uso o no se hallaren afiliados a dicho Seguro.

b) Que la enfermedad que los imposibilite totalmente para el trabajo no tenga carácter indemnizable y sea diagnosticada por los facultativos especialistas que designe la Mutualidad cuando ésta lo considere conveniente.

c) Que cumplan rigurosamente las prescripciones facultativas de los médicos que los asistan; en caso de contravenir el plan o régimen de vida establecido por éstos perderán automáticamente el derecho a este auxilio.

d) Que el asociado tuviera una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

No se exigirá este requisito a los productores menores de diecinueve años, siempre que la enfermedad hubiese sido contraída con posterioridad a su ingreso como asociado.

e) Que tenga cubierto el período mínimo de cotización que preceptúa el artículo 102 de estos Estatutos.

Se exceptúan los menores de diecinueve años a que se refiere el apartado anterior, a quienes sólo se exigirá un período mínimo de seis meses de cotización.

Art. 83. La cuantía del auxilio por larga enfermedad será equivalente al 50 por 100 del salario regulador.

Art. 84. Los períodos máximos por los que se concederá este auxilio serán los siguientes:

a) En el primer año de enfermedad, veintiséis semanas como máximo.

b) En el segundo año de enfermedad, cincuenta y dos semanas como máximo.

c) En el tercer año, cincuenta y dos semanas como máximo.

Art. 85. Agotados los plazos de duración a que se refiere el artículo anterior, el beneficiario que continuara enfermo será sometido a reconocimiento médico, y la Junta Reectora, con el informe del Órgano provincial respectivo, podrá acordar que se prolongue la percepción de la pensión, siempre que ello fuera posible de acuerdo con lo que se dispone a continuación.

Los gastos totales que en cada ejercicio económico ocasionen estas concesiones graduables no podrán ser superiores al 1 por 100 de la cotización del año anterior.

CAPITULO VII

Auxilio por defunción

Art. 86. Al ocurrir el fallecimiento de un asociado en activo o pensionista, la Mutualidad procederá a la entrega inmediata de 2.000 pesetas a los familiares más próximos, parientes o personas que convivieran con aquél, para coadyuvar a los gastos derivados del fallecimiento.

Art. 87. Para la entrega de este auxilio no se necesitará reunir ninguna otra condición que no sea la de que el fallecido tuviere la consideración de socio activo o la de pensionista por jubilación, invalidez o larga enfermedad.

La cantidad señalada se entregará inmediatamente a los familiares más próximos, parientes o personas que convivieran con el socio fallecido. Si no existiera ninguna de las personas señaladas anteriormente que pudiera atender al sepelio, la Comisión Provincial o Ponencia se encargará de la organización del entierro y de los sufragios por el alma del fallecido.

CAPITULO VIII

Premio por matrimonio

Art. 88. El socio activo que contraiga matrimonio tendrá derecho a un premio de nupcialidad. Este premio podrá ser solicitado con quince días de antelación a la fecha en que vaya a efectuarse el matrimonio.

La cuantía del premio será de 1.000 pesetas.

Art. 89. Para otorgar esta prestación se precisará que el asociado beneficiario reúna los siguientes requisitos:

a) Ser socio activo de la Mutualidad. En

el caso de ser mujer el socio beneficiario que solicite el premio por matrimonio, bastará con que haya sido socio activo hasta dos meses antes de la fecha de su matrimonio, por haber cesado en la Empresa en la que prestase sus servicios.

b) Tener una antigüedad laboral mínima de cinco años.

c) Tener cubierto el período de cotización previsto en el artículo 102 de estos estatutos.

CAPITULO IX

Premio de natalidad

Art. 90. Los socios beneficiarios tendrán derecho a la percepción de un premio de natalidad por cada hijo que les nazca con la condición de legítimo y reúna los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Civil.

En aquellos casos en que los hijos nacidos no alcanzasen la viabilidad legal, quedará al justo criterio del Órgano de Gobierno competente la concesión o denegación del referido premio.

Para percibir esta prestación son requisitos indispensables los señalados en los apartados a), b) y c) del artículo anterior y acreditar fehacientemente el hecho del nacimiento del hijo y el matrimonio de los padres.

Art. 91. La cuantía del premio de natalidad será de 500 pesetas.

CAPITULO X

Asistencia sanitaria

Art. 92. La Mutualidad concederá la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica en la misma extensión del Seguro Obligatorio de Enfermedad a sus pensionistas y familiares que convivieren con ellos y a sus expensas con anterioridad a la solicitud de la pensión y reúnan, además, las condiciones siguientes:

a) Si el pensionista hubiese estado afiliado en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, los familiares con derecho a esta prestación serán los inscritos en la Cartilla de dicho Seguro al tiempo de solicitar la pensión, así como los hijos que naciesen posteriormente.

b) Si el pensionista no pertenecía al Seguro Obligatorio de Enfermedad, tendrán derecho los familiares comprendidos dentro del tercer grado de consaguinidad y los hijos que naciesen posteriormente.

Art. 93. A los efectos de este beneficio, la Mutualidad, al conceder una pensión vendrá obligado a notificar a los interesados el procedimiento que tenga establecido para la efectividad del mismo, sin que para ello sea precisa solicitud alguna por parte de los beneficiarios.

Art. 94. Los familiares de los pensionistas dejarán de disfrutar este beneficio tan pronto tengan obligación de estar inscritos en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, dejen de convivir con el asociado o cuando, por cualquier circunstancia, el pensionista dejase de tener esta condición.

Art. 95. La Mutualidad coordinará sus servicios de asistencia sanitaria con los establecidos por otros Montepíos o Mutualidades con los del Estado, Instituciones de Previsión y Organización Sindical.

CAPITULO XI

Disposiciones comunes a todas las prestaciones

Art. 96. Los beneficios que concede esta Institución son compatibles con las derivados de los Seguros Sociales Obligatorios y con los que puedan concederse por el Estado, Corporaciones, Compañías de Seguros y Empresas, en las excepciones derivadas de las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

Art. 97. Los afiliados que obligatoriamente colicen a esta y a otra u otras Instituciones de Previsión Laboral, o a esta Mutualidad por dos o más Empresas, tendrán derecho a percibir las prestaciones en las condiciones previstas en el artículo 18 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 98. Los afiliados que sean baja en esta Institución, por pasar a pertenecer a otra, podrán percibir las prestaciones señaladas en estos Estatutos cuando concurren las circunstancias y se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la Orden de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50).

Art. 99. Las prestaciones que concede la Mutualidad tienen carácter personal e intransferible, y, en consecuencia, no podrán ser embargadas, objeto de cesión total o parcial ni servir de garantía de ninguna obligación.

Art. 100. Tendrán la consideración de socios activos de la Institución todas aquellas personas que presten sus servicios por cuenta ajena en actividades encuadradas en esta Mutualidad.

Art. 101. Asimismo conservarán la condición de socios activos quienes, habiendo tenido este carácter, dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena por alguna de las siguientes causas:

- a) Por enfermedad ininterrumpida.
- b) Por hallarse prestando el servicio militar.
- c) Por paro involuntario.

La concesión de prestaciones a quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los apartados anteriores se sujetará a lo dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Orden de 16 de mayo de 1950 y en la Orden de 24 de julio del mismo año (Refs. 422/50 y 652/50).

Art. 102. Para causar derecho a las prestaciones de jubilación, larga enfermedad, matrimonio y natalidad, será preciso que el asociado haya cotizado a la Mutualidad durante un período de tiempo igual a la mitad del comprendido entre la fecha inicial de cotización en el sector laboral a que el asociado pertenezca y aquella otra en que se produzca el hecho causante de la prestación.

Como excepción a esta regla, el período mínimo de cotización será en todo caso de seis meses durante el primer año de obligatoriedad en la cotización de cada sector laboral. A partir de la fecha en que se cumplan diez años de obligatoriedad de cotización, el período exigible será de cinco años mientras no se disponga otra cosa.

Art. 103. Se considerará como antigüedad laboral aquella que se acredite de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 104. El salario regulador para la concesión de prestaciones se hallará en la forma prevista en el artículo 25 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 105. Si las prestaciones concedidas por la Institución resultaren de cuantía superior a la que corresponda, como consecuencia de falsedad de las Empresas en las declaraciones que formulen a estos efectos, la Mutualidad podrá reclamar a la Empresa las diferencias resultantes ante la jurisdicción competente.

Si por la misma causa de falsedad de la Empresa en dichas declaraciones, la prestación concedida fuese inferior a la que realmente corresponda, el productor perjudicado podrá reclamar contra la Empresa por el perjuicio sufrido.

Art. 106. Las prestaciones que la Institución otorga deberán solicitarse dentro de los plazos previstos en el artículo 26 de la Orden de 16 de mayo de 1950, utilizando los modelos que aquella tenga establecidos y acompañando los documentos que para cada caso se señalen.

Art. 107. Las prestaciones que se establecen en los presentes Estatutos no podrán satisfacerse por la Mutualidad si la Empresa, en el momento en que deban ser abonadas, no estuviere al corriente en el pago de todas las cotizaciones exigibles a la misma.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 12 al 16 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 108. El devengo de las pensiones que conceda la Mutualidad se iniciará y finalizará de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 109. Los socios beneficiarios a quienes les haya sido concedida alguna prestación en virtud de declaraciones falsas o inexactas de los mismos no tendrán derecho a su percibo. En el caso de que hubiesen recibido ya su importe, estarán obligados a su devolución, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.

Art. 110. Las cantidades que correspondan a los beneficiarios por cualquiera de las prestaciones otorgadas por esta Institución podrán ser percibidas por aquéllos en la Empresa donde últimamente hubieran prestado sus servicios o en aquella otra que se halle más cerca de su domicilio, siempre que la organización del Montepío lo permita y así convenga.

Art. 111. Las mensualidades que un pensionista tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento se entregarán a la esposa, hijos, padres sexagenarios o familiares más próximos que conviviesen con el fallecido, previa la justificación que los Organos de la Mutualidad consideren oportuna en cada caso.

La misma norma se aplicará respecto de cualesquiera prestaciones que un asociado tuviere pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento.

A falta de los citados familiares, el importe de las pensiones o prestaciones revertirá a la Mutualidad.

TITULO VI**Régimen disciplinario****CAPITULO PRIMERO****De las faltas y sus sanciones**

Art. 112. Constituirán falta y darán lugar a la imposición de sanciones los siguientes hechos:

1.º Defraudar a sabiendas los intereses de la Mutualidad o poner voluntariamente los medios que conduzcan a tal fin.

2.º Falsear las declaraciones ordinarias y extraordinarias que se hagan ante la Mutualidad o aportar datos inexactos al mismo, bien en orden a la concesión de beneficios o con respecto a otras cualesquiera manifestaciones de las actividades de esta Entidad.

3.º Realizar actos indecorosos o perjudiciales para la reputación o el buen crédito de la Mutualidad.

4.º Entorpecer intencionadamente las actividades de la Mutualidad. Se considerarán comprendidos en este apartado los que, habiendo sido elegidos Vocales de la Junta Rectora o restantes Organos de Gobierno, no asistan a sus reuniones o no presten la colaboración debida.

5.º No observar las normas, disposiciones o acuerdos emanados de los Organos competentes de la Mutualidad, relativos al cumplimiento de sus fines o al buen desarrollo y orden de su actividad.

Art. 113. Las sanciones que podrá imponer la Mutualidad a sus asociados serán las consignadas en la siguiente escala:

1.ª Apercibimiento privado, consistente en comunicación verbal o escrita al sancionado.

2.ª Apercibimiento público. El grado de publicidad que preceda dar a esta sanción se determinará en cada caso por el Organó sancionador.

3.ª Inhabilitación temporal para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución u ocupar cargos de la misma. Esta sanción se entenderá por un tiempo comprendido entre los dos y los cinco años.

4.ª Inhabilitación permanente para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución.

5.ª Multa de veinticinco a cinco mil pesetas.

Cuando se trate de un socio beneficiario, la sanción se hará efectiva mediante descuento en los salarios del sancionado, cuya cuantía será fijada por la Junta Rectora sin exceder del 2,5 por 100.

Si antes de completar el pago de la multa fuese concedida al sancionado alguna prestación de entrega de capital, se deducirá de su importe lo necesario para hacer efectiva la sanción. Si se tratase de pensiones, se deducirá de cada mensualidad un 25 por 100 hasta completar dicho pago.

Asimismo la Junta Rectora podrá acordar se suspenda la efectividad de una pensión, en tanto se resuelva lo que corresponda, en los casos en que se hubieran producido anomalías en la tramitación del expediente o falsedades en los documentos aportados al mismo, así como cuando los beneficiarios de

aquélla no cumplan los requisitos establecidos en estos Estatutos para su aprobación.

Art. 114. Siempre que haya de imponerse una sanción se atenderá para la determinación de la misma, en cada caso, a la gravedad de la falta cometida, al perjuicio que haya ocasionado o que haya pretendido ocasionar, el sancionado, al criterio adoptado en resoluciones recaídas en casos anteriores y análogos y a cualesquiera otras circunstancias que deban tenerse en cuenta a juicio del Organó sancionador.

CAPITULO II**Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones**

Art. 115. La imposición de sanciones será de competencia de la Junta Rectora.

Art. 116. Las Comisiones Provinciales Permanentes, tan pronto tengan conocimiento de haberse realizado algún hecho constitutivo de falta, lo pondrán en conocimiento de la Junta Rectora en escrito razonado, en el que se expondrán los hechos y circunstancias ajenas, proponiendo la oportuna sanción.

En la primera reunión que celebre la Junta Rectora después de recibir el expediente incoado, se pronunciará por la sanción que corresponda o declarará la no existencia de responsabilidad, devolviendo el expediente, una vez tomada debida nota, a la Comisión de Procedencia, a los fines de su oportuno archivo y efectos.

Art. 117. En los casos en que la Junta Rectora o Asamblea General observasen posibles faltas entre los componentes de los Organos de Gobierno subordinados, acomodarán su procedimiento al enunciado en los artículos precedentes pudiendo suspender en sus funciones a los miembros de las Comisiones o Junta Rectora, según los casos, interin se sustancie el oportuno expediente, dando cuenta de la medida a la Jefatura del Servicio.

TITULO VII**De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno**

Art. 118. Como trámite previo a la iniciación de las reclamaciones en vía contenciosa ante la Magistratura de Trabajo, podrán los interesados recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno en las condiciones y cumpliendo los requisitos señalados en los artículos 29, 30 y 31 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

TITULO VIII**De la inspección e intervención**

Art. 119. La inspección, vigilancia e intervención del cumplimiento por la Mutualidad, Empresas y productores beneficiarios de las obligaciones de este Estatuto derivadas, está a cargo del Ministerio de Trabajo, a través del Servicio de Mutualidades Laborales, Inspección Técnica de Previsión, Delegaciones Provinciales de Trabajo e Inspección Nacional de Trabajo, quienes podrán, cuando corresponda, imponer sanciones con arreglo a las disposiciones vigentes.

TITULO IX

Disposiciones generales

Art. 120. Para que la Mutualidad pueda proponer la reforma de estos Estatutos, será preciso que exista la conformidad de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General en sesión convocada al efecto.

Art. 121. Cualquier modificación de estos Estatutos habrá de ser aprobada por el Ministerio de Trabajo, previo informe del Servicio de Mutualidades Laborales, a quien asimismo corresponde la interpretación de este texto.

Art. 122. La Mutualidad, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y Junta Rectora, remitirá certificación de los acuerdos adoptados al Servicio de Mutualidades Laborales. Dichos acuerdos, para que tengan validez, serán confirmados por el Servicio de Mutualidades Laborales antes de haber transcurrido los quince días siguientes a su recepción. Se considerarán válidos los referidos acuerdos si después de transcurrido el plazo señalado, el indicado Servicio no hubiera hecho uso del derecho de veto.

Disposición final

Los presentes Estatutos comenzarán a regir el día 1 de agosto de 1952 y se aplicarán integralmente a las prestaciones causadas a partir de dicha fecha.

Disposiciones transitorias

Primera.—Los derechos a prestaciones nacidos en virtud de hechos acaecidos con anterioridad a 1 de agosto de 1952 se regularán en cuanto a clases, cuantía y requisitos de las prestaciones, conforme a las normas contenidas en los Estatutos aprobados por Orden de 26 de julio de 1949 (Ref. 209/49).

Segunda.—Los solicitantes de pensiones de jubilación, por hechos acaecidos a partir de 1 de agosto de 1952 podrán acogerse a la escala de jubilación establecida en los Estatutos aprobados por Orden de 26 de julio de 1949, siempre que la consideren más favorable que la prevista en los presentes Estatutos.

Transcurrido un año de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, el Servicio de Mutualidades Laborales, a través de la información que obligatoriamente remitirán las Mutualidades Siderometalúrgicas en el plazo de tres meses, decidirá sobre la prórroga o no de este derecho de opción.

400 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA

Resolución del Servicio de Mutualidades Laborales, B. O. del E. núm. 256, del 12 de septiembre de 1952.

I.— ESTATUTOS.—Rectifica los erro-

res advertidos en el texto de los Estatutos de este Montepio (Ref.399/52).. que afectan a los artículos 39, 62, 86, 113 y 2ª. Disposición Transitoria.

II.—TEXTO LITERAL.—Habiéndose padecido diversos errores en la inserción de los citados Estatutos, se rectifican a continuación:

En el artículo 39, apartado primero, línea tercera, donde dice: "Nacionales y Provincial", debe decir: "Centrales y Provincial".

En el artículo 62, párrafo último, donde dice: "Esta escala será disminuida en un uno por ciento cada semestre", debe decir: "Esta escala será disminuida en un uno por ciento por cada semestre."

En el artículo 86, donde dice: "Al ocurrir el fallecimiento de un asociado en activo o pensionista", debe decir: "Al ocurrir el fallecimiento de un asociado en activo o pensionista por jubilación, invalidez o larga enfermedad."

En el artículo 113, última línea, donde dice: "estos Estatutos para su aprobación", debe decir: "Estos Estatutos para su percepción".

En la segunda disposición transitoria, párrafo segundo, línea sexta, donde dice: "en el plazo de tres meses", debe decir: "en el plazo máximo de tres meses".

401 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.— INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Resolución del Servicio de Mutualidades Laborales, B. O. del E. número 256, del 12 de septiembre de 1952.

I.— ESTATUTOS.— Rectifica los errores advertidos en el texto oficial de estos Estatutos, que afectan a los arts. 18, 33, 37, 41, 77 y 86. (Ref. 398/52).

II.—TEXTO LITERAL.—Habiéndose padecido diversos errores en la inserción de los citados Estatutos, se rectifican a continuación:

En el artículo 18, penúltima línea, donde dice: "Lleva consigo su obligada incorporación...", debe decir: "Lleve consigo su obligada incorporación..."

Artículo 33, donde dice: "A las reuniones reglamentarias...", debe decir: "A las reuniones reglamentariamente..."

Artículo 37, 9.º, donde dice: "o así lo requieren...", debe decir: "o así lo requieran..."

Art. 41, 1.º, donde dice: "Industrias Harineras...", debe decir: "Industrias Salineras..."

Artículo 77, donde dice: "La pensión se otorgará sin existir períodos...", debe decir: "La pensión se otorgará sin exigir períodos..."

Artículo 86, donde dice: "atender al sepelio...", debe decir: "atender al sepelio..."

402 DEPARTAMENTOS MINISTERIALES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS OFICIALES.—MINISTERIO DE TRABAJO

Decreto de 4 de agosto de 1952 B. O. del Estado núm. 275 del 1 de octubre de 1952.

I.—REGLAMENTO ORGANICO.—Texto del Reglamento Orgánico del Ministerio de Trabajo, el cual responde al siguiente Índice General.

Capítulo I.—Organización y funcionamiento del Ministerio de Trabajo (artículos 1 a 7).

Capítulo II.—De la Subsecretaría (artículos 8 a 39).

Capítulo III.—De la Dirección General de Trabajo (arts. 40 a 53).

Capítulo IV.—De la Dirección General de Previsión (arts. 54 a 83).

Capítulo V.—De la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo (arts. 84 a 91).

Capítulo VI.—Otros Organismos del Ministerio (art. 92).

Capítulo VII.—De las condiciones requeridas para ejercer la Jefatura (arts. 93 a 97).

Disposiciones adicionales.—Servicio de Reincorporación de ex combatientes al trabajo (1.º) y Normas para la ejecución y cumplimiento de este Reglamento (2.º).

Disposición transitoria.—Inspección General del Ministerio.

Disposición final.—Norma derogatoria.

II.—TEXTO LITERAL.—Reorganizada la Administración central del Estado español merced a la Ley de 8 de agosto de 1939, fué dada, en consecuencia, una nueva estructuración al Ministerio de Trabajo por el Decreto expedido el día 18 de los propios mes y año.

La organización entonces establecida fué superada en los años sucesivos como consecuencia de la necesaria ampliación de funciones, al extender el Estado su acción tutelar en favor de los trabajadores, tanto en el campo estrictamente laboral como en el de la previsión social.

Ello obligó a este Departamento, no sólo a crear nuevos organismos, sino también a la adaptación o modificación de otros ya existentes, en armonía con las nuevas actividades que se implantaban, haciéndolo, además, con la rapidez que el momento imponía para lograr, sin dilación, la finalidad en cada caso perseguida. Por esto no es de extrañar que en la actual estructura administrativa de algunos Servicios se produzcan interferencias y hasta, a veces, duplicidad de funciones, por no hallarse determinadas con la necesaria precisión las que a cada uno de ellos corresponden.

Estas razones aconsejan revisar el régimen orgánico de los Servicios centrales del Ministerio, al objeto de acoplar debidamente toda su maquinaria administrativa, delimitando y jerarquizando el cometido y facultades asignados a cada una de las correspondientes Secciones y fijando con exactitud el campo de actuación en que han de desenvolverse. Todo ello sin producir aumento alguno en los presupuestos generales de gastos del Departamento, y como fase inicial que tendrá su adecuado complemento una vez que se dicte el proyectado Reglamento de procedimiento administrativo que regule la actividad gubernativa del Ministerio de Trabajo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros.

Vengo en aprobar el Reglamento orgánico del Ministerio de Trabajo.

REGLAMENTO ORGANICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

CAPITULO PRIMERO

De la organización y funcionamiento del Ministerio de Trabajo

Artículo 1.º Corresponderá al Ministro de Trabajo la alta dirección e inspección de todos los Servicios de Trabajo y Previsión Social como autoridad suprema del Departamento.

Art. 2.º El Ministerio de Trabajo se organiza en una Subsecretaría y las Direcciones Generales de Trabajo, de Previsión y de Jurisdicción del Trabajo.

Art. 3.º 1) Corresponderán a la Subsecretaría todas las funciones que el Ministro le delegue; el régimen de los Servicios Centrales y Provinciales del Ministerio; la Jefatura de todo el personal; la administración de fondos, cualesquiera que sea su procedencia; la formulación de proyectos de presupuestos y aprobación de cuentas; la inspección de todos los Servicios; la dirección de los actos de la Administración de los Servicios de la Subsecretaría; la representación del Departamento por delegación del titular del mismo; el estudio y divulgación de la política social del Estado y la legislación emanada del Departamento, y el estudio, recopilación y comparación de la legislación social extranjera.

2) En consecuencia, y de manera concreta, corresponderán las siguientes facultades al Subsecretario del Ministerio:

a) Ostentar, por delegación del Ministro, la representación de la autoridad de éste, y, en virtud de la propia, disponer lo que afecte al régimen de Subsecretaría.

b) Ser Jefe superior de todo el personal técnico, administrativo, auxiliar y subalterno.

c) Ser Inspector nato de todos los Centros, dependencias y organismos afectos o dependientes del Departamento.

d) Administrar los fondos del Departamento, cualquiera que sea su procedencia, mediante la aplicación adecuada, de acuerdo con los presupuestos de gastos, previamente aprobados, y con las disposiciones que regulan su distribución, y conocer y aprobar las propuestas que en materia económica se formulen por las Direcciones Generales.

e) Formular los proyectos de presupuestos de gastos generales del Departamento y los ingresos y gastos correspondientes a las Cajas especiales del mismo.

f) Aprobar las cuentas, previo informe de la Sección de Contabilidad y Censura de la Intervención Delegada de Hacienda en el Departamento.

g) Dirigir todos los actos de la Administración en los Servicios dependientes de la Subsecretaría, y proponer las reformas que juzgue necesarias en la organización y funcionamiento de los mismos.

h) Redactar los proyectos que por el Ministerio se le encomienden.

i) Someter personalmente a despacho y resolución del Ministro los expedientes que se sustancien en la Subsecretaría, formulando en ellos las propuestas que considere procedentes en vista de las que hayan hecho los Jefes de las Secciones respectivas y los informes que

sobre éstas pueda solicitar de los organismos competentes que dependen del Ministerio.

j) Resolver los expedientes referidos por delegación del Ministro, cuando ello no sea facultad privativa de éste.

k) Resolver cuantos asuntos se refieran al personal de Departamento en uso de sus facultades o por delegación del Ministro.

l) Ejercer todas las demás facultades, prerrogativas y funciones que el Ministro le delegue, y todas las que a su cargo atribuye la legislación vigente.

ll) Delegar las suyas propias cuando lo estime pertinente, salvo en los casos en que le esté vedado hacerlo.

3) Como consecuencia de lo indicado en los apartados d), e) y f) del inciso 2) del presente artículo, queda atribuida a la Subsecretaría, sin perjuicio de la adscripción a cada Servicio, la competencia en materia económica de los fondos regulados por las siguientes disposiciones:

Decreto de 2 de marzo de 1939.

Decreto de 31 de marzo de 1944, artículos 36 y 37.

Artículo 30 de la Orden de 19 de febrero de 1946.

Decreto de 13 de diciembre de 1946.

Orden de 14 de enero de 1947; y

Decreto de 17 de octubre de 1947.

Art. 4.º 1) Los Directores generales serán los jefes de sus respectivos centros directivos, correspondiéndoles en tal sentido la dirección de sus Servicios y la propuesta, redacción, interpretación o aclaración de las disposiciones relativas a sus correspondientes órbitas de competencia.

2) El cargo de Director general de Trabajo llevará aneja la presidencia de la Sección de Trabajo de la Industria Textil Algodonera (SUBCRA).

3) El cargo de Director general de Previsión llevará aneja la jefatura del Servicio de Montepíos y Mutualidades Laborales.

Art. 5.º Corresponde a la Dirección General de Trabajo la realización de las siguientes funciones:

a) El estudio, preparación, redacción e interpretación de las normas que regulen las condiciones de trabajo.

b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a las condiciones de trabajo o directamente relacionadas con la vida del trabajador.

c) La protección de los trabajadores españoles emigrados, su repatriación; régimen de la inmigración, permanencia y trabajo de los extranjeros en España, con jurisdicción, a estos fines, sobre las Compañías navieras y consignatarias.

d) Centralizar las estadísticas e informes relacionados con el paro involuntario; autorizar los movimientos migratorios de trabajadores, cuando proceda; inspeccionar el funcionamiento de los diversos organismos de colocación cuidando del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia; mantener la necesaria relación, al efecto, con el Servicio de Colocación dependiente de la Organización Sindical para la mejor eficacia de este cometido, y prevenir o remediar las situaciones de paro o crisis de trabajo.

e) Conocer y decidir de los recursos interpuestos contra las resoluciones de las Delegaciones provinciales de Trabajo en materia laboral.

f) Conceder autorización a toda empresa para suspender o cesar en sus actividades y, por consiguiente, para dar por suspendidas o extinguidas, según los casos, sus relaciones laborales con el personal fijo que integre su plantilla, salvo cuando la suspensión o cese se derive de venta, traspaso u otro negocio jurídico, en que se estará a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, así como conceder autorización para modificar por cualquier concepto las condiciones en que se desenvuelvan las relaciones laborales entre los elementos de la producción, tales como reducción de plantillas, jornada de trabajo, establecimiento de turnos o cualquiera otras que impliquen alguna variación en el contrato existente.

g) Informar e intervenir, en la esfera de su competencia, en la preparación de Convenios y Tratados internacionales en relación con el trabajo, dictaminando sobre la legislación extranjera aplicable a la materia.

Art. 6.º Corresponde a la Dirección General de Previsión la realización de las siguientes funciones:

a) El estudio, régimen y desenvolvimiento de los Seguros Sociales unificados y complementarios y de las disposiciones sobre protección a la familia.

b) La preparación, aplicación y desarrollo de las disposiciones legales en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; la autorización y registro de las entidades aseguradoras y la intervención de las mismas.

c) El régimen y protectorado de las Cajas generales de Ahorro popular y las cuestiones relativas a Mutualidades y Montepíos, Cooperativas y demás instituciones de previsión, así como la autorización, registro e intervención de esta clase de entidades.

d) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la observancia por empresas y trabajadores de los regímenes obligatorios de previsión y de los relativos a la aprobación y funcionamiento de toda clase de instituciones de previsión.

e) Conocer y decidir de los recursos que se interpongan con arreglo a las disposiciones legales de aplicación respecto a las materias expresadas en los apartados anteriores; y

f) Informar e intervenir, dentro de la esfera de su competencia, en la preparación de los Convenios y Tratados internacionales en relación con la seguridad social, dictaminando sobre la legislación extranjera aplicable a la materia.

Art. 7.º Corresponden a la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo la realización de las siguientes funciones:

a) La organización y funcionamiento de la Magistratura del Trabajo.

b) Mantener todas las relaciones de la Magistratura del Trabajo con el Fondo de anticipos reintegrables sobre sentencias recurridas.

c) El estudio del movimiento legislativo extranjero en cuestiones relacionadas con la jurisdicción laboral.

CAPITULO II

De la Subsecretaría

Art. 8.º 1) Dependerán de la Subsecretaría los siguientes Servicios generales del Ministerio:

Ofici
Ases
Secc
Inter
Secc
sas.
Secc
2)
ciones
-Regis
Asun
Perso
Habil
Arch
Infor
Negoc
rios y
3) y
taria:
Secc
Secc
o admin
Secc
Secc
dad Un
Secc
dical,
Serv
4) c
la Sub
la Insp
Art.
cargo
nen de
tes y c
ridades
asigna
dencias
cernier
de car
de la
neral c
vos; t
adscri
nes de
favor:
lo refe
terio;
tos de
instal
bilitaci
Art.
la insc
les qu
todos
cuyo c
racion
a)
docum
que s
tanto
a la
así co
linen
b)
pectiv
c)
docum
de un
triz.
d)
recibi
niéndo
libro
como
e)

Oficialía Mayor.
Asesoría Jurídica.
Sección de Contabilidad.
Intervención Delegada de Hacienda.
Sección Central de Recursos y Recompensas.

Sección de Coordinación de Estadísticas.

2) La Oficialía Mayor constará de las Secciones de:

Registro General.
Asuntos Generales.
Personal.
Habilitación.
Archivo.

Información General; y

Negociado de la Mutualidad de Funcionarios y Empleados del Ministerio.

3) Dependerán, asimismo, de la Subsecretaría:

Sección Central de Inspección del Trabajo.
Sección de Inspección de Centros regidos o administrados por el Estado.

Sección Central de Delegaciones de Trabajo.
Sección de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.

Sección de Enlace con la Organización Sindical.

Servicio de Estudios y Formación Social.

4) Como órgano consultivo dependiente de la Subsecretaría existirá el Consejo Asesor de la Inspección de Trabajo.

Art. 9.º La Oficialía Mayor tendrá a su cargo la preparación de los Decretos que emanen del Ministerio; las relaciones con las Cortes y con otros Departamentos, Centros o autoridades sobre asuntos de carácter general no asignados a la competencia de otras dependencias del Ministerio; las resoluciones concernientes, en su caso, a los referidos asuntos de carácter general; la apertura y distribución de la correspondencia oficial; el registro general de la misma y la custodia de los archivos; todo lo relativo al régimen de personal adscrito al Departamento, incluso las relaciones de aquél con la Mutualidad creada a su favor; el conocimiento, informe y gestión de lo referente al régimen económico del Ministerio; la gestión y tramitación de los contratos de adquisición o arrendos de locales, instalación y suministros diversos y la habilitación de personal y material.

Art. 10. Corresponderá al Registro General la inscripción de todos los documentos oficiales que en él se entreguen, así como la de todos los que tengan salida del Ministerio, a cuyo efecto llevará a cabo las siguientes operaciones:

a) Abrir la correspondencia e inscribir los documentos recibidos en libros foliados, de los que se dedicarán los que sean necesarios, tanto para la entrada como para la salida, a la Subsecretaría y Direcciones Generales, así como los especiales que se estimen pertinentes.

b) Remitir dichos documentos a las respectivas dependencias.

c) Dar recibo, cuando se reclama, de los documentos entregados, mediante utilización de un talonario, del que se conservará la matriz.

d) Reseñar con claridad los documentos recibidos en los libros correspondientes, poniéndoles el sello, con la denominación del libro en que fué inscrito y su número, así como las fechas de entrada y salida.

e) Clasificar diariamente la documentación

recibida, repartiéndola dentro de las veinticuatro horas siguientes y acompañando un índice duplicado, de que se devolverá al Registro un ejemplar firmado o sellado por el Jefe de la Sección destinataria.

f) Dar salida a los documentos que a tal efecto se le entreguen, sellándoles y dándoles número y fecha.

g) Hacer diariamente un resumen numérico de toda la documentación de entrada y salida con fines de comprobación y estadísticos.

h) Liquidar con la Estafeta el franqueo de la correspondencia oficial del Ministerio dirigida a organismos que no tengan reconocida franquicia.

Art. 11. 1) Corresponderá a la Sección de Asuntos Generales de la Oficialía Mayor:

a) Llevar el registro de entrada y salida de la Oficialía Mayor en libros debidamente foliados, en los que se hará constar el número de orden, número de Registro General, fecha de entrada en la Sección, procedencia, fecha del documento, extracto del asunto y organismo o Sección a que corresponda.

b) Llevar un índice por el sistema de fichas de todas las disposiciones que se publiquen en el *Boletín Oficial del Estado* emanadas del Ministerio y de las de otros Departamentos que tengan relación directa o indirecta con el de Trabajo.

c) Poner en limpio los proyectos de Ley y los Decretos que procedan del Ministerio; recoger la firma correspondiente; remitir las cuartillas para su publicación en el *Boletín Oficial del Estado* y archivar y custodiar los originales de aquéllos.

d) Recoger y enviar cuantos datos, informes, documentos o expedientes fueran reclamados por las Cortes, Consejo de Estado, Departamentos ministeriales, Tribunales o autoridades.

e) Ejecutar las órdenes e instrucciones que se den para la conclusión y realización de los contratos de suministros, alquileres o de servicios para la adquisición de muebles o enseres, en cumplimiento de los acuerdos que se adopten y previa la aprobación, cuando fuere necesaria, del Jefe del Departamento.

f) Todo lo referente a conservación, distribución y reparación del mobiliario de los Servicios centrales y provinciales.

h) Lo relativo a reparación de los locales que ocupen los Servicios del Ministerio, tanto en Madrid como en provincias, a cuyo efecto le estará adscrito el Aparejador del Ministerio.

i) La recopilación de todas las disposiciones originales que emanen del Ministerio, debidamente clasificadas por orden cronológico, encuadradas y bajo su custodia.

2) El Jefe de la Sección tendrá personalmente a su cargo toda la correspondencia oficial que se relacione con las Cortes, Departamentos y autoridades; la preparación de expedientes y asuntos indeterminados, y los de contratos, suministros y adquisiciones.

Art. 12. La Sección de Personal entenderá, en general, de cuanto se relacione con las plantillas de personal, nombramiento, escalafones, jubilaciones, excedencias, licencias, comisiones de servicio, cesantías, etc. del mismo, y propuesta de distribución del personal entre las distintas Secciones, o informe de las formuladas por las Direcciones Generales.

Como funciones concretas tendrá las siguientes:

- a) Conservación y cuidado de los expedientes personales de los funcionarios, formando los correspondientes libros individuales, en que se anotarán las incidencias de la vida administrativa de cada funcionario.
- b) Llevar un índice, por el sistema de fichas, de todos los funcionarios y empleados, en las que se consignarán el nombre y apellidos de cada uno, Cuerpo a que pertenece, categoría ostentada y destino a que se encuentre afecto.
- c) Llevar libros o cuadernos donde figuren, por Direcciones, Secciones y Servicios provinciales, los funcionarios y empleados adscritos a cada uno.
- d) Llevar relación del personal subalterno, con diferenciación del que pertenezca al Cuerpo de Ordenanzas del Ministerio y del que proceda del Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles, manteniendo relación en cuanto a éste último, con la Presidencia del Gobierno.
- e) Informar en los recursos de agravios que se formulen por los funcionarios del Ministerio.
- f) Informar en los expedientes disciplinarios cuando proceda o se solicite la emisión de dictamen, así como en los referentes a depuración y revisión de los "pronunciados" adoptados en esta esfera.
- g) Mantener las necesarias relaciones con la Sección de Personal de la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo.

Art. 13. Incumbirá a la Habilitación la cobranza de las consignaciones del personal y material y de los libramientos a justificar que se expidan a nombre del Habilitado para atender a servicios especiales; la formación de las nóminas del personal; la adquisición del material y objetos de escritorio para los Servicios del Ministerio y el pago de los haberes y facturas correspondientes, con sujeción a las órdenes de la Superioridad y a las reglas siguientes:

1.ª Se llevarán en la Habilitación los siguientes libros: uno de Caja, en que serán anotadas todas las cantidades que cobre y pague, otro de Cuentas Corrientes, en el que cada una de éstas corresponderá a cada uno de los conceptos de cada uno de los apartados, artículos y capítulos del presupuesto del Ministerio; otro de Inventario, en que se hará constar, por concepto de unidades, las entradas y salidas de material y objetos de escritorio, de manera que en cualquier momento se pueda comprobar la realidad de las existencias que se tengan en depósito, y, finalmente, otro libro de Arqueo.

2.ª Los suministros de papel, impresos y objetos de escritorio, cuyas normas de adquisición serán acordadas por la Subsecretaría, se harán para cada caso en virtud de pedidos firmados por el Habilitado, con el visto bueno del Oficial Mayor y dirigidos al proveedor del Ministerio. Este servirá dichos pedidos mediante factura triplicada, uno de cuyos ejemplares le será devuelto con la nota de recepción del material suscrita por el Habilitado. Los otros dos ejemplares, con igual nota de recepción y conformidad, también suscrita por el Habilitado y con el visto bueno del Oficial Mayor, servirán de justificante de la cuenta mensual que se formule para justificar

la inversión de los créditos relativos a material no inventariable.

3.ª El servicio de material a cada una de las Secciones se hará en virtud de pedido hecho por cada una de ellas. Al servirse el pedido, el Jefe de la Sección firmará el correspondiente recibo.

4.ª Corresponde al Habilitado la justificación, dentro de los plazos reglamentarios, de todos los libramientos que haya percibido, conforme a las normas establecidas por el Reglamento de Ordenación de Pagos de 24 de mayo de 1891.

5.ª Los gastos menores se satisfarán por el Portero Mayor, quien formulará mensualmente cuenta justificada al Habilitado, a cuyo efecto le hará éste el anticipo de la cantidad que se considere necesaria.

6.ª El día 15 de cada mes se practicará un arqueo de Caja, con intervención del Oficial Mayor, sin perjuicio de los arqueos extraordinarios que puedan acordarse por la Superioridad. Si dicho día fuera festivo, el arqueo se efectuará el día hábil inmediatamente anterior.

Art. 14. La Sección de Archivos del Ministerio tendrá por misión ordenar y conservar los expedientes cuya tramitación estuviese en absoluto terminada, a cuyo efecto firmará el Jefe del mismo el duplicado de las relaciones de documentos que le sean enviadas para aquel fin por las distintas Secciones del Ministerio.

Con dichas finalidades llevará a cabo las siguientes funciones:

a) Clasificar los expedientes por Secciones de procedencia, y dentro de éstas, por materias o por fechas, formando legajos numerados.

b) Llevar, por el sistema de fichas, un índice de documentos y expedientes, que estará coordinado con la organización del Archivo.

c) Entregar los expedientes que le sean reclamados, haciéndolo en el plazo de veinticuatro horas de recibir la petición o de manera inmediata si la reclamación se formula con carácter de urgencia.

d) Conservar las hojas de petición de expedientes hasta que éstos vuelvan a ser reintegrados al Archivo.

e) No entregar ningún expediente o documento ni hacer manifestación alguna respecto a los conservados en el Archivo, a menos que se reclamen en la forma expuesta en los apartados anteriores.

Art. 15. A la Sección de Información General corresponderá:

a) Orientar e informar a los particulares respecto a cualesquiera de los Servicios del Ministerio o acerca de las Secciones en que presten sus funciones los empleados y funcionarios del Departamento.

b) Tramitar las consultas que no sean de mero trámite o de amplio carácter general y que afecten a expedientes concretos, a cuyo efecto cursarán a los respectivos Jefes de Sección las hojas-consulta que suscriban los interesados o sus representantes.

c) Recibir las contestaciones de las diversas Secciones y hacer entrega de las mismas a los consultantes.

Art. 16. Al Negociado de Mutualidad de Funcionarios y Empleados del Ministerio co-

responde de junio de la mis sus Orga necesarias para el c conducto, a los mu

A tal e tuatistas oiones de en las mi del tiemp ciones co rectificaci

Art. 17 pondiente puestas la Asesor guientes

1) Dic a cuestio jurisdicci ción que tración d das dirig para con ciones re mandas terio.

2) Inf los sigui

a) En nalidad gan en el Minist suficien senten p donde ha

b) En dificación tuidas a del mism

c) En alegado dan proo

d) En Escalafon nistrativo partamen

e) En tos que r pública.

terpretac lidad y

tratos de dencia d

clase qu

f) En declarar ministrac

visión ar nistrativa

g) En sobre in dicha me

h) As forme e sin perju la Secció

i) En nes de c parte de

obras o autorizac

j) En

responderá, de acuerdo con la Orden de 6 de junio de 1945, la marcha administrativa de la misma, bajo la inmediata dirección de sus Organos rectores, mediante las relaciones necesarias con las Habilitaciones del personal para el cobro de las primas y abono, por su conducto, de las correspondientes prestaciones a los mutualistas o a sus causahabientes.

A tal efecto llevará las altas y bajas de mutualistas y recabará y conservará las declaraciones de los mismos y las modificaciones que en las mismas se introduzcan en el transcurso del tiempo, manteniendo las oportunas relaciones con la Sección de Personal para las rectificaciones de los correspondientes censos.

Art. 17. Sin perjuicio de que las correspondientes Secciones emitan informes o propuestas dentro de su especial competencia, la Asesoría Jurídica tendrá a su cargo los siguientes cometidos:

1) Dictaminar en los expedientes relativos a cuestiones de competencia y conflictos de jurisdicción, y en las peticiones de autorización que los representantes de la Administración deduzcan para allanarse a las demandas dirigidas contra acuerdos del Ministerio para consentir la suspensión de las resoluciones reclamadas o para desistirse de las demandas formuladas por iniciativa del Ministerio.

2) Informar preceptivamente de los asuntos siguientes:

a) En las cuestiones relativas de personalidad de cuantos comparezcan o intervengan en los expedientes que se tramiten en el Ministerio, siempre que ofrezca duda la suficiencia de los documentos que se presenten para acreditarla a las dependencias donde hayan de surtir sus efectos.

b) En los expedientes de constitución, modificación o cancelación de fianzas constituidas a disposición del Ministerio o del titular del mismo.

c) En los expedientes en que se hubieren alegado derechos de carácter civil que puedan producir reclamaciones judiciales.

d) En los expedientes que afecten a los Escalafones de funcionarios técnicos, administrativos, auxiliares y subalternos del Departamento.

e) En los expedientes relativos a contratos que requieran el otorgamiento de escritura pública, así como los que versen sobre interpretación, alcance, novación, rescisión, nulidad y cumplimiento de toda clase de contratos de obras y servicios y sobre la procedencia del ejercicio de acciones de cualquier clase que de ellos puedan derivarse.

f) En los expedientes que se incoen para declarar lesivas las resoluciones de la Administración, con el fin de someterlas a revisión ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

g) En las reclamaciones que se produzcan sobre indemnización por los perjuicios que dicha medida pueda originar.

h) Asesorar en materia de accidentes, conforme el Decreto de 2 de marzo de 1939, sin perjuicio de las atribuciones reservadas a la Sección de Accidentes del Trabajo.

i) En la determinación de las condiciones de carácter jurídico que hayan de formar parte de los pliegos para la contratación de obras o servicios y en las protestas contra las autorizaciones provisionales.

j) En la ejecución de sentencias dictadas

por los Tribunales y que afecten al Ministerio.

k) En aquellos expedientes de los que pueda derivarse alguna responsabilidad de orden penal.

3) Emitir los demás informes jurídicos sobre los asuntos en que lo estime conveniente el Ministro, el Subsecretario o los Directores generales.

Art. 18. La Sección de Contabilidad tendrá a su cargo la propuesta de todos los actos de gestión relacionados con los de la Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, y, en consecuencia, le competirá especialmente:

a) Llevar la contabilidad de todos los Servicios dependientes del Ministerio.

b) Redactar los proyectos de presupuestos de gastos del Departamento y los de ingresos y gastos de los Organismos autónomos cuya administración directa se ejerza por este Ministerio.

c) Tramitar los expedientes relacionados con las modificaciones de créditos.

d) Proponer la expedición de los libramientos de las cantidades que hayan de abonarse con cargo a los créditos presupuestos.

e) Examinar, censurar y proponer la aprobación, en su caso, de las cuentas, nóminas, y, en general, de todos aquellos documentos que tengan relación con los créditos figurados en los Presupuestos del Ministerio.

f) Llevar las relaciones necesarias con la Intervención Delegada de Hacienda en el Departamento, a fin de que ésta pueda realizar la función legal que le corresponda.

Art. 19. La Intervención Delegada de Hacienda, además de las funciones que específicamente tiene encomendadas por el Ministerio de Hacienda, ejercerá en todos los Organismos que guarden relación de dependencia con el Ministerio de Trabajo o con sus Organos Centrales, así como en todos los fondos cuya administración, custodia o distribución le estén encomendadas las siguientes funciones:

Intervención, crítica del reconocimiento y liquidación de derechos, obligaciones o gastos; las de intervención formal de la Ordenación de Pagos y las de intervención de la inversión de las cantidades destinadas a realizar servicios, obras y adquisiciones y las de comprobación de existencias, siempre que unos y otros no se hallen comprendidos en el artículo tercero de la Ley de 5 de noviembre de 1950, o en la de 13 de marzo de 1943, Decreto de 3 de diciembre del mismo año y demás disposiciones especiales.

Art. 20. La Sección Central de Recursos y Recompensas conocerá de los siguientes recursos:

1) Recursos de alzada contra resoluciones dictadas por las Direcciones Generales del Ministerio en primera instancia, cualesquiera que sea la naturaleza y cuantía de la reclamación planteada.

2) Recursos de alzada contra resoluciones dictadas por los Organismos autónomos del Departamento enumerados en el artículo 92 de este Reglamento, siempre y cuando que sean procedentes, con arreglo a las disposiciones orgánicas reguladoras de sus respectivas funciones.

3) Recursos de Revisión contra resoluciones dictadas por las Direcciones Generales del Ministerio en segunda instancia, cualquiera que sea la naturaleza de la cuestión

debatida, siempre y cuando concorra alguno de los requisitos siguientes:

- a) Que su cuantía exceda de 10.000 pesetas.
- b) Que, alegando error de hecho, se acredite éste por documento público o mediante documento privado reconocido de contrario, cualquiera que en estos supuestos sea la cuantía de la reclamación.
- c) Que el problema suscitado revista o pueda revestir carácter general.
- d) Que el asunto planteado o discutido entrañe excepcional importancia por afectar a cuestiones de transcendencia en la política social.

Como trámite previo a este recurso habrá de intentarse la reposición de la resolución recurrida.

Art. 21. La propia Sección Central de Recursos y Recompensas entenderá, asimismo, de todos aquellos asuntos de carácter técnico, respecto de los cuales se solicite informe o dictamen por la Superioridad y de los expedientes de concesión de Medallas del Trabajo, tanto si han de ser tramitadas directamente por el Ministerio, dada la jerarquía de los peticionarios, conforme previene la Orden de 12 de mayo de 1943, como si lo han sido por las Delegaciones de Trabajo informadas por sus respectivas Juntas consultivas.

Art. 22. 1) La Sección de Coordinación de Estadísticas recibirá de las distintas Direcciones Generales del Ministerio los datos estadísticos que, a los fines de su respectiva competencia, hayan obtenido y centralizado, y podrá recabarlos si no le fueren suministrados directamente.

2) Aparte de informar a la Subsecretaría en las cuestiones fundamentales que se le sometan, realizará las siguientes funciones:

a) Coordinar las estadísticas elaboradas por los distintos Organismos y Secciones del Ministerio.

b) Perfeccionar aquéllas bajo el triple aspecto de la simplificación de sus datos, de la técnica de su elaboración y de la utilidad de sus resultados.

c) Estudiar los fenómenos estadísticos que se le encomienden de acuerdo con las finalidades que en su caso se persiga.

Art. 23. 1) Corresponderá a la Sección Central de Inspección de Trabajo:

a) Dirigir la actuación de los funcionarios del Cuerpo de la Inspección Nacional del Trabajo, transmitiendo las órdenes e instrucciones que reciba de la Superioridad a las Inspecciones provinciales y coordinando adecuadamente la actuación de éstos.

b) Proponer a la Subsecretaría los movimientos de personal inspector que considere conveniente.

c) Someter a la aprobación de la Subsecretaría los itinerarios que remiten los Jefes de las Inspecciones provinciales para la realización de servicios fuera de su residencia.

d) Informar las cuentas justificativas de la inversión de fondos librados "a justificar" para los servicios en itinerarios.

e) Informar de las incidencias que se produzcan en el Servicio de Inspección y sobre las enseñanzas u observaciones que recoja el personal inspector en su actuación.

f) Recibir de los Jefes de las Inspecciones Provinciales los informes y consultas, tramitándolos, si fuera necesario, y elevando,

en todo caso, las propuestas pertinentes a la aprobación de la Superioridad.

g) Realizar las visitas que se consideren convenientes o necesarias a las Inspecciones Provinciales.

h) Llevar el despacho ordinario de los asuntos de la Sección Central.

i) Preparar el servicio estadístico, unificando los datos y referencias de las Inspecciones Provinciales.

j) Redactar una Memoria anual en la que ha de recogerse el resultado obtenido en la labor inspectora realizada durante el ejercicio, con aquellas observaciones que la experiencia aconseje, elevándolas a conocimiento de la Superioridad.

2) Esta Sección Central dependerá administrativamente de la Subsecretaría del Departamento, y técnicamente de las Direcciones Generales de Trabajo y Previsión, según la naturaleza de los asuntos en que intervenga.

Art. 24. Del Jefe de la Sección Central de Inspección dependerá de modo inmediato sin perjuicio de la independencia de su jefatura y su autonomía técnica, la Sección de Inspección de Centros regidos por el Estado, pudiendo aquél despachar los asuntos de trámite de la misma si mediara delegación expresa del Subsecretario.

Art. 25. 1) La Sección de Inspección de Centros regidos o administrados por el Estado vigilará el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en los centros de trabajo no militares regidos o administrados por el Estado vigilará el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en los centros de trabajo no militares regidos o administrados por el Estado, bien directamente o bien mediante servicios autónomos y cualesquiera que sean su clase y naturaleza.

2) Asimismo le corresponderá la relación con los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo, a los que cursará, en su caso, las oportunas instrucciones.

3) Dependerá administrativamente de la Subsecretaría del Ministerio, y técnicamente de las Direcciones Generales de Trabajo y Previsión, según la naturaleza de los asuntos en que intervenga.

Art. 26. La Sección Central de Delegaciones de Trabajo tendrá las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar la organización y funcionamiento de las Delegaciones, con el fin de asegurar su máxima eficacia.

b) Informar los proyectos de disposiciones legales que afecten a la estructura y funcionamiento de las mismas.

c) Transmitir a los Delegados las consignas y orientaciones de la Superioridad en materia de política social.

d) Tramitar las notas informativas sobre aspectos de la vida en las provincias que sean cursadas por otras Autoridades y Organismos.

e) Organizar, cuando resulte conveniente, reuniones de Delegados, en que éstos asistirán a conferencias de carácter técnico y en las que se estudiarán cuantas cuestiones se estimen de interés para el mejor desempeño de su cometido.

f) Informar preceptivamente en todas las cuestiones concernientes al personal administrativo y subalterno afecto a las Delegaciones Provinciales, así como en lo relativo a locales y material, tanto inventariable como no inven-

tariable.

dependen

g) In

tamento

provincia

h) Re

demand

directam

a la Sup

i) Rec

consultas

Delegaci

j) Re

sionamie

men de

en comp

Memoria

k) Ce

de las di

l) Re

(Delegac

inventari

Art. 2

de la P

tes atrib

a) In

namiento

dando cu

b) Or

Secretari

do la Su

arios.

c) In

rentes a

d) In

miento

proponer

jerarlos.

e) Tr

rios las

la Super

miento

f) Re

actuació

Urbana,

distintos

g) T

los Cole

a su Ju

to de 1

6 de ab

de 11 d

Art. 2

nizaci

ordinar

rio de T

for ord

2) A

siguient

a) In

Sindical

taías p

gan rel

nismo s

b) A

Sindical

aquella

ciones

emanad

c) D

las disp

tades s

sindical

cia: qu

d) S

este M

variable, de que hayan de ser dotadas dichas dependencias provinciales.

g) Informar al Subsecretario del Departamento del desenvolvimiento de los Servicios provinciales.

h) Recibir de los Delegados sus informes, demandas y consultas, resolviéndolas, bien directamente o tramitándolas y sometiendo a la Superioridad.

i) Recibir y tramitar las reclamaciones y consultas que sobre el funcionamiento de las Delegaciones se formule.

j) Redactar una Memoria anual del funcionamiento de las Delegaciones como resumen de las remitidas por dichos Organismos, en cumplimiento del precepto reglamentario, Memoria que someterá al Subsecretario.

k) Centralizar las estadísticas de actuación de las diferentes Delegaciones.

l) Remitir a las dependencias provinciales (Delegaciones e Inspecciones) el material no inventariable que soliciten.

Art. 27. La Sección de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana tendrá las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar la organización y funcionamiento de las expresadas Corporaciones, dando cuenta por escrito a la Subsecretaría.

b) Organizar reuniones de Presidentes y Secretarios de Cámaras de la Propiedad cuando la Superioridad estime conveniente convocarlos.

c) Informar en todas las cuestiones referentes al persona de dichos Organismos.

d) Informar de la marcha y desenvolvimiento de los Servicios de las Cámaras y proponer la adopción de medidas para mejorarlos, ampliarlos o suprimirlos.

e) Trasladar a los Presidentes y Secretarios las órdenes e instrucciones que acuerde la Superioridad en relación con el funcionamiento de las Cámaras.

f) Redactar una Memoria anual sobre la actuación de las Cámaras de la Propiedad Urbana, resumiendo sus actividades en los distintos órdenes.

g) Tramitar cuantos asuntos afecten a los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria y a su Junta Central, regulados por los Decretos de 17 de diciembre de 1948 (Ref. 13/49) y 6 de abril de 1951 (Ref. 230/51), y Orden de 11 de enero de 1949 (Ref. 15/49).

Art. 28. La Sección de Enlace con la Organización Sindical tendrá como misión la de coordinar las actividades de ésta con el Ministerio de Trabajo, a fin de hacer posible una mejor ordenación de la labor social del Estado.

2) A tal fin realizará concretamente las siguientes funciones:

a) Informar a la Delegación Nacional de Sindicatos de todas aquellas disposiciones dictadas por el Ministerio de Trabajo que tengan relación con la actividad de aquel Organismo sindical.

b) Asesorar a la Delegación Nacional de Sindicatos en todas las disposiciones que aquélla pueda dictar, conforme a sus atribuciones y que estén en relación con otras emanadas de este Ministerio.

c) Dar cuenta al Ministerio de Trabajo de las disposiciones que en uso de sus facultades sean elaboradas por la Organización sindical y tengan relación con la política social que este Ministerio realiza.

d) Sugerir a los Organos competentes de este Ministerio aquellas modificaciones o in-

novaciones que la práctica señale en la coordinación de las actividades de ambos Organismos para el mejor desarrollo de la labor social encomendada.

e) Elevar a este Ministerio aquellas iniciativas y proyectos de la Organización sindical que considere dignos de ser desvelados y ordenados por el mismo, haciendo con ello más estrecha y eficaz la colaboración entre ambos Organismos.

f) Informar a la Delegación Nacional de Sindicatos de las orientaciones que este Ministerio señale en relación con la política social que haya de realizarse, de conformidad con lo estatuido en el Fuero de Trabajo y demás disposiciones que se dicten.

g) Ejercer idénticos cometidos en la Junta Central Sindical, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley Sindical de 6 de diciembre de 1940.

Art. 29. Dependiente de la Subsecretaría del Departamento se constituye el Servicio de Estudios y Formación Social, en el que se reorganizan e integran, coordinando sus peculiares funciones, sus actuales Servicios docentes y de investigación social.

Art. 30. Los fines del Servicio de Estudios y Formación Social serán, principalmente, los siguientes:

a) Asesorar en las materias propias de la competencia del Servicio a las distintas Secciones del Ministerio de Trabajo que lo soliciten por conducto de la Subsecretaría del Departamento.

b) Informar en los asuntos laborales y sociales que someta a su estudio la propia Subsecretaría.

c) Investigar los antecedentes y desarrollo de la acción y política social y de la legislación social española.

d) Fomentar las iniciativas y trabajos de capacitación y servicio social.

e) Conocer y recopilar la legislación social extranjera estudiando sus modalidades y grados de eficacia e informando en cuanto proceda a los Servicios del Ministerio.

f) Difundir en el ámbito nacional y en el extranjero la obra social realizada en España y relacionarse con entidades análogas de todos los países, previo acuerdo y conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores.

g) Organizar reuniones, congresos y conferencias nacionales o internacionales de acuerdo con los Ministerios de Asuntos Exteriores o de Educación Nacional, y, en su caso, con el Instituto de Cultura Hispánica.

h) Promover, divulgar y desarrollar los conocimientos sociales mediante cursos y conferencias en las Escuelas Sociales y de Capacitación Social de Trabajadores, así como por medio de cátedras fijas o ambulantes.

i) Editar revistas, folletos, libros y cualesquiera otras publicaciones dedicadas a la investigación, estudio y divulgación de los temas y problemas sociales.

j) Utilizar, al servicio de los fines anteriores, cuantos medios auxiliares de difusión se consideren convenientes.

Art. 31. El Servicio de Estudios y Formación Social constará de los siguientes Organos rectores y de gestión y gobierno:

Jefe.

Junta Rectora.

Secretario general; y

Secciones de:

- a) Estudios, Biblioteca y de Escuelas Sociales y de Capacitación.
- b) Publicaciones y Divulgación Social.
- c) Internacional.

Art. 32. 1) El Jefe del Servicio de Estudios y Formación Social del Ministerio de Trabajo será propuesto libremente por el Ministro de Trabajo entre personalidades destacadas en el campo de lo social que hayan prestado servicios al Ministerio.

2) Su nombramiento será acordado por Decreto aprobado en Consejo de Ministros.

3) Tendrá las siguientes funciones:

a) Inspeccionar y coordinar las actividades de las distintas Secciones, velando por la realización de los planes de trabajo e investigación aprobados por la Junta Rectora.

b) Adoptar las decisiones necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Servicio.

c) Presidir las reuniones de cada una de las Secciones.

d) Desempeñar los demás cometidos que en él pueda delegar la superioridad.

e) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, sus funciones serán ejercidas por el más antiguo de los Jefes de Sección.

Art. 33. 1) La Junta Rectora será presidida por el Subsecretario del Departamento y estará integrada por el Jefe del Servicio, el Secretario general y los jefes de las diversas Secciones.

2) Los fines de la Junta Rectora serán: elaborar el plan de trabajos e investigaciones; velar por su exacto cumplimiento, coordinando los presentados por cada una de las Secciones; dar cuenta de la labor realizada de acuerdo con el plan de trabajos aprobados y resolver cuantos casos y problemas de rectorado del Servicio se presenten en el cumplimiento de la misión que se le atribuye.

3) Se reunirá cuantas veces sea convocada por el Subsecretario, y como mínimo una vez cada trimestre.

Art. 34. 1) El Secretario general será nombrado en la forma prevenida en el apartado sexto del artículo 94 de este Reglamento.

2) Sus funciones serán las que siguen:

a) Ostentar la jefatura de todos los Servicios administrativos.

b) Colaborar en la coordinación de las funciones y actividades de las Secciones.

c) Convocar, por orden superior, la reunión de la Junta Rectora o de cualquiera de las Secciones.

d) Proponer las medidas que considere oportunas para la mayor eficacia del trabajo encomendado a aquéllas.

e) Informar al Jefe de los trabajos que se lleven a cabo.

f) Redactar, de acuerdo con el Jefe, el Reglamento que ha de regular las actividades de las Secciones y demás actividades del Servicio.

g) Ordenar todos los asuntos y servicios administrativos del Servicio.

Art. 35. La Sección de Estudios, Biblioteca y Escuelas Sociales de Capacitación tendrán los siguientes cometidos:

a) Ordenar y preparar todo el material científico necesario para la investigación de los temas cuyo examen y consideración se le haya señalado por la Subsecretaría en relación con los diferentes Servicios del Ministerio o de aquellos otros que la Superioridad proponga.

b) Llevar la organización administrativa, orientación pedagógica e inspección de las Escuelas Sociales y de Capacitación Social dependientes del Ministerio de Trabajo.

c) La catalogación, conservación, préstamo y adquisición de libros; promover la creación de bibliotecas socialmente especializadas en las Delegaciones de Trabajo, y la orientación de las de otros Centros e Instituciones que lo soliciten del Servicio.

Art. 36. La Sección de Publicaciones y Divulgación Social tendrá a su cargo la edición y distribución del material bibliográfico, revistas, etc., cuya publicación haya acordado el Servicio; será la encargada de hacer llegar a los productores y personas interesadas el conocimiento de la legislación social por medio de cursillos, conferencias, publicaciones u otros medios de información; y como Órgano del Servicio, editará la "Revista de Trabajo", al frente de la cual habrá un Director y un Consejo de redacción, con las funciones que se fijan en el Reglamento que se someta a la aprobación de la Superioridad.

Art. 37. La Sección Internacional tendrá a su cargo el estudio de la legislación social extranjera, la relación con Instituciones análogas de los demás países y la preparación de congresos y conferencias sobre temas sociales, así como la información a los Servicios del Ministerio del movimiento social existente fuera de nuestras fronteras.

Art. 38. 1) Cada una de las Secciones que se dejan expuestas será dirigida por un Jefe, que será nombrada por la Subsecretaría, a propuesta del Jefe del Servicio, de entre funcionarios de cualesquiera de los Cuerpos Técnicos del Departamento.

2) Será cometido de los Jefes de Sección elaborar los planes de trabajo de la Sección respectiva, dirigir su ejecución y realizar aquellos otros que les sean ordenados por la Superioridad.

Art. 39. 1) Como Órgano consultivo de la Subsecretaría en las cuestiones propias de la competencia del Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo, existirá el Consejo Asesor de la Inspección Nacional de Trabajo, integrado con carácter permanente por:

El Jefe de la Sección Central de Inspección.

El Jefe de la Sección de Inspección de Centros Regidos o Administrados por el Estado.

El Jefe de la Sección de Prevención de Accidentes e Higiene del Trabajo.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid.

2) Serán miembros asimismo de dicho Consejo, por derecho propio, los Inspectores Técnicos generales de primera clase que ocupen los seis primeros puestos del escalafón, quienes podrán ser convocados cuando haya de entenderse en asuntos de gran trascendencia libremente apreciada por el Subsecretario, que actuará de Presidente del Consejo Asesor.

3) Podrán ser convocados, cuando sus informes se crean convenientes, otros funcionarios técnicos del Cuerpo que desempeñen puestos de mando en el Ministerio, en Inspecciones o en Delegaciones de Trabajo.

4) El Consejo Asesor se reunirá, cuando lo crea aconsejable o necesario el Subsecretario del Ministerio, para informar o dictaminar sobre asuntos referentes a la Inspección, o relacionados con su organización y funcio-

nes, con
misma.

De to

Art. 40
queda i
nismos:

1) Se
derán las
presan:

a) As
b) Re
c) Pr

Trabajo.

d) Ec
2) Se

de la qu

a) Se
bajo.

b) As
3) Se

a) En
b) Cr

c) Tr

Art. 41
ción Gen

tituir al
despacha

trámite d
General

tener di
otros Or

sido exp

Art. 42
y Crisis

a régime

tes de su

ción de

las dema

atribuida

pelencia

Art. 43
bajo com

a) De

de lo pre

11 de la

contra s

ciones d
Reglame

b) De

dispuesto

colocació

c) De

creto de

bilidades

d) De

nes gube

de Trab

73 del R

e) De

didos en

lución c

de Trab

sido enc

Art. 44

cidentes

misión e

lación e

así como

Segurida

Trabajo;

tes de S

nes, con su personal y con el régimen de la misma.

CAPITULO III

De la Dirección General de Trabajo

Art. 40. La Dirección General de Trabajo queda integrada por los siguientes Organismos:

1) Secretaría General, de la que dependerán las Secciones que a continuación se expresan:

- a) Asuntos Generales y Crisis.
 - b) Recursos de Trabajo.
 - c) Prevención de Accidentes e Higiene del Trabajo.
 - d) Economatos.
- 2) Secretaría Técnica de Política Laboral, de la que dependerán:

- a) Sección de Normas Generales de Trabajo.
- b) Asesores Técnicos de Política Laboral.
- 3) Secciones de:
 - a) Emigración.
 - b) Colocación.
 - c) Trabajo de Extranjeros.

Art. 41. Al Secretario general de la Dirección General de Trabajo le corresponde sustituir al Director general en sus ausencias, y despachar, por su delegación, los asuntos de trámite de las Secciones que de la Secretaría General dependan o aquellos otros que, sin tener dicho carácter o correspondientes a otros Organismos de la Dirección, le hayan sido expresamente encomendados.

Art. 42. A la Sección de Asuntos Generales y Crisis le competen las cuestiones relativas a régimen interior de la Dirección, expedientes de suspensión de trabajadores o modificación de las condiciones de trabajo y todas las demás cuestiones que, no habiendo sido atribuidas a otra Sección, sean de la competencia de aquel Centro directivo.

Art. 43. La Sección de Recursos de Trabajo conocerá de las siguientes materias:

- a) De los recursos interpuestos al amparo de lo prevenido en el apartado a) del artículo 11 de la Ley de 10 de noviembre de 1942, contra sanciones que impongan las Delegaciones de Trabajo por infracción de Leyes, Reglamentos y demás normas laborales.
- b) De los motivados por infracción de lo dispuesto en las normas legales vigentes sobre colocación de trabajadores extranjeros.
- c) De los derivados por aplicación del Decreto de 5 de enero de 1939 sobre responsabilidades por faltas cometidas en el trabajo.
- d) De los interpuestos contra las sanciones gubernativas impuestas por los Delegados de Trabajo, de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de 21 de diciembre de 1943.
- e) De todos aquellos recursos no comprendidos en los apartados anteriores, cuya resolución corresponda a la Dirección General de Trabajo, sin que su conocimiento haya sido encomendado a otras Secciones.

Art. 44. La Sección de Prevención de Accidentes e Higiene del Trabajo tiene como misión el estudio y preparación de la legislación específica de las expresadas materias, así como el de los capítulos especiales sobre Seguridad e Higiene de los Reglamentos de Trabajo; promover la creación de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo en

las industrias y atender a su organización y funcionamiento, de acuerdo con la Orden de 21 de septiembre de 1944; la recogida y ordenación de datos estadísticos de enfermedades profesionales, de declaración obligatoria; la difusión de las medidas preventivas contra accidentes del trabajo y la exposición de los mecanismos correspondientes; el estudio médico de los ambientes de trabajo y la relación con el Instituto Nacional de Medicina, Seguridad e Higiene del Trabajo.

Dicha Sección se divide en los dos Negociados siguientes:

- a) Prevención de Accidentes.
- b) Higiene del Trabajo.

Art. 45. 1) La Sección de Economatos tendrá a su cargo cuanto se relacione con los economatos de Empresas que atienden al suministro de los artículos de consumo más necesarios a los trabajadores y sus familias. Entenderá en la constitución, agrupación y segregación de dichos economatos, e intervendrá en la gestión de los mismos, a fin de asegurarse del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia.

2) Para el cumplimiento de estas finalidades mantendrá las relaciones necesarias con el Organismo encargado de la materia de abastecimientos, así como con las Inspecciones Provinciales de Trabajo, de las que recibirá los correspondientes partes de suministros, que confrontará con los estados recibidos de los órganos distribuidores.

Art. 46. A la Secretaría Técnica de Política Laboral le corresponde entender en las siguientes cuestiones:

- a) La preparación, estudio y redacción de las normas relativas al régimen de las relaciones de trabajo.
- b) Recabar informes de los Organismos competentes respecto de la realidad social que interese en cada momento, así como en orden a las innovaciones o reformas que en los Reglamentos o normas de trabajo se considere conveniente introducir.
- c) Estudiar los efectos de la aplicación de los Reglamentos y demás normas que regulen la relación de trabajo en los sectores que resulten afectados.
- d) Asesorar al Director general en todas las cuestiones relativas a la competencia de la Secretaría Técnica y evacuar los informes que le sean interesados.

Art. 47. Al frente de la Secretaría Técnica de Política Laboral habrá un Jefe con las siguientes atribuciones:

- a) Distribuir el trabajo entre los Asesores y adoptar las disposiciones necesarias para mayor eficacia de la labor encomendada a la Secretaría.
- b) La relación de la Secretaría Técnica con las restantes dependencias de la Dirección General.
- c) Informar al Director general de la marcha de los trabajos de la Secretaría, sin perjuicio del despacho directo de los Asesores con el Director.
- d) Cuantas otras funciones propias de la Secretaría General le sean delegadas por el Director.

Art. 48. A la Sección de Normas Generales de Trabajo, dependiente de la Secretaría Técnica de Política Laboral, le corresponderá entender de las siguientes cuestiones:

- a) Despacho de los asuntos propios de la

competencia de la Secretaría Técnica que no se hallen especialmente atribuidos a alguno de los Asesores de Política Laboral.

b) Desempeño de la Jefatura administrativa de los Servicios de la Secretaría Técnica, tanto en lo concerniente a personal como a material, así como el Registro, tramitación y archivo de todos los documentos que a aquella correspondan.

c) La relación con la Sección de Publicaciones y Divulgación Social, del Servicio de Estudios y Formación Social del Ministerio, a efectos de preparar el "Boletín Informativo de Disposiciones Sociales" y las publicaciones encomendadas a la Secretaría Técnica.

d) El estudio, preparación e interpretación de las normas de trabajo que tengan carácter general.

Art. 49. Corresponderá a los Asesores técnicos de política laboral:

a) En estudio, preparación y redacción de los Reglamentos laborales y demás normas que regulen las relaciones de trabajo en la rama o ramas de actividad extractiva, agrícola, industrial o de servicios que cada uno tenga a su cargo, así como las incidencias que su aplicación suscite.

b) Entender en las cuestiones de calificación profesional de los trabajadores del Sector de actividades que cada Asesor tenga a su cargo, cuando se hallen en trámite de recurso ante la Dirección General.

c) Conocer de los proyectos de Reglamento de Régimen Interior cuya aprobación corresponda a la Dirección, y de los recursos interpuestos en esta esfera contra resoluciones de las Delegaciones de Trabajo que opusieran reparos o negaran su aprobación a los citados documentos.

d) Presidir, en representación de la Dirección General, salvo en los casos en que lo hiciera personalmente el Director, las reuniones de asesoramiento prevenidas en la Ley de Reglamentación de Trabajo, de 16 de octubre de 1942.

e) Conocer de los problemas que plantea la aplicación de los Reglamentos y normas de trabajo, en orden a la conveniencia de su modificación, ampliación y reforma.

f) Estudiar individualmente o en régimen de ponencias, conforme a las directrices marcadas por la Dirección, los problemas económicos-estadísticos surgidos en las distintas ramas de la producción y las repercusiones económicas que los Reglamentos de Trabajo originen.

g) Informar y dictaminar respecto a los proyectos que les sean sometidos por la Dirección General, con referencia a las materias que afecten a la regulación de las condiciones de trabajo.

Art. 50. A las Secciones de Emigración, Colocación y Trabajo de Extranjeros corresponderá el conocimiento de cuantos asuntos se refieran a la emigración y repatriación de españoles, colocación obrera (sin perjuicio de las funciones asignadas en este orden a la Organización sindical) y régimen de trabajo de los extranjeros en España.

Art. 51. Serán de competencia de la Sección de Emigración cuantos asuntos se refieran a la protección de los trabajadores españoles en el extranjero y a su emigración y repatriación, sin perjuicio de las facultades que en este orden corresponden a la Inspección Nacional de Trabajo.

Art. 52. 1) La Sección de Colocación Intervendrá en las siguientes cuestiones:

a) En la centralización de las estadísticas e informes relacionados con el paro involuntario, así como en lo que afecta a los movimientos migratorios y relación con los organismos sindicales de cooperación conforme a lo prevenido en el apartado d) del artículo 5.º de este Reglamento.

b) En las autorizaciones referentes a la aplicación de los recargos especiales de prevención del paro y en la inspección de la adecuada inversión de aquéllos.

2) La Sección de Colocación se integrará en dos Negociados:

1.º Inspección de Organismos de Colocación.

2.º Estadística y Prevención del Paro.

Art. 53. La Sección de Trabajo de Extranjeros interpondrá en la actividad de éstos en España, tramitación de las Tarjetas de Identidad profesional y estudio del movimiento legislativo extranjero relacionado con la materia propia de la Sección.

CAPITULO IV

De la Dirección General de Previsión

Art. 54. La Dirección General de Previsión queda integrada por los siguientes Organismos:

1) Secretaría General, de la que dependerán las Secciones de:

4) Asuntos Generales.

o) Cálculos, Estudios Actuariales y Revisión de Balances.

2) Secciones de:

a) Seguros y Subsidios Sociales Obligatorios.

b) Accidentes del Trabajo.

3) Cajas de Ahorro.

d) Cooperativas.

e) Montepíos y Mutualidades.

f) Familias Numerosas.

3) Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

4) Inspección Técnica de Previsión Social.

Art. 53. Al Secretario general de la Dirección General de Previsión le corresponde sustituir al Director general en sus ausencias, despachar, por delegación suya, los distintos asuntos de trámite y cumplimiento del Centro directivo y aquellos otros que, sin tener ese carácter, le encomiende el Director; mantener la debida unidad de tramitación y resolución en los asuntos encomendados a las diferentes Secciones y ostentar la Jefatura de la Sección de Asuntos Generales de la Dirección.

Art. 56. A la Sección de Asuntos Generales de la Dirección General de Previsión corresponden las cuestiones relativas al régimen interior de la Dirección y todas las demás, que no habiendo sido atribuidas a otra Sección, sean de la competencia de aquel Centro directivo.

Art. 57. A la Sección de Cálculos, Estudios Actuariales y Revisión de Balances le corresponderá:

a) Estudiar las bases técnicas que las características especiales de Previsión Social aconsejen, al objeto de proponer los correspondientes tipos mínimos de primas para todas

las modalidades de prestaciones que hayan de realizarse, a tenor de los reglamentos de las instituciones encargadas de su aplicación y que correspondan al campo de las Mutualidades y Montepíos.

b) Recoger y coordinar las observaciones de índole estadística de los distintos servicios actuariales de los órganos gestores de los Seguros Sociales.

c) Asesorar a la Dirección General de Previsión en cuestiones de carácter actuarial y contable y en aquellas otras que específicamente se le encomienden.

d) Revisar los balances y cuentas de liquidación previo informe de la Sección correspondiente y de la Inspección Técnica de Previsión que se eleven por los organismos dependientes de la Dirección General de Previsión y demás instituciones de Previsión Social, inscritas en los correspondientes registros o que se encuentren sometidos a tutela e inspección del expresado Centro directivo.

Art. 58. 1) A la Sección de Seguros y Subsidios Sociales obligatorios le compete el estudio, régimen y desenvolvimiento de los Seguros Sociales y Subsidios unificados y complementarios.

2) Estará integrada por los siguientes Negociados:

1.º Instituciones Gestoras.

2.º Seguro de Vejez.

3.º Subsidio Familiar y Regímenes complementarios.

4.º Legislación y Consultas.

3) Le corresponderá al Negociado de Instituciones Gestoras:

a) Mantener las relaciones administrativas con los Servicios del Instituto Nacional de Previsión, a quienes compete el conocimiento de las cuestiones relativas al Seguro de Vejez y Subsidio Familiar, e informar a la Superioridad sobre todo cuanto se refiera a la organización y funcionamiento de tales Servicios establecidos o de los que en lo sucesivo se establezcan para la debida gestión de los mismos, así como los sistemas concertado entre dicho Organismo y demás entidades para el desarrollo y aplicación de aquéllos.

b) Conocer e informar de la revisión de los balances técnicos anuales de Subsidios Familiares y del Seguro de Vejez y los planes de inversión de los mismos.

c) Conocer e informar sobre las circulares que para la ejecución de las disposiciones emanadas del Ministerio, acuerde publicar el Instituto Nacional de Previsión, sobre cuestiones de la competencia de este Negociado, así como también sobre la propaganda que acerca de dichos Seguros y Subsidios se efectúe por la prensa y radio.

d) Tramitar los expedientes relativos a la declaración de entidades colaboradoras gestoras de los Seguros Sociales, llevar su Registro y vigilar su funcionamiento.

e) Elevar a la Dirección General las correspondientes propuestas de resolución a la vista de los informes emitidos por la Inspección Técnica de Previsión Social en cuanto afecte al ejercicio de funciones delegadas en materia de Seguro de Vejez y Subsidio Familiar, así como de los Montepíos a los que hubiese otorgado la condición de exceptuados a estos efectos.

f) Proponer a la Inspección Técnica de Previsión la práctica de las oportunas diligen-

cias e instrucciones que deba realizar en virtud de la alta inspección reservada a este Ministerio sobre el Instituto Nacional de Previsión y demás instituciones y organismos de Previsión o entidades colaboradoras en materia de Seguro de Vejez y Subsidio Familiar, preferentemente a los que haya de ejercerse en las esferas provincial y local.

4) Corresponderá al Negociado de Seguro de Vejez:

Tramitar los recursos entablados contra los acuerdos de las Direcciones provinciales del Instituto Nacional de Previsión en las materias relacionadas con la declaración de beneficiarios y concesión de prestaciones correspondientes al Seguro de Vejez e Invalidez, y las reclamaciones y demás incidencias en que este Ministerio haya de intervenir motivadas por su aplicación e igualmente cuantas consultas hagan referencia específica a este Seguro.

5) Corresponderá al Negociado de Subsidio Familiar y Regímenes complementarios:

La tramitación de las mismas actuaciones indicadas para el Negociado anterior y con igual extensión en cuanto se refiera a la aplicación del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares y demás regímenes complementarios del mismo.

6) Corresponderá al Negociado de Legislación y Consultas:

a) Preparar y tramitar los proyectos de cuantas disposiciones afecten a la implantación, extensión, desarrollo y unificación de los Seguros de Vejez y de Subsidio Familiar.

b) Evacuar cuantas consultas se refieran a tales materias relativas a los Seguros Sociales Unificados en general, concepto del salario-base a estos efectos y aplicación y exención de dichos regímenes, preparando las propuestas de resolución que procedan y el índice de todas las disposiciones que afecten al Seguro de Vejez y Subsidio Familiar.

Art. 59. 1) Incumbirá a la Sección de Accidentes de Trabajo la preparación, aplicación y desarrollo de las disposiciones dictadas en materia de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, así como la autorización y Registro de las entidades aseguradoras y la intervención de las mismas.

Para su funcionamiento se organizará en los cinco Negociados siguientes:

1.º Registro de Entidades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo.

2.º Legislación, Coordinación, Recursos y Sanciones.

3.º Capitalización.

4.º Enfermedades Profesionales.

5.º Asesoría Médica.

3) El Negociado de Registro de Entidades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo desempeñará los siguientes cometidos:

a) Llevar el Registro especial de las compañías mercantiles y de las mutualidades patronales que practiquen el Seguro de Accidentes del Trabajo.

b) Tramitar los expedientes relativos a la inclusión de dichas entidades en el mencionado Registro; proponer la aprobación de sus Estatutos, Reglamentos y pólizas, así como sus modificaciones; recabando los informes preceptivos y formulando las propuestas de resolución que fueran oportunas.

c) Proponer la cuantía de las fianzas que las propias entidades han de constituir, bien en metálico, en valores o hipotecarlas.

d) Informar sobre las incidencias derivadas del cumplimiento de las obligaciones contraídas por dichas entidades con arreglo a la legislación del ramo.

e) Tramitar los expedientes para la fijación anual de los derechos de registro, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 27 de agosto de 1900 y disposiciones complementarias.

f) Examinar las Memorias y balances que anualmente deben presentar las entidades aseguradoras, formulando las observaciones o reparos que estime pertinentes, previo informe de los Servicios Centrales del Registro, y, en su caso, de la Inspección Técnica de Previsión Social.

g) Recabar de las repetidas entidades aseguradoras la remisión de las estadísticas de este Seguro, para tramitarlas a la Sección de Coordinación de Estadísticas, afecta a la Subsecretaría del Departamento.

4) El Negociado de Legislación, Coordinación, Recursos y Sanciones tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Estudiar y preparar los proyectos de legislación del Seguro de Accidentes del Trabajo.

b) Evacuar las consultas que se formulen sobre interpretación y cumplimiento de las normas que el mismo comprende.

c) Mantener las relaciones administrativas de la Dirección con la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo en la materia que no afecte a los demás Negociados, e informar a la Superioridad sobre todo cuanto se refiera a la organización y funcionamiento de los Servicios que tenga establecidos y de los que en lo sucesivo establezca para la debida gestión del Seguro.

d) Conocer de la revisión de los balances anuales de dicha Caja, los planes de inversión y situación del Fondo de Garantía, así de las propuestas, comunicaciones y acuerdos del Instituto Nacional de Previsión y de su Consejo en cuanto se relacione con el Seguro de Accidentes del Trabajo.

e) Examinar e informar las propuestas de la Caja sobre implantación o modificación de tarifas, recabando los asesoramientos técnicos necesarios previamente a su aprobación por el Ministerio.

f) Informar las circulares que sobre ejecución de las disposiciones dimanadas del Ministerio acuerden publicar el Instituto Nacional de Previsión o la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo, y también la propaganda que acerca de dicho Seguro se efectúe por Prensa y radio.

g) Formular propuesta de resolución en los recursos de revisión de rentas e indemnizaciones y sobre declaración de Gran Invalído, interpuestos contra los acuerdos de la Caja Nacional.

h) Estudiar y proponer resolución en cuantos recursos y reclamaciones se formulen ante la Dirección General que no sean materias propias de los demás Negociados.

i) Formular propuestas de sanción a la vista de los expedientes de infracción incoados por la Inspección Técnica de Previsión Social, respecto de las instituciones, organismos y entidades que operen en el ramo del Seguro de Accidentes del Trabajo.

j) Informar sobre las propuestas de todo orden que formule la Inspección Técnica de

Previsión Social, dentro de su peculiar cometido.

k) Encomendar a la repetida Inspección la práctica de cuantas diligencias deba realizar en virtud de lo ordenado por la Dirección General, tanto en la esfera local como en la provincial, en virtud de la alta inspección reservada a este Ministerio sobre el Instituto Nacional de Previsión y de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo, en la materia relacionada con este Seguro Social, así como las que haya de efectuar cerca de las entidades aseguradoras a consecuencia de los expedientes tramitados por la Sección o de las reclamaciones que ante la Dirección se formulen.

l) Mantener la relación de la Dirección General con el Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo y con cualquier organismo relacionado con este Seguro, a cuyo efecto deberá dársele conocimiento de los acuerdos que adopten los respectivos Consejos directivos.

5) El Negociado de Capitalización entenderá:

a) En la tramitación de los expedientes, hasta la propuesta de resolución inclusive, sobre peticiones de capitalización de renta.

b) En cuantas incidencias tengan relación con dichos expedientes, evacuando las consultas que sobre los mismos se formulen.

6) El Negociado de Enfermedades Profesionales mantendrá las relaciones de la Dirección General con la Sección de Enfermedades Profesionales de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo, e interviendrá especialmente en los siguientes asuntos:

a) Estudio y preparación de la legislación sobre enfermedades profesionales y sus modificaciones.

b) Tramitar los expedientes de inclusión de nuevas industrias o trabajos en el Régimen especial de silicosis o de aseguramiento obligatorio de nuevas enfermedades profesionales, preparando las disposiciones que al efecto hayan de dictarse.

c) Informar y proponer sobre el reparto del costo de las indemnizaciones y de los porcentajes para gastos de administración que la Sección de Enfermedades Profesionales habrá de comunicar a la Dirección General, al mismo tiempo que los ponga de manifiesto a las empresas aseguradoras, así como en los recursos que contra dichos repartos puedan presentarse por las mencionadas empresas.

d) Estudiar las propuestas que las mismas empresas o la Caja Nacional formulen tendentes a mejorar las condiciones sanitarias de los obreros en cuanto, a su juicio, con venga al bien del Seguro.

e) Examinar las Memorias y balances que anualmente formule la Caja Nacional relativas a la Sección de que se trata.

f) En general, cuantas reclamaciones de carácter administrativo se formulen ante la Dirección General de Previsión o el Ministerio en cuanto afecte a la implantación o desarrollo del repetido Seguro.

g) Formular propuestas de resolución de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Junta administrativa en orden a la revisión de incapacidad y rentas.

7) Al responder:

a) Informe de rentas

b) El profesional de la legislación

c) Conocimiento, en médicos las entidades Trabajo ramo del

Art. 60

ro enten cación de y demás

tuciones cho Esta

protectora conociend

asuntos o dicho De

quiera otr

2) Con

1.º De

2.º De

Entidades

3) Con

y Protect

a) El

ro Popu

ción de

ción, tran

Cajas y

Estatutos

y balance

la Inspe

b) La

chivo soc

de ahor

morias, b

las Obras

y del m

y prést

c) La

para las

de las a

ciales de

d) El

posicione

hagan ne

sa del al

ner sus

e) La

Consultiv

cuarta d

4) Co

y de Rel

a) La

chivo do

lletos, re

ses, arti

terias de

pañía y

b) Co

nacional

c) Lo

del ahor

certámen

gresos, r

d) Cu

Junta Co

Ahorro F

Cajas de

7) Al Negociado de Asesoría Médica corresponderá:

- a) Informar en los recursos de revisión de rentas e indemnizaciones.
- b) El asesoramiento de índole técnica y profesional en las cuestiones relacionadas con la legislación de Accidentes del Trabajo.
- c) Conocer la organización y funcionamiento, en su aspecto técnico, de los servicios médicos y clínicos que tengan establecidos las entidades aseguradoras de Accidentes del Trabajo y los organismos oficiales de este ramo del Seguro.

Art. 60. 1) La Sección de Cajas de Ahorro entenderá en todo lo referente a la aplicación del Estatuto de 14 de marzo de 1933 y demás disposiciones concordantes, a las Instituciones benéfico-sociales definidas en dicho Estatuto y sobre las cuales ejerce el protectorado oficial el Ministerio de Trabajo, conociendo, asimismo, de todos los demás asuntos que otras disposiciones atribuyan a dicho Departamento, en relación con cualquiera otra clase de Instituciones de ahorro.

- 2) Constará de dos Negociados.
 - 1.º De Registro y Protectorado.
 - 2.º De Fomento y de Relaciones con otras Entidades.

3) Corresponderá al Negociado de Registro y Protectorado:

- a) El registro de Cajas Generales de Ahorro Popular y sus federaciones; la tramitación de cuanto afecte a la creación, agregación, transferencia, fusiones y liquidación de Cajas y la de los expedientes, aprobación de Estatutos y su reforma; examen de Memorias y balances, previo informe, en su caso, de la Inspección Técnica de Previsión Social.

b) La formación y ordenación de un archivo social documental de las Instituciones de ahorro y sus operaciones (Estatutos, Memorias, balances y cuentas de las Cajas y de las Obras Sociales y de Fomento del Ahorro y del modelaje para operaciones de ahorro y préstamos).

c) La preparación de la lista de valores para las Carteras de las Cajas y tramitación de las autorizaciones estatutariamente especiales de inversiones.

d) El estudio y preparación de las disposiciones especiales que las circunstancias hagan necesarias para la protección y defensa del ahorro y de las Cajas y para mantener sus prerrogativas y derechos especiales.

e) La Inspección, en relación con la Junta Consultiva, según lo que dispone la regla cuarta del artículo 49 del Estatuto citado.

4) Corresponderá al Negociado de Fomento y de Relaciones con otras entidades:

a) La formación y ordenación de un archivo doctrinal de la especialidad (libros, folletos, revistas y publicaciones de todas clases, artículos e informaciones) sobre materias de ahorro y obras de las Cajas de España y del extranjero.

b) Cooperar a la estadística del ahorro nacional.

c) Lo referente al fomento y propaganda del ahorro popular (premios, publicaciones, certámenes, cursillos, obras educativas, congresos, radio, cine).

d) Cuanto se refiera a la actuación de la Junta Consultiva de las Cajas Generales de Ahorro Popular y Confederación Española de Cajas de Ahorro Benéficas, como órgano del

protectorado oficial, con arreglo a los artículos 46 y concordantes del Estatuto.

e) Relaciones con el Instituto de Crédito de las Cajas e Instituto Internacional del Ahorro.

f) Cuantas otras funciones competen al Ministerio, en relación con otras instituciones de ahorro.

Art. 61. 1) Corresponderá a la Sección de Cooperación el Registro, reglamentación y funcionamiento de las Sociedades constituidas por la reunión de personas naturales o jurídicas que se obliguen a aunar sus esfuerzos con capital variable y sin ánimo de lucro, al objeto de lograr fines comunes y de orden económico-social, sometidos expresamente a las disposiciones de la Ley de Cooperación.

2) Se organizará en los cuatro Negociados siguientes:

- 1.º Asuntos generales.
- 2.º Cooperativas del Campo y Frente de Juventudes.

3.º Cooperativas de Consumo, del Mar y de Viviendas Protegidas.

4.º Cooperativas Industriales, de Artesanía y de Crédito.

3) El Negociado primero tendrá a su cargo el registro y fichero de todas las Cooperativas y aprobación de las Memorias y balances presentados por las mismas; la alta inspección en la forma que disponga la Superioridad y, en general, todos cuantos asuntos se relacionen con su liquidación, disolución y certificados de inscripción, etc.

4) Corresponderá a los Negociados segundo, tercero y cuarto realizar el estudio, aprobación, inscripción y formulación de reparos de los Reglamentos o Estatutos presentados por las Cooperativas e informados por la Obra Sindical de Cooperación de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Art. 62. 1) Corresponderá a la Sección de Montepíos y Mutualidades el registro, reglamentación y funcionamiento de las Asociaciones que con aquella denominación u otra diferente y sin ánimo de lucro ejerzan una modalidad de previsión de carácter social o benéfico, encaminada a proteger a sus asociados o a sus bienes contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito y previsible a los que están expuestos, mediante aportaciones directas de los asociados o procedentes de otras entidades o personas protectoras.

2) La Sección se organizará en los cuatro Negociados siguientes:

- 1.º Registro.
- 2.º Reglamentación.
- 3.º Funcionamiento.
- 4.º Financiero.

3) Corresponderá al Negociado de Registro todo lo concerniente a la entrada, salida y distribución de documentos; la correspondencia y comunicación al Ministerio y demás órganos de la Administración de los asuntos que se le encomienden a través de las jerarquías y organismos competentes; la inscripción en el Registro oficial de los Montepíos y Mutualidades; la estadística de dichas entidades y el archivo e información.

4) El Negociado de Reglamentación tendrá a su cargo el examen de Estatutos y Reglamentos; la formulación de reparos y modificaciones de los mismos; la clasificación de las entidades, su disolución y la creación de

Federaciones, fusiones, agrupaciones y la Confederación Nacional.

5) Corresponderá al Negociado de Funcionamiento la vigilancia del funcionamiento de los Montepíos y Mutualidades, así como de las Agrupaciones y Federaciones; las relaciones con la Inspección; propuestas de sanciones, estudio de los recursos, examen de las Juntas y aplicación del derecho de veto; celebración de las Juntas directivas y generales y el estudio y propuesta sobre suspensión de acuerdos.

6) Al Negociado Financiero le corresponderá el examen de Memorias, balances e inventarios; contabilidad de los Montepíos y Mutualidades, situación de sus fondos, inversiones, fijación de cuotas de socios y modificación de las mismas, reaseguro de las Federaciones y de la Confederación, liquidación en caso de disolución, régimen actuarial, liquidación de los derechos de inscripción y registro, estadísticas financieras e informes financieros sobre fusiones.

Art. 63. 1) La Sección de Familias Numerosas tendrá a su cargo cuanto se relacione con la aplicación de la protección otorgada por el Estado a los cabezas de familia numerosa.

2) Dicha Sección se organizará en los tres Negociados siguientes:

- 1.º Asuntos generales.
- 2.º Intervención.
- 3.º Estadística y Resoluciones.

3) Corresponderá al Negociado primero la inscripción en los libros correspondientes de todos los documentos oficiales que tengan entrada y salida en la Sección, y en cuanto a los de entrada, su clasificación y distribución; la custodia, clasificación y manejo de los ficheros de la Sección; el archivo de los expedientes cuya tramitación estuviere concluida, clasificándolos por materias, y por las demás rúbricas que se estimen procedentes; la custodia del material de todas clases y la formulación de propuestas para su adquisición y conservación.

4) El Negociado de Intervención tendrá a su cargo el control de los expedientes confeccionados en provincias; la recepción, el visto bueno del Jefe del trabajo útil admitido para que se puedan hacer efectivos los devengos; la propuesta de concesión o denegación de beneficios que correspondan en cada expediente, la clasificación y distribución de los expedientes, llevando cuenta y razón de las entregas; la recogida de la labor de los destajistas de Madrid, controlando la misma; la exigencia en los plazos previstos de los estados de rendimiento de todo el personal de la Sección y del de provincias que tramite los asuntos de familias numerosas; la confección de un resumen diario acreditativo del aumento o disminución de tales redimientes, y la propuesta de las medidas conducentes a la buena marcha y eficiencia del rendimiento en cuestión.

5) El Negociado de Estadística y Resoluciones realizará los trabajos de estadística de clasificación de las familias beneficiarias por zonas geográficas, categorías, número de hijos, etc., y los estudios demográficos que se deriven de dichos particulares; confeccionará la estadística de toda la Sección y estudiará

y propondrá la resolución procedente de las consultas que se formulen sobre alcance, interpretación y aplicación de los preceptos legales de protección a las familias numerosas; entenderá en todas aquellas otras cuestiones que no estén específicamente adscritas al cometido de otros Negociados, e intervendrá en lo relativo a sanciones y exigencia de responsabilidades establecidas en los preceptos reglamentarios, informando, a tal efecto, las propuestas que eleven las Delegaciones de Trabajo.

Art. 64. Corresponderá a la Sección de Recursos de Previsión:

a) Conocer de los recursos que interpongan los interesados contra las actas y liquidaciones de la Inspección Nacional del Trabajo.

b) Entender de los recursos que formulen los empresarios contra los acuerdos de sanción impuesta por los Inspectores de Trabajo por incumplimiento de las disposiciones sobre Seguros Sociales.

c) Las cuestiones que planteen los interesados en la aplicación del Seguro de Accidentes del Trabajo en la Industria, en relación con estos supuestos: disconformidad del asociado moroso sobre la existencia o cuantía del descubierto fijado por la Mutualidad a qua pertenezca; reclamaciones que surjan después de declarar la incapacidad o el derecho a renta del accidentado o sus derechohabientes y recursos contra las sanciones por incumplimiento de la Ley y Reglamento de Accidentes de Trabajo.

d) Las cuestiones de naturaleza análoga que se deriven de la aplicación del Régimen de Subsidios Familiares.

e) De todos aquellos recursos y reclamaciones encomendados a la Dirección General por el Decreto de 6 de febrero de 1939, a excepción de las cuestiones de hecho sobre accidentes de trabajo que corresponderán a la Sección de este nombre, o sea: entrega de capital en vez de renta a instancia del accidentado o de sus derechohabientes; suplemento de pensión a los grandes inválidos por accidente del trabajo; recursos del personal accidentado contra las decisiones de la Caja Nacional respecto a intervenciones quirúrgicas y contra los fallos de dicho Organismo sobre revisión de incapacidades o indemnizaciones.

Art. 65. La Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Preparar los proyectos que puedan afectar a la modificación legislativa del Seguro de Enfermedad; conocer todas las cuestiones relativas al personal facultativo de Médicos y Farmacéuticos y al auxiliar de Practicantes y Matronas al servicio del Seguro, tanto si está adscrita a las entidades colaboradoras como a la Caja Nacional; la determinación de zonas, sectores, escalas, nombramientos, traslados y concursos del citado personal; recoger los acuerdos, trabajos y propuestas de la Comisión creada por Orden de 18 de mayo de 1950, que será modificada en la forma que las disposiciones procedentes determinen.

b) Intervenir en los expedientes de declaración de las entidades colaboradoras del Seguro de Enfermedad, sean Mutualidades, Montepíos y Organismos de la comunidad sindi-

cal, o de
quen la m
vando a t
entidades
tos que re
den econó
llos otros
Ejercerá a
fiere a los
Compañías
cierto, e i
tra los o
interponga
artículo 17
bre de 194

c) Las
recepción G
nal de Pr
Entidades
Sindicales
Seguro de
tendrá at
misaría de
Seguro O
tulo Naci
acuerdo c
el conoci
instalacion
objeto po
grada po
precisas l
finalidad.

d) Aqu
con el Se
por el Mi
ción Gene
Art. 66.
sin perjui
darán ads
guero:

a) El 7
tículos 14
los Minist
31 de ene

b) El
acceso a
liares del
Decreto d

c) La
lada por

d) La
Orden co

e) La
reserva d
que creó
de 10 de

Art. 67.
Sanitarios
nizada po
conforme
Reglame
que el pe
servando,
funcionar
crita a la
Enfermed

2) A
las funci
de 11 de
de febre
pudieran

3) Se
cional del

cal, o de cualquier otro carácter que practiquen la modalidad de régimen concertado, llevando a tal objeto el registro oficial de dichas entidades y reclamando los datos y documentos que reflejen su actividad, tanto en el orden económico como en el asistencial y aquellos otros antecedentes que interese conocer. Ejercerá análogas funciones por lo que se refiere a los Igualatorios, Cajas de Empresa y Compañías Mercantiles en régimen de concierto, e intervendrá en los recursos que contra los organismos rectores del Seguro se interpongan al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de 11 de noviembre de 1943.

c) Las relaciones del Seguro con la Dirección General de Sanidad, Instituto Nacional de Previsión, Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social, los Servicios Sindicales y las Jefaturas Provinciales del Seguro de Enfermedad. De manera especial tendrá atribuida la coordinación con la Comisaría del Plan Nacional de Instalaciones del Seguro Obligatorio de Enfermedad del Instituto Nacional de Previsión, efectuando, de acuerdo con ellas, los estudios precisos para el conocimiento y posible utilización de las instalaciones provisionales existentes, a cuyo objeto podrá establecer una Comisión integrada por las representaciones que estime precisas para el mejor cumplimiento de tal finalidad.

d) Aquellos otros cometidos relacionados con el Seguro que pudieran serle confiados por el Ministerio de Trabajo o por la Dirección General de Previsión, en su caso.

Art. 66. A los efectos administrativos, y sin perjuicio de su peculiar organización, quedarán adscritos a la Jefatura Nacional del Seguro:

a) El Tribunal Médico regulado por los artículos 145 y 146 de la Orden conjunta de los Ministerios de Gobernación y Trabajo de 31 de enero de 1949.

b) El Tribunal encargado de juzgar el acceso a las escalas de Facultativos y Auxiliares del Seguro de Enfermedad, creado por Decreto de 20 de enero de 1950.

c) La Comisión Asesora de Médicos regulada por Orden de 23 de octubre de 1947.

d) La Comisión Mixta Asesora creada por Orden comunicada de 18 de mayo de 1950.

e) La Comisión Rectora de los Fondos de reserva del Seguro Obligatorio de Enfermedad que creó la Orden del Ministerio de Trabajo de 10 de febrero de 1948.

Art. 67. 1) La Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad, organizada por el Instituto Nacional de Previsión, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Seguro, y sin perjuicio de que el personal que lo integra continúe conservando, a todos los efectos, la condición de funcionarios del citado Instituto, quedará adscrita a la Jefatura Nacional del Seguro de Enfermedad, de la que dependerá directamente.

2) A la citada Inspección corresponderán las funciones que le asignan el Reglamento de 11 de noviembre de 1943 y la Orden de 19 de febrero de 1946, con las modificaciones que pudieran acordarse.

3) Se adscribirá también a la Jefatura Nacional del Seguro de Enfermedad el número

suficiente de Inspectores Técnicos de Previsión Social para que, a las órdenes directas de dicha Jefatura, realicen los cometidos específicos que, en relación con el Seguro, les competen, tanto sobre el Instituto Nacional de Previsión, como sobre las entidades concertadas.

Art. 68. El Jefe Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad, llevará, dentro de su competencia, la representación de la Dirección General de Previsión en todos los asuntos o actividades relacionados con el citado Seguro, sin más preeminencia que la que corresponde al Ministerio de Trabajo o dicha Dirección General. Del mismo modo asumirá las relaciones con los organismos oficiales ajenos al Ministerio de Trabajo, con el Instituto Nacional de Previsión o cualquiera otros, en cuanto afecta al Seguro Obligatorio de Enfermedad, siempre que no estén atribuidas a organismos de superior competencia.

Art. 69. 1) Competen al Jefe nacional del Seguro de Enfermedad:

a) La jefatura de todo el personal encuadrado en este Organismo, cualquiera que sea la dependencia administrativa del Cuerpo a que pertenece.

b) La del personal del Instituto Nacional de Previsión que se estime precisa para efectuar el enlace administrativo con la misión de afiliación encomendada a aquel organismo.

Ambas facultades se entienden sin perjuicio de las que correspondan a los superiores jerárquicos de los Cuerpos a que pertenezca el expresado personal.

c) La de las Juntas provinciales del Seguro Obligatorio de Enfermedad reguladas por el artículo séptimo del Decreto de 21 de julio de 1950 (Ref. 656/50) y que se desarrollan en la Orden de 18 de diciembre del mismo año.

2) Asimismo se le atribuyen:

a) La resolución de los asuntos y expedientes cuyo conocimiento y competencia no esté conferido a la Dirección General de Previsión o al Ministerio de Trabajo.

b) La petición de informes de todas clases a Organismos relacionados con el Seguro Obligatorio de Enfermedad.

c) La Inspección Médica, en nombre del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Previsión, de la asistencia en los servicios sanitarios del Seguro directo del Instituto Nacional de Previsión, sean de carácter central, provincial o local; la Inspección e intervención de los servicios sanitarios de cualquier otro organismo que practique el Seguro de Enfermedad.

d) Aprobación de todos los proyectos, modificaciones y ampliaciones de instalaciones sanitarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad no incluido en el Plan Nacional, y revisión de las existentes a fin de determinar su ulterior aprovechamiento.

e) Proponer a la Dirección General de Previsión las modificaciones, cierres y clausura definitiva de las instalaciones sanitarias, previamente autorizadas, que no reúnan condiciones para la normal prestación de la asistencia.

f) La adopción de medidas urgentes y excepcionales que demanden las necesidades asistenciales, sin perjuicio de solicitar inmediata ratificación de la Dirección General de Previsión.

de este personal, expedientes, destino, sanciones, etc.

El segundo Negociado se encargará del régimen de los desplazamientos del personal de la Inspección, de la situación y fijación de créditos necesarios; propondrá el modelaje propio de la Inspección, sus necesidades y distribuciones, y servirá de nexo de unión entre las otras Subsecciones.

La Subsección cuarta estará dividida en dos Negociados:

Primero, Médico.

Segundo, Auxiliares Sanitarios.

Cada uno de estos Negociados llevará lo referente al nombramiento de personal, situación, expedientes, concursos, adscripción de asegurados, distribución de personal sanitario en zonas o sectores de actuación, fijación de plantillas para todas las Instituciones del Seguro, actualización de las escalas y asuntos relacionados directamente con tales incidencias y reclamación de honorarios.

Art. 74. La Sección cuarta, Inspección Técnica de Previsión Social, realizará, bajo la directa dependencia del Jefe nacional, las funciones propias de su cometido, de acuerdo con el artículo sexto del Decreto de 21 de julio de 1950, cerca del Instituto Nacional de Previsión, Entidades y Organismos que actúen y colaboren en el Seguro de Enfermedad, ejecutará las órdenes sobre visitas e informes que pudieran acordarse por aquellas Jefaturas, y propondrá las sanciones o medidas que se deriven de los expedientes incoados.

Art. 75. La Sección quinta, Ordenación Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad, constará de tres Subsecciones:

1.ª Servicios Sanitarios y Farmacéuticos.

2.ª Especialización, Divulgación y Estadística Sanitaria.

3.ª Maternología-Pediatría y Puericultura.

La primera Subsección constará de tres Negociados:

Al Negociado primero corresponde la confección, estudio, ordenación y funcionamiento general de los Servicios Sanitarios, especialidades médicas; la relación y coordinación con los Organismos Sanitarios oficiales y particulares, y concierto con organizaciones que practiquen prestaciones sanitarias.

El Negociado segundo tendrá a su cargo el estudio del funcionamiento de las Instituciones Sanitarias del Seguro; Medicina Preventiva, Investigación Médico-social y Estadística Sanitaria.

El Negociado tercero llevará los estudios sobre la prestación farmacéutica en el Seguro Obligatorio de Enfermedad.

La Subsección segunda constará de dos Negociados:

El Negociado primero formalizará los cursos de especialización médica y asistencial del Seguro; los de formación y perfeccionamiento del personal sanitario que concretamente se le atribuyen.

El Negociado segundo tendrá por misión los cometidos de divulgación, propaganda y estadística sanitaria.

La Subsección tercera informará y realizará estudios demográficos, de morbilidad, medicina preventiva, investigación médico-social y estadística de las especialidades de maternología, pediatría y puericultura.

Art. 76. Las Jefaturas Provinciales del Seguro Obligatorio de Enfermedad, creadas por

el artículo séptimo del Decreto de 21 de julio de 1950, además de las funciones generales que se les atribuye tendrán cada provincia:

a) Las consideraciones honoríficas y jerárquicas del Jefe nacional, en cuya representación actúan.

b) Ejecutarán los acuerdos, normas e instrucciones de que se les dé traslado para su cumplimiento.

c) Formularán a la Jefatura Nacional cuantas propuestas estimen convenientes a la mejora del funcionamiento del Seguro Obligatorio de Enfermedad, tanto en el orden general como en el particular de su demarcación.

d) Informarán, previo asesoramiento de los Organos de la Inspección Sanitaria Provincial del Seguro, en todas las cuestiones, incidencias o reclamaciones que se susciten sobre el personal y asistencia sanitaria, asegurados, beneficiarios, empresas y entidades colaboradoras.

e) Las facultades que especial y concretamente les delegue el Jefe Nacional.

Art. 77. De conformidad con el apartado c) del artículo tercero del Decreto de 21 de julio de 1950, existirá en la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad, y bajo la Presidencia del Director general de Previsión, la Comisión Coordinadora de dicho Centro directivo con la Comisaría del Plan de Instalaciones del Seguro de Enfermedad del Instituto Nacional de Previsión.

Dicha Comisión estará presidida por el Director general de Previsión, y formarán parte de la misma, como Vocales, el Jefe nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad, el Director de Asistencia Sanitaria e Instalaciones del Seguro de Enfermedad del Instituto Nacional de Previsión, el Inspector nacional de Servicios Sanitarios, el Jefe de Ordenación Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad y el Jefe de la Asesoría de Proyectos de la Comisaría del Plan de Instalaciones.

Serán facultades de dicha Comisión:

1.ª Informar sobre las modificaciones que deban ser introducidas en el Plan Nacional, bien sea por supresión de instalaciones previstas o por inclusión de otras nuevas.

2.ª Informar sobre el aprovechamiento de las instalaciones sanitarias provisionales actualmente existentes, cualquiera que sea el Organismo oficial o Entidad Colaboradora a que pertenezcan, con el fin de que sean tenidos en cuenta a la fijación, por la Comisaría del Plan, los tipos de Residencia o ambulatorios que hayan de ser construidos.

3.ª Informar la prioridad de construcción o urgencia de aquellas instalaciones que la política social o sanitaria lo aconsejara; y

4.ª Aquellos cometidos que pudieran serle confiados por el Ministerio de Trabajo.

Los informes de la Comisión se elevarán al Ministerio de Trabajo, y la decisión que éste adopte tendrá carácter ejecutivo y se trasladará a la Jefatura Nacional y a la Comisaría del Plan Nacional de Instalaciones para su debido cumplimiento.

Art. 78. 1) Corresponde a la Inspección Técnica de Previsión Social la Inspección de las Entidades, Servicios, Organismos, Dependencias y Cajas que, en régimen de gestión directa o de simple colaboración, estén incluidas dentro del marco de la Previsión So-

cial obligatoria, así como también las de las respectivas Instituciones privadas que practiquen los Seguros Sociales libres, las Cooperativas, las Cajas de Ahorro y las Mutualidades y Montepíos regulados por la Ley de 6 de diciembre de 1941.

2) La Inspección estará regida por un Inspector general, que ostentará la jefatura, y constará, además, de los siguientes Organos:

- a) Inspección de Servicios.
- b) Secretaría general.
- c) Secciones de:
 - 1.ª Seguros y Subsidios Sociales en general.
 - 2.ª Mutualismo y Cooperación.
 - 3.ª Cajas de Ahorro.

Art. 79. Al Inspector general le corresponden las siguientes funciones:

- a) El despacho ordinario con la Superioridad, a la que informará de las materias que sean de la competencia de la Inspección proponiendo las medidas que hayan de dictarse.
- b) Organizar y dirigir las funciones inspectoras encomendadas a la Inspección reglamentariamente, a cuyo efecto cursará las órdenes e instrucciones que considere pertinentes.
- c) Despachar con los Jefes de las distintas Secciones los asuntos a ellas encomendados y evacuar las consultas que aquéllas formulen.
- d) Practicar, asistido de los Inspectores que libremente designe, las visitas que con carácter extraordinario se acuerden en el Instituto Nacional de Previsión, Instituto Social de la Marina y Organismos e Instituciones encargados de la gestión y administración del ahorro benéfico-social.

e) Instruir los oportunos expedientes, elevar las pertinentes propuestas a través de las Secciones de la Dirección General de Previsión a quienes corresponda el asunto por razón de su naturaleza, cursar las denuncias y formular los requisitos a que haya lugar.

f) Recibir y dar curso a las denuncias que se puedan formular contra los funcionarios de la Inspección, proponiendo, cuando proceda, la apertura del expediente oportuno.

g) Redactar una Memoria anual del Servicio en la que se recoja el resultado de la labor inspectora, formulando las propuestas que la experiencia aconseje, como consecuencia de las conclusiones que en ellas se articulen.

Art. 80. Serán funciones del Inspector Jefe de Servicios:

1.ª Sustituir al Inspector general en su ausencia, enfermedad o licencia, y ejercer las funciones que le fueran delegadas.

2.ª Ostentar la Jefatura de los enlaces del Cuerpo con los diversos Organismos y Servicios, dándoles unidad de criterio y actuación.

3.ª Despachar directamente con los Jefes de Sección, vigilando el más exacto cumplimiento por las diferentes Secciones de las órdenes emanadas de la Superioridad.

4.ª Resolver los asuntos de trámite y elevar a la Superioridad los que correspondan.

5.ª Transcribir a los Jefes de Sección las órdenes, consignas y orientaciones del Mando.

6.ª Resolver las consultas que por las Jefaturas de Sección le sean formuladas.

7.ª Preparar los informes que hayan de emitirse en cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero del Reglamento orgánico del Cuerpo. Este cometido corresponderá al

Inspector Jefe de primera de la Inspección Técnica de Previsión Social.

Art. 81. Las funciones del Inspector encargado de la Secretaría serán las siguientes:

1.ª Proveer cuando sea necesario para el debido funcionamiento del Registro y del archivo de documentos.

2.ª Cursar a las Secciones a que respectivamente correspondan los documentos que tengan entrada en la Inspección.

3.ª Centralizar los antecedentes y datos estadísticos facilitados por los diferentes Servicios de la Inspección para figurar en la Memoria de la misma, que deberá ser formulada todos los años por la Inspección General, conforme determina el artículo 17 del Reglamento orgánico.

4.ª Vigilar el cumplimiento de las funciones encomendadas al personal auxiliar.

5.ª Tramitar las peticiones de material y efectuar su administración.

Art. 82. Incumbe a los Inspectores Jefes de las referidas Secciones:

1.º Ejecutar y disponer lo necesario para que se cumplan sin dilación las órdenes e instrucciones recibidas del Inspector general.

2.º Distribuir el trabajo entre los Inspectores a sus órdenes y redactar los cuestionarios a que hayan de ajustarse las Inspecciones acordadas.

3.º Realizar aquellas inspecciones que, por la importancia que revistan, requieran su personal intervención, a juicio del Jefe de la Inspección.

4.º Tramitar los informes que se emitan con motivo de las inspecciones practicadas, cursando las propuestas que cada uno determine.

5.º Cursar las comunicaciones que procedan en ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por la Superioridad.

6.º Formalizar mensualmente las estadísticas de la labor realizada en la Sección y elevar al Inspector general, dentro de los primeros quince días de cada trimestre, una sucinta relación de aquellas materias que deban incluirse, a su juicio, en la Memoria anual de la Inspección.

Art. 83. Corresponde a los restantes Inspectores:

1.º La realización de las misiones propias de la Inspección que les sean encomendadas por sus superiores jerárquicos.

2.º Redactar los informes de los servicios que practiquen, señalando las infracciones e irregularidades que hubieran observado, y las medidas que, a su entender, deban adoptarse; y

3.º Elevar a sus Jefes respectivos las propuestas que crean pertinentes para el mayor rendimiento y eficacia de la función atribuida.

CAPITULO V

De la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo

Art. 84. Por la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo se vincula administrativa y disciplinariamente a este Ministerio la Magistratura del Trabajo como única Institución jurisdiccional contenciosa en la rama social del Derecho.

Art. 85. Para el cumplimiento de su misión,

la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo quedará organizada en la siguiente forma:

a) Servicio de Inspección General de las Magistraturas del Trabajo.

b) Sección de Personal.

c) Sección de Asuntos Generales y Régimen Interior.

Art. 86. El Servicio de Inspección General de las Magistraturas del Trabajo tendrán a su cargo el examen y funcionamiento de estos Organismos en todo el territorio nacional y el cuidado y desvelo por su constante perfeccionamiento.

A tal efecto:

a) Recibirá y tramitará las quejas y sugerencias que le fueran dirigidas por los particulares o por los funcionarios de las Magistraturas; y

b) Propondrá a la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo cuantas medidas considere necesarias para el perfeccionamiento de los Servicios.

Art. 87. Los medios de información de que habrá de valerse el Servicio de Inspección General de Magistraturas del Trabajo serán de dos clases: unos reglados y otros discrecionales.

Reglamentamente, este Servicio está obligado: 1.º A interesar de las Magistraturas del Trabajo estadísticas periódicas de los asuntos que se encuentran en tramitación; y

2.º A practicar visitas de inspección ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias, automáticamente, a todas las Magistraturas, cada cuatro meses; y las extraordinarias, cuando las necesidades del Servicio lo requieran, a juicio de la Dirección General.

Discrecionalmente, este Servicio podrá:

1.º Solicitar de las Magistraturas del Trabajo informes concretos respecto a cualquier expediente en trámite o terminado y sobre cualquier problema que guarde relación con la actividad de aquellos Organismos.

2.º Hacer a las Magistraturas del Trabajo las observaciones que proceda, encaminadas a la regularidad de los procedimientos, observancia de los plazos y celebración de los juicios en las horas y días señalados y con las formalidades que marca la Ley; todo ello sin intervenir en la dirección de los asuntos que tramiten dichas Magistraturas ni menoscabo de la independencia y responsabilidad de su Magistrados.

3.º Hacer a las Magistraturas del Trabajo las observaciones pertinentes respecto al cumplimiento de las órdenes de la Superioridad en relación con la forma de llevar los libros, depósitos y cuentas, y en cuanto se refiera a la custodia de archivos y documentos.

4.º Pedir a las Autoridades y particulares los datos, informaciones o declaraciones que estime convenientes a la función inspectora.

Art. 88. El Servicio de Inspección General de las Magistraturas del Trabajo redactará anualmente una Memoria, en la que dará cuenta, por cada Magistratura, del resultado de su labor durante dicho periodo de tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, evacuará todas las consultas e informes que, con respecto a la misión que le está confiada, le pida la Dirección General.

Art. 89. La Sección de Personal tendrá a su cargo:

a) La convocatoria de concursos para el ingreso en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo.

b) La preparación de las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Magistratura del Trabajo.

b) La preparación de las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Magistratura del Trabajo.

c) Las propuestas de nombramientos, traslados, ascensos, ceses, excedencias, licencias y jubilaciones de los Magistrados y Secretarios de Magistratura del Trabajo.

d) Las propuestas de nombramientos y ceses de los Magistrados de Trabajo suplentes, retribuidos y honorarios.

e) Las propuestas sobre nombramientos, traslados, ceses, excedencias y licencias de los funcionarios de los Cuerpos Técnico-Administrativo, Auxiliar y Subalterno del Ministerio de Trabajo, mientras presten sus servicios en la Dirección General de Jurisdicción, Tribunal Central y Magistraturas del Trabajo.

f) La preparación de los escalafones correspondientes a los Cuerpos de Magistrados y Secretarios de Magistratura de Trabajo y la tramitación e informe de cuantas reclamaciones se produzcan en relación con los mismos.

g) Las propuestas sobre derechos de los Magistrados y Secretarios de Magistraturas al percibo de los trienios que tienen reconocidos por la Ley.

h) Los informes sobre peticiones de compatibilidad de funciones y cargos que fueren promovidos por funcionarios dependientes de la Dirección General de Jurisdicción.

i) Formular a ésta cuantas sugerencias estime oportunas respecto a las necesidades de personal y su distribución dentro de los Servicios dependientes de ella.

Art. 90. La Sección de Asuntos Generales y Régimen Interior tendrá a su cargo:

a) Locales:

1.º Propuestas de alquileres.

2.º Instalaciones y traslados; y

3.º Conservación.

b) Material:

Tramitación de los expedientes de crédito y consignaciones presupuestarias concedidas para primeras instalaciones, material inventariable y no inventariable.

c) Personal:

Tramitación de las concesiones de dietas, desplazamientos y gastos de locomoción de los funcionarios dependientes de la Dirección General.

d) Servicios:

1.º Anticipos reintegrables.—Tramitación de las propuestas formuladas por las Magistraturas.

2.º Ejecuciones gubernativas en vía de apremio.—Tramitación de las peticiones y órdenes sobre suspensión y aplazamiento superior a un año de dichas ejecuciones.

3.º Ficheros y archivos.—Confección y custodia de los ficheros correspondientes a las reclamaciones contenciosas formuladas ante las Magistraturas de Madrid y archivo y custodia de los expedientes terminados.

4.º Biblioteca.—Vigilancia de su funcionamiento.

Art. 91. Para el cumplimiento de las funciones atribuidas a las Secciones de Personal

y Asuntos Generales y Régimen Interior se elevarán directamente a la Subsecretaría por la Dirección General las correspondientes propuestas, manteniendo en todo momento los Jefes de aquellas Secciones el necesario contacto con la Oficialía Mayor del Ministerio para la mayor eficacia de sus funciones.

CAPITULO VI

Otros Organismos del Ministerio

Art. 92. 1) Dependerán también de este Ministerio, y continuarán rigiéndose por sus respectivas disposiciones, los Organismos que a continuación se expresan:

- Instituto Nacional de Previsión.
- Instituto Nacional de la Vivienda.
- Instituto Social de la Marina.
- Junta Interministerial del Paro.
- Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo.
- Consejo Superior de Cámaras de la Propiedad Urbana.
- Junta Consultiva de Cajas de Ahorro.
- Sección de Trabajo de la Industria Textil Algodonera.
- Servicio de Montepíos y Mutualidades Laborales; y
- Asesoría Técnica de Previsión.
- 2) Es también Organismo autónomo del Ministerio el Servicio de Trabajos Portuarios, que dependerá de la Subsecretaría y tendrá su regulación especial.

CAPITULO VII

De las condiciones requeridas para ejercer jefatura

Art. 93. 1.º La Asesoría Jurídica estará a cargo de Abogados del Estado en servicio activo, nombrados por el Ministerio de Hacienda en el número que considere necesario.

2.º El Interventor Delegado de Hacienda será designado por dicho Departamento.

Art. 94. 1.º El Oficial Mayor y el Jefe de la Sección Central de Recursos y Recompensas serán libremente designados por el Ministro de entre los jefes de Administración del Cuerpo Técnico Administrativo del Departamento. Los nombramientos se harán mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, y los interesados, mientras desempeñen los referidos cargos, disfrutará la categoría y derechos que les reconozcan las disposiciones vigentes.

2.º El Oficial Mayor habrá de ostentar título académico o facultativo, y el Jefe de la Sección Central de Recursos tendrá que reunir la condición de Letrado.

3.º El Jefe de la Sección Central de Delegaciones de Trabajo será designado por Decreto, acordado en Consejo de Ministros, entre funcionarios de cualquiera de los Cuerpos Técnicos del Departamento, con la categoría mínima de Jefe de Administración o asimilada. Mientras desempeñe su cargo tendrá la categoría y derechos que le reconozcan las disposiciones vigentes.

4.º El Jefe de la Habilitación será nombrado de entre funcionarios de cualquiera de los Escalafones del Departamento.

5.º Los Jefes de las Secciones Central de Inspección del Trabajo y de Inspección de

Centros Regidos o Administrados por el Estado habrán de pertenecer necesariamente al Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo, y serán designados de entre los funcionarios que ostenten la categoría de Inspectores Técnicos generales.

6.º Los Jefes de las restantes Secciones dependientes de la Subsecretaría serán designados por ésta entre funcionarios que pertenezcan al Cuerpo Técnico Administrativo y tengan, al menos, categoría de Jefe de Negociado.

Art. 95. 1.º El Secretario general de la Dirección General de Trabajo ostentará la categoría de Subdirector general y tendrá la consideración que le reconozcan las disposiciones vigentes mientras desempeñe su cargo. Será designado, a propuesta del Director general, de entre funcionarios de cualquiera de los Cuerpos Técnicos del Ministerio que tengan categoría mínima de Jefes de Administración Civil o asimilada, y su nombramiento será por Decreto.

2.º El Jefe de la Sección de Prevención de Accidentes e Higiene del Trabajo habrá de pertenecer necesariamente al Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo.

3.º Los Jefes de las Secciones de Economatos, Normas Generales de Trabajo y Recursos de Trabajo podrán pertenecer a cualquiera de los Cuerpos Técnicos del Ministerio, debiendo reunir el último de ellos la condición de Letrado.

4.º El Jefe de la Secretaría Técnica de Política Laboral y los Asesores Técnicos de la misma también podrán pertenecer a cualquiera de los Cuerpos Técnicos del Departamento y tendrán que hallarse en posesión del título académico o facultativo superior.

5.º Los jefes de las Secciones de Asuntos Generales y Crisis, Emigración, Colocación y Trabajo de Extranjeros, pertenecerán al Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio.

6.º El Director general de Trabajo elevará a la Subsecretaría los nombres de los funcionarios a quienes proponga para ocupar las Jefaturas que quedan indicadas.

Art. 96. 1.º El Secretario general de la Dirección General de Previsión será designado por Decreto acordado en Consejo de Ministros de entre funcionarios del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio que sean, por lo menos, Jefes de Administración Civil. Ostentará la categoría de Subdirector general y tendrá la consideración que le reconozcan las disposiciones vigentes mientras desempeñe su cargo.

2.º El Jefe nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad será libremente designado, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.

3.º El Actuario del Ministerio será el Jefe de la Sección de Cálculos, Estudios Actuarios y Revisión de Balances.

4.º Los Jefes de las Secciones primera y segunda de la Jefatura Nacional del Seguro de Enfermedad habrán de pertenecer al Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio con la categoría mínima de Jefes de Administración Civil; la Jefatura de la Sección tercera estará atribuida al Jefe nacional de la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro; la de la cuarta, a un Inspector Técnico de Pre-

visión Social que sea, cuando menos, Inspector Jefe de tercera, y la de la Sección quinta corresponderá al Facultativo Médico designado por la Dirección General de Previsión, de conformidad con el artículo sexto del Decreto de 21 de julio de 1950.

5.º La Inspección Técnica de Previsión Social será regida por el Inspector general Jefe, y el Secretario general y los Jefes de las Secciones habrán de ostentar, cuando menos, la categoría de Inspectores Jefes de tercera.

6.º Los Jefes de todas las demás Secciones de la Dirección General de Previsión se elegirán entre funcionarios del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio. El de la Sección de Recursos habrá de ser, además, Letrado.

7.º Los nombramientos de Secretario general, de los Jefes a que se refiere el apartado sexto del presente artículo y de los relativos a los Jefes de las Secciones primera, segunda y cuarta del Seguro de Enfermedad serán propuestos a la Subsecretaría por el Director general de Previsión.

Art. 97. 1.º El Director general de Jurisdicción del Trabajo propondrá a la Subsecretaría los nombres de los Magistrados de Trabajo que hayan de ocupar los cargos de Inspectores generales de Magistratura y los de los Jefes de las Secciones de Personal y Asuntos Generales y Régimen Interior.

2.º Los Inspectores generales de Magistraturas habrán de figurar entre los Magistrados de Trabajo de primera categoría.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1.ª Continuará adscrito a la Subsecretaría del Ministerio el Servicio de Reincorporación de ex combatientes al Trabajo, mientras subsista la finalidad para que fué creado, y con las funciones señaladas al mismo en la Orden de 14 de octubre de 1937 y Decreto de 14 de octubre de 1938.

2.ª Queda autorizado el Ministro de Trabajo para dictar las normas de ejecución y desarrollo que exija la aplicación de este Reglamento y la adaptación de los Servicios a la organización que en el mismo se establezca. Sin embargo, cualquier modificación de Servicios del Departamento, bien sea total o parcial, tanto si supusiera ampliación, variación o supresión de alguno de ellos, habrá de realizarse por Decreto, a menos que exigiera la forma de Ley.

DISPOSICION TRANSITORIA

La Inspección General del Ministerio, que se suprime en este Decreto, continuará, no obstante, subsistiendo hasta la liquidación total de los asuntos que tiene pendientes, la cual habrá de quedar finalizada, como máximo, el 31 de diciembre del año en curso.

DISPOSICION FINAL

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este Decreto, y en especial y concretamente, los artículos 24 y concordantes del Reglamento de 13 de julio de 1940, en cuanto a dependencia administrativa de la Inspección de Trabajo; los artículos 11 y concordantes del Decreto de 8 de noviembre de 1946 por lo que respecta a or-

ganización administrativa de la Inspección Técnica de Previsión Social.

Quedan asimismo derogados en su totalidad los siguientes Decretos: 30 de octubre de 1935, 18 de agosto de 1939, 6 de diciembre de 1941, 14 de febrero de 1947, 12 de marzo de 1948, 1.ª de julio de 1949, 10 de febrero de 1950 y 3 de octubre del mismo año. Y las Ordenes de: 14 de septiembre de 1938, 22 de junio de 1939, 11 de noviembre de 1941, 13 de enero de 1942, 7 de febrero de 1942, 5 de agosto de 1943, 4 de septiembre de 1943, 17 de noviembre de 1943, 31 de enero de 1944, 29 de noviembre de 1944, 6 de junio de 1945, 11 de marzo de 1947 y 26 de marzo de 1947.

403 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 25 de septiembre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 277, del 3 de octubre de 1952.

I.—COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE.—Se aclaran diversas consultas sobre la Orden de 24 de septiembre de 1944, sobre los Comités de Seguridad e Higiene, en las Empresas de Construcción.

II.—TEXTO LITERAL.—Habiéndose planteado diversas consultas sobre la forma en que han de explicarse los preceptos que sobre Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción figuran en la Orden de 21 de septiembre de 1944, por la que se dispuso con carácter general la creación de dichos Comités en determinadas industrias y en el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado por Orden de 20 de mayo del corriente año (Ref. 235/52).

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le confiere el número tercero de la Orden últimamente citada, ha tenido a bien acordar lo siguiente:

1.º Los Centros de trabajo (obra, explotación o establecimiento) de las Empresas señaladas en el artículo primero del mencionado Reglamento, con 250 o más trabajadores, deberán contar con un Comité cuya composición será la señalada en el artículo sexto de la Orden de 21 de septiembre de 1944, y, además, el Vigilante de seguridad a que se refiere el artículo tercero del Reglamento de 20 de mayo próximo pasado. El Presidente será el Director del Centro o un alto cargo técnico (Ingeniero, Arquitecto que le represente o Técnico titulado).

2.º Los mencionados Centros de trabajo con más de 50 trabajadores y menos de 250 deberán contar con un Comité, cuya composición será la señalada en el artículo tercero del Reglamento de 20 de mayo del corriente año, y, además, el Vigilante de seguridad, siendo aconsejable la colaboración de un Médico de trabajo y de un Ingeniero de seguridad (Arquitecto o Técnico titulado, indistintamente) en las actividades del Comité.

3.º En los Centros de trabajo de dichas Empresas que tengan menos de 50 trabajadores, no es obligatoria la constitución del Comité y si solamente la existencia del Vi-

gilante de seguridad, conforme al artículo tercero del repetido Reglamento.

4.º La designación de los miembros que integran los Comités de seguridad se efectuará conforme al artículo sexto de la Orden de 21 de septiembre de 1944.

5.º Todos los Comités de Seguridad, a que se refieren los números primero y segundo de la presente resolución, deberán remitir anualmente la Memoria-resumen y estadísticas a que se refiere el artículo quinto de la Orden de 21 de septiembre de 1944, siéndoles, en general, de aplicación los preceptos contenidos en dicha Orden y en las normas dictadas para su aplicación en 4 de octubre del mismo año, con las salvedades a que se ha hecho mención.

6.º Cuando existan varios Centros de trabajo de la misma Empresa con menos de 50 trabajadores cada uno, pero que en su conjunto sumen 250 trabajadores, es conveniente y recomendable la constitución de un Comité que dirija y coordine la labor de seguridad e higiene en dichos Centros de trabajo.

7.º La presente resolución se insertará en el *Boletín Oficial del Estado* para conocimiento general.

404 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—MINAS DE CARBÓN.—MINAS DE PLOMO Y MINAS DE POTASA

Decreto del Ministerio del Ejército, de 26 de septiembre de 1952. *Boletín Oficial del Estado* núm. 288, del 14 de octubre de 1952.

I.—SERVICIO MILITAR.—Se excluye temporalmente del servicio militar activo a los mozos que en la fecha de su alistamiento militar se encuentren trabajando precisamente en el interior de las minas de carbón, plomo o potasa.

II.—TEXTO LITERAL.—La necesidad de resolver los problemas de abastecimiento nacional de minerales de carbón y plomo, originados por la insuficiente producción, motivó el año 1942 que el Ministerio de Industria y Comercio requiriera al del Ejército a fin de que los mineros en edad militar quedaran exceptuados del servicio activo para poder continuar trabajando en las minas.

El Decreto de 24 de julio del mencionado año fué el origen de esta legislación, que posteriormente fué extendida a las minas de potasa, y desde la indicada fecha diversas disposiciones complementarias han sido publicadas desarrollando dicho Decreto, que, supeditado al fin que lo inspiraba, dejó relegados otros extremos de importancia, como normas de inspección, medidas disciplinarias, sanciones, etc., en evitación de que subrepticamente los acogidos eludieran el cumplimiento de sus deberes militares sin beneficio alguno para la Nación.

La experiencia adquirida en los años transcurridos, la necesidad de unificar las múltiples disposiciones publicadas ajustándolas al Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, la conveniencia de mantener el ritmo creciente de la producción de los mencionados minerales, y el tratar de conseguir la cooperación entre los Ministerios de Ejército, Industria, Gobernación y de Trabajo afec-

tados por esta legislación, aconseja la publicación del presente Decreto, cuyo desarrollo queda diferido a la labor conjunta de los organismos correspondientes de los Ministerios mencionados.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros.

DISPONGO:

Artículo primero.—Exclusión temporal del servicio militar activo.

Los mozos que, en la fecha de su alistamiento militar, se encuentren trabajando precisamente en el interior de las minas de carbón, plomo o potasa, realizando cometidos de picadores, entibadores, barrenistas, camineros, vagoneros, ramperos y caballistas en su diversas categorías, así como los peones especialistas cuya jornada de trabajo sea realizada íntegra y exclusivamente en el interior de las minas, y desde la expresada fecha hasta la de incorporación a filas de sus reemplazos respectivos, continúen sin interrupción en los trabajos citados, quedarán excluidos temporalmente del servicio militar activo, considerados y clasificado de acuerdo con el Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, como separados temporalmente del contingente anual, ingresados en caja, quedando dispensados de comparecer personalmente ante los Ayuntamientos y organismos de reclutamiento, y siguiendo, caso de movilización, las vicisitudes de su reemplazo.

Artículo segundo.—Condiciones generales.—Será condición necesaria para disfrutar de los beneficios consignados en el artículo anterior, que así lo disponga la Orden de incorporación a filas del reemplazo anual y que se cumplan los requisitos establecidos en este Decreto e instrucciones que se publiquen para su desarrollo.

Artículo tercero.—Condiciones que afectan a las Empresas mineras.—Los beneficios antes citados alcanzarán solamente al personal mencionado en el artículo primero cuyas Empresas mineras hayan sido declaradas por el Ministerio de Industria con derecho a la concesión de tales beneficios a favor de sus obreros, por haber obtenido de sus minas una producción mínima anual fijada por dicho Ministerio, y que para las minas de lignito no será inferior a tres mil toneladas anuales.

Artículo cuarto.—Curso de las instancias.—Los interesados dirigirán sus solicitudes al Capitán General de la Región donde residan, por conducto de la Empresa minera, Ayuntamiento de su residencia y Caja de Reclutación correspondiente, con los documentos y en los plazos que señalen las instrucciones que se dicten para el desarrollo del presente Decreto. Las solicitudes serán resueltas, sin ulterior recurso, por los Capitanes Generales.

Artículo quinto.—Permanencia en las minas.—El personal acogido a este Decreto permanecerá trabajando en las minas hasta la fecha del pase a situación de reserva del reemplazo a que pertenezcan, cuyas vicisitudes seguirá en caso de movilización.

Artículo sexto.—Cese de los beneficios.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los beneficios concedidos por el presente Decreto se perderán por las siguientes causas:

Primera. Por renuncia voluntaria o faltas repetidas e injustificadas al trabajo, debi-

damente acreditadas. En estos casos, los reclutas se agregarán al primer reemplazo que se incorpore a filas, abonándoles, a efecto del servicio militar, la mitad del tiempo que hayan permanecido trabajando en las minas, acogidos a este Decreto.

Segunda. Por cambio de Empresa que no haya sido autorizada por la Comisión Regional de Movilización Industrial, o que, de haberse autorizado, no se haya incorporado el minero, dentro de los diez días siguientes, a la nueva Empresa. En este caso se procederá de acuerdo con lo consignado en el anterior apartado.

Tercera. Por incapacidad permanente, total o parcial, para el trabajo en el interior de la mina, pero que no inutilice para el servicio militar. En este caso se procederá como en el apartado primero, abonándoles la totalidad del tiempo referido.

Cuarta. Por resolución no voluntaria del contrato de trabajo. Si en el plazo de quince días no han encontrado trabajo en especialidad y Empresa que permitan continuar en el disfrute de los beneficios consignados en este Decreto, se procederá como en el apartado primero, siéndoles de abono el total del tiempo aludido.

Quinta. Por infracción deliberada y maliciosa de las disposiciones de este Decreto e instrucciones complementarias que para desarrollo del mismo se publiquen. En este caso se procederá como en el apartado primero, siendo destinados a Africa a un Cuerpo de disciplina, no siéndoles de abono el tiempo que fraudulentamente han permanecido disfrutando los beneficios de este Decreto.

Artículo séptimo.—Inspecciones.—Los Capitanes Generales velarán por el riguroso y exacto cumplimiento de este Decreto, y si lo consideran necesario, recabarán de personas, organismos y entidades les sean facilitados datos y antecedentes en relación con el personal acogido o que pretenda acogerse al presente Decreto y de sus Empresas correspondientes.

Podrán disponer sean realizadas visitas de inspección por personal dependiente de su Autoridad y solicitar, en casos concretos, sean efectuadas tales inspecciones por las Jefaturas de Minas correspondientes, Inspectores del Trabajo u organismos análogos.

Artículo octavo.—Sanciones.—Los mozos que fraudulentamente consigan acogerse al presente Decreto, sin perjuicio de las sanciones de cualquier orden que puedan corresponderles, cumplirán precisamente en Cuerpo de disciplina el servicio militar activo, sin abono alguno del tiempo que hayan permanecido trabajando en las minas o en las filas del Ejército.

Las Empresas mineras que de alguna manera faciliten que sus obreros se acojan indebidamente a este Decreto, sin perjuicio de las sanciones de otro orden que puedan corresponderles, serán sancionadas con multas de mil a diez mil pesetas por cada uno de los mozos indebidamente acogidos.

Las mencionadas multas se impondrán por los Gobernadores civiles de las provincias, sin perjuicio de otras que puedan ser impuestas por infracción de la legislación minera, social o de otro orden.

Artículo noveno.—Instrucciones complementarias.—Se autoriza a los Ministerios del Ejér-

cito, Industria, Trabajo y Gobernación para que, conjuntamente, dicten las disposiciones convenientes al desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Clausula derogatoria.—Quedan derogados el Decreto de 24 de julio de 1942, origen de esta legislación especial minera, y cuantos Decretos, Ordenes y demás disposiciones han sido publicados relativos a dicha legislación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Este Decreto no será de aplicación a los mineros que actualmente se encuentran acogidos a la legislación que ahora se deroga.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación y se aplicará a los individuos del reemplazo de 1953.

Tercera. En el término de sesenta días, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, será publicadas las instrucciones complementarias para el desarrollo del mismo antes mencionadas.

405 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—PLUS DE CARGAS FAMILIARES

Orden del Ministerio de Trabajo, de 16 de octubre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 292, del 18 de octubre de 1952.

I.—DENOMINACION Y LIMITE MAXIMO.—Se modifica la denominación de este plus que en lo sucesivo se denominará "plus familiar" y se suprime el tope máximo de percepción.

II.—TEXTO LITERAL.—La experiencia obtenida en la aplicación de la Orden de 29 de marzo de 1946 (Ref. 127/50), por la que se aprobaron las normas para la efectividad del llamado plus de cargas familiares, que fué modificada en su artículo 27 por la de 15 de diciembre de 1950 (Ref. 962/50), elevando el valor del punto que en aquélla se fijaba a los efectos de la distribución del exceso que resultase, aconseja suprimir las cifras topes que en esta última se consignan a fin de que se dé a la totalidad del fondo que constituye el indicado plus el destino real de ayuda a los trabajadores y sus familias, cumpliéndose plenamente de esta manera la finalidad que con dicha conquista social se perseguía. Justifica, asimismo, la conveniencia de adoptar tal medida, no sólo la circunstancia de que con ella se beneficia a los perceptores del plus, es decir, a aquellos trabajadores para los cuales se creó, sino también la consideración de que apenas se perjudica el resto del personal adscrito a la empresa, y menos aún, a los de inferior categoría y retribución, que son los más necesitados de protección, toda vez que distribuyéndose el exceso del fondo que integra el plus familiar en la parte que rebasa los topes que en la disposición antes aludida se señalan como máximo valor del punto, entre todo el personal, pero no por iguales partes sino en proporción a los sueldos que cada uno percibe, resulta indudable y las estadísticas así lo demuestran, que era escasísima la cuantía que por este concepto percibían los productores más modestos.

Por otra parte, se estima también procedente modificar la denominación de Plus de Cargas Familiares que figuraba en las Ordenes de 19 de junio de 1945 y de 29 de marzo de 1946 por la de Plus Familiar, con que ya se viene conociendo este devengo y que se ajusta más al alto fin para que fué instituido.

En su virtud,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º. El artículo 27 de la Orden de 29 de marzo de 1946 quedará redactado así:

"Los trabajadores con derecho al Plus Familiar lo harán efectivo sin limitación alguna en cuanto al valor del punto, obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Orden."

Art. 2.º. Se sustituye en la Orden de 29 de marzo de 1946 la expresión "Plus de Cargas Familiares" por la de "Plus Familiar", en cuyo sentido deberán entenderse modificados los artículos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 18, 19, 26, 30 y 32 de la misma.

Art. 3.º. La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.

406 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — NORMAS DE APLICACION GENERAL

Orden del Ministerio de Trabajo, de 11 de octubre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 293, del 19 de octubre de 1952.

I.—CUOTA ÚNICA.—Normas sobre cotización por razón de los trabajadores a los que no se dió de baja oportunamente.

II.—TEXTO LITERAL.—Al establecer el artículo octavo del Decreto de 7 de junio de 1949 (Ref. 150/49), que "las obligaciones del pago de la cuota única de los Seguros sociales obligatorios "subsisten" para la Empresa hasta el momento en que ponga en conocimiento del Instituto Nacional de Previsión la baja del productor a su servicio", da por supuesto, que el trabajador afectado se encontraba en situación de alta y con pleno derecho, por lo tanto, a las prestaciones de dichos Seguros, siendo en este caso natural que hubiere de cotizarse hasta la comunicación de la baja, aun cuando la fecha en que ésta se tramite no coincida con la del cese en el trabajo, porque hasta dicho momento se encuentra el asegurado cubierto por la asistencia de todo orden que tales regímenes conceden y reconocen a la baja efectos retroactivos superiores a los reglamentarios. implicaría serios perjuicios económicos al haber seguido otorgando prestaciones durante un período en que no hubo la contravirtida de cuotas ingresadas.

Sin embargo, no tiene lugar esta eventualidad al tratarse de Empresas que ocuparon durante períodos más o menos cortos a trabajadores sin acogerlos oportunamente a los citados Seguros sociales y que cuando ha transcurrido cierto tiempo desde la terminación de los trabajos son objeto de actas levantadas por las Inspecciones de Trabajo, condecoras de estas omisiones, que estable-

cen en las mismas la liquidación de las cuotas correspondientes a los salarios realmente percibidos por estos trabajadores.

Claro es, que esta última situación supone por parte de las Empresas una evidente infracción de la legislación social de muy marcado carácter, cuya impunidad habría de resultar altamente perjudicial no sólo para la sana política estatal en la materia, sino también para el derecho de los trabajadores que se verían privados de una protección ineludible, por lo que en estos casos procede, sin duda alguna imponer la adecuada sanción a los infractores, que sirva de medio coercitivo para evitarlos.

Por todo ello,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º. Cuando las Empresas, bien voluntariamente o como consecuencia de actas de la Inspección de Trabajo, presenten simultáneamente los partes de afiliación y baja de sus trabajadores en los Seguros sociales obligatorios, vendrán únicamente obligadas al pago de las cantidades levantadas al efecto, o de las cuotas correspondientes a los salarios declarados, incrementadas con el importe del recargo por demora establecido.

Con independencia, y sin perjuicio de lo anterior, dichas Empresas serán sancionadas de conformidad con el artículo 18 del Decreto de 7 de junio de 1949 y demás disposiciones aplicables.

Disposición transitoria. La presente Orden entrará en vigor en la fecha de su publicación. No obstante, se establece un plazo especial de treinta días naturales, a contar de la fecha de su aparición en el *Boletín Oficial del Estado* para que pueda solicitarse, de la Dirección General de Previsión, la revisión de las resoluciones de igual carácter que se hayan podido establecer, con otro criterio, hasta la fecha.

407 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD

Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, *Boletín Oficial del Estado* núm. 293, del 19 de octubre de 1952.

I.—ESTATUTOS.—Rectifica los errores advertidos en el texto oficial, referente al artículo 53.

II.—TEXTO LITERAL.—Habiéndose padecido error en el *Boletín Oficial del Estado* del día 13 de julio de 1950 en la inserción del Anexo de Prestaciones del Montepío de Agua, Gas y Electricidad, aprobado por Orden de 27 de junio del mismo año (Ref. 562,50), se rectifica a continuación:

El artículo 53 de dicho Anexo, por ser copia exacta del artículo noveno de la Orden de 16 de mayo de 1950 (*Boletín Oficial del Estado* del día 18), se entenderá redactado en su último párrafo de la siguiente forma:

"Los años servidos al Estado, Provincia, Municipio, Organismos oficiales o Corporaciones de Derecho público tendrán también la consideración de antigüedad laboral cuando los mismos no causen derecho a Pensión de Jubilación en los regímenes de Previsión que aquéllos tuvieran establecidos. No goza-

rán de esta concesión aquellos funcionarios que hayan sido separados de sus respectivos Cuerpos en virtud de expediente o por Tribunal de Honor."

408 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—COMERCIO EN GENERAL

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 10 de octubre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 294, del 20 de octubre de 1952.

I.—PRENDAS DE TRABAJO.—Casos en que ha de facilitarse prendas de trabajo a los mozos de almacenes de carbones y aceite.

II. TEXTO LITERAL.—El personal encuadrado en la vigente Reglamentación Nacional de Trabajo en el Comercio, con la categoría de Mozos que prestan su trabajo por cuenta de mayoristas de carbón y para vertederos y ayuda de almacenistas de aceite de destino, a que se refiere la Orden de 17 de julio de 1948 (Ref. 115/52), por razón misma de su específico trabajo tienen que prestar en la mayoría de los casos en condiciones tales que experimentan un desgaste muy notable en la ropa de su propiedad. En atención a esta circunstancia específica y de acuerdo con las facultades conferidas a este Centro directivo por el artículo segundo de la Orden de 10 de febrero de 1948 (Ref. 81/52), por la que se aprobó la Reglamentación Nacional de Trabajo en el Comercio.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.º El personal con la categoría de Mozos al servicio de los mayoristas de carbón que porten personalmente bultos del tipo de los que comúnmente se llaman serones y los vertedores y ayudas de los almacenistas de aceite de destino tendrán derecho a que se les suministre por sus empresarios, como prendas de trabajo un mono o buzo con una duración máxima de seis meses.

2.º Lo dispuesto en la presente resolución empezará a regir el día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.

409 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS

Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, de 16 de octubre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 296, del 22 de octubre de 1952.

I.—ESTATUTOS.—Aclara los arts. 62, 75 y 86 de los Estatutos de este Montepío.

II. RESOLUCION.—Vistas las consultas elevadas a este Servicio por diversas Mutualidades Siderometalúrgicas, solicitando aclaraciones a determinados artículos de los Estatutos aprobados por Orden de 31 de julio de 1952 (Ref. 399/52).

Este Servicio, en uso de las facultades que le están conferidas por el apartado b) del ar-

tículo 4.º del Decreto de 25 de mayo de 1951 (Ref. 242/51), ha tenido a bien resolver:

1.º La pensión de jubilación establecida en el artículo 62 de los referidos Estatutos se valorará exclusivamente por los años de edad cumplidos que tenga el interesado en el momento de causar la prestación, sin que se valoren las fracciones por encima de los años cumplidos que puedan existir.

2.º El último párrafo del artículo 62 deberá interpretarse de la siguiente manera: Se sumarán todos los días dejados de cotizar por el interesado y cada ciento ochenta días se considerará un semestre, descontándose un uno por 100 de la escala de jubilación que le pudiera corresponder. Las fracciones inferiores a ciento ochenta días se considerarán como semestres completos si alcanzasen la suma de treinta días, y se despreciarán en caso contrario.

3.º El artículo 75 deberá interpretarse de la forma siguiente:

1.—Si el padre no reúne las condiciones previstas en el apartado b) del mencionado artículo no tendrá derecho tampoco a pensión la madre ni los hermanos del mutualista fallecido, ya que éstos viven a expensas del padre.

2.—Que para que sea considerada la existencia de convivencia será preciso que los beneficiarios tengan como domicilio habitual el del mutualista fallecido y con una antelación mínima de un año.

4.º El Auxilio por Defunción se entregará a la viuda o hijos del fallecido que conviviesen con él habitualmente.

En caso de no convivir dichos familiares con el interesado, pero sí otros parientes o personas extrañas, se les entregará a éstos, siempre y cuando demuestren haber satisfecho los gastos ocasionados por el sepelio.

410 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 27 de septiembre de 1952, *B. O. del E.* núm. 302, de 28 de octubre de 1952.

I.—REVISION DE RENTAS.—Forma como debe ser computado el plazo para la revisión de las rentas por incapacidades permanentes y muerte.

II. TEXTO LITERAL.—Visto el escrito de esa Presidencia, en el que solicita a propuesta del Director Técnico de ese Instituto, que se determine con carácter general la forma como debe ser computado el plazo para la revisión de las rentas por incapacidades permanentes y muerte;

Teniendo en cuenta;

Que el tema propuesto afecta a la inteligencia del artículo 81 del Reglamento de Accidentes de Trabajo en la Industria, respecto al sentido y alcance que haya de darse a la locución final de su primer párrafo "...contados desde la fecha en que fueron constituidas", y centrando más la cuestión al sentido y alcance de sus últimos vocablos "fecha en que fueron constituidas", suscitándose a ese efecto la duda de si ha de entenderse que esta fecha es aquella en que real y efectivamente, esto es, materialmente se constituyen, o aque-

lla en que legalmente está ordenado se constituyan.

Que el problema interpretativo surge porque la constitución de la prima única a que el artículo 81 se refiere no es nunca en la práctica acto simultáneo a la fecha de alta del productor accidentado, demorándose en algunos casos más de lo debido aquella constitución, ora por tener que someter al siniestrado a reconocimientos médicos, ora por dificultades en la obtención de la documentación necesaria, cuando no por la circunstancia de que el productor tenga que acudir a la vía judicial para conseguir la declaración de su incapacidad, siendo muy variable en estos supuestos la diferencia de tiempo entre la fecha de alta y la de entrega a la Caja Nacional del capital coste de la renta.

Que para la correcta exégesis del precepto examinado, hay que penetrar en el sentido y alcance efectivos del mismo, atendiendo no sólo a su interpretación literal, sino también y principalmente a su interpretación racional o lógica, inquiriendo con ello el sentido que marca la finalidad perseguida, penetrando, en suma, en la razón y el fin del precepto; advirtiéndose, en primer término, que aunque el primer párrafo del artículo 81 se refiere concretamente a la revisión de rentas ("Todas las rentas por incapacidad permanente pueden ser revisadas..."), la revisión entraña propiamente la de la incapacidad, que es la principal, no siendo la de la renta, sino la consecuencia indeclinable de la primera.

Que, esto sentado, la razón del precepto descansa en el hecho de que, no obstante tratarse de incapacidades que, por su denominación de permanentes, debieran estimarse inamovibles, como los capitales-rentas que son su consecuencia indeclinable, la Ley ha previsto la posible variación que puede operarse en el estado funcional y sanitario del accidentado, así como en un posible error en el diagnóstico o en el pronóstico o bien la muerte del operario, supuestos todos que son precisamente los establecidos en el artículo 82 del propio Reglamento de accidentes para fundar la revisión.

Que de lo expuesto se deduce el carácter esencialmente médico más que jurídico de la institución revisora, y desde este punto de vista ha estimado el legislador que el plazo dentro del cual aquellas mutaciones de orden funcional y sanitario pueden tener lugar, es el de cinco años, contados, como es natural, desde la fecha de la declaración de la incapacidad, momento en el cual nace para el incapacitado el derecho al percibo de la indemnización que le corresponde con arreglo al grado de incapacidad que le ha sido reconocido.

Que de aceptarse el criterio que se deriva de una interpretación literal del precepto comentado, esto es, el de que los cinco años para instar la revisión de la incapacidad han de contarse desde el día en que realmente ha tenido lugar la constitución del capital-renta, se llegaría a una conclusión contraria a la que en el precepto aparece realmente querida, haciéndose depender el plazo de circunstancias accidentales que por su variabilidad darían ocasión a una inestabilidad del plazo, incidiéndose precisamente en los confusionismos e imprecisiones en la aplicación del precepto reglamentario que se trata de evitar.

Que aun cuando, según queda indicado, el derecho al percibo de la renta y su percepción efectiva, aunque con retraso, por parte del accidentado, se inicia en el momento mismo de la declaración de la incapacidad resultante del accidente, ante la imposibilidad de que por el desenvolvimiento de la mecánica administrativa establecida para la determinación del capital coste de la renta, la constitución de este capital coincida exactamente con la declaración de la incapacidad, el Reglamento de accidentes y sus disposiciones complementarias tienen regulada la forma y plazos dentro de los cuales ha de constituirse en la Caja Nacional el capital coste de las pensiones o rentas por incapacidad, y así el artículo 40 del dicho Reglamento dispone que una vez conformes ambas partes (patrono y obrero) sobre la incapacidad resultante, la Mutualidad o Compañía, o el patrono si tenía incumplida la obligación del seguro, ingresará en la Caja Nacional, en el plazo improrrogable de un mes, el capital preciso para constituir la renta correspondiente a la incapacidad declarada; y el Decreto de 13 de octubre de 1938 preceptúa en su artículo primero cómo ha de computar ese mes, determinándose en los artículos siguientes el procedimiento a seguir cuando las entidades aseguradoras no puedan procurarse la documentación completa dentro del plazo que anteriormente se señala, lo que da lugar a una calificación provisional, ampliándose en esos casos a tres meses el tiempo para ultimar el expediente y dándose otro mes más para que se efectúe el ingreso en la Caja Nacional del capital coste de la renta por la entidad aseguradora o persona a ello obligada: en los artículos sexto y séptimo del repetido Decreto se señalan las sanciones a imponer por la tardanza en el ingreso del capital en los plazos señalados, que pueden llegar hasta a una multa de 100 pesetas por día de retraso, siendo de advertir que en los aludidos casos servirá provisionalmente las pensiones el Fondo de Garantía.

Que para evitar que, dentro de la técnica del seguro, la demora en la constitución del capital tuviera que traducirse en un aumento de la prima o en una disminución de la renta, el artículo quinto de la Orden de 23 de julio de 1948 dispuso que durante ese período de demora se abonase como complemento del capital coste un interés que, en armonía con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de este Seguro, que estableció las bases técnicas para el cálculo de las rentas, se ha fijado en el 3.50 por 100.

Que, en su consecuencia, la legislación de accidentes tiene señalados plazos fijos dentro de los cuales deben necesaria e indefectiblemente constituirse en la Caja Nacional los capitales precisos para el abono a los beneficiarios de las rentas asignadas a su incapacidad y esos plazos son los que, como máximo, deben ser tenidos en cuenta y computados al tratarse de la dicha constitución, tanto más cuanto que lo contrario supondría el reconocimiento implícito de la legalidad de una infracción de los preceptos que regulan la tramitación y resolución definitiva de los expedientes—infracción, por otra parte, sancionada por los mismos preceptos—, siendo indudable que la infracción de un precepto obligatorio no puede crear